

UNIDAD 4

“El empate”- Breve historia contemporánea de la Argentina.

Heterogeneidad del frente que había coincidido para derribar al presidente Perón. Eduardo Leonardi encabezó el nuevo gobierno. Rodeado por los grupos católicos y por militares de tendencia nacionalista procuró establecer acuerdos con las principales fuerzas que habían sostenido a Perón, en particular los sindicalistas. En su opinión, el proyecto nacional y popular que aquél había fundado seguía teniendo vigencia, siempre que fuera convenientemente depurado de sus elementos corruptos o indeseables. Los dirigentes sindicales se mostraron contemporizadores con el gobierno, aunque en muchas barriadas obreras hubo manifestaciones espontáneas contra los militares. Los partidarios de Leonardi compartían el gobierno con representantes de los grupos antiperonistas más tradicionales, respaldados por la Marina. En el Ejército, luego de una lucha, se impusieron los partidarios de una política de abierta ruptura con el derribado régimen peronista. El 13 de noviembre, Leonardi debió renunciar, y fue reemplazado por el general Pedro Eugenio Aramburu, más afín a los sectores liberales y antiperonistas.

La fórmula con la que se había constituido aquel movimiento -autoritario, nacionalista y popular, nacido en las condiciones de la guerra y la inmediata posguerra- ya había hecho crisis hacia 1950, y Perón mismo inició en 1952 una reorientación sustancial de sus políticas para adecuarse a las nuevas circunstancias. Caído Perón, esas mismas fuerzas se convirtieron en un obstáculo insalvable para los intentos de sus sucesores, que declaraban querer reconstruir una convivencia democrática perdida hacía ya mucho tiempo, pero también se proponían reordenar sustancialmente la sociedad y la economía.

Las consignas de la Revolución Libertadora en favor de la democracia coincidían con las tendencias políticas de Occidente, donde la democracia liberal dividía claramente las aguas con el Este totalitario. Ese despliegue del Estado intervencionista y benefactor, acompañó a una integración liberalizada de las relaciones económicas en el mundo capitalistas. En 1947, los acuerdos monetarios de Bretton Woods establecieron el patrón dólar y los capitales volvieron a fluir libremente por el mundo. Las áreas cerradas fueron desapareciendo y las grandes empresas comenzaron a instalarse en los mercados antes vedados. Para los países cuyas economías habían crecido hacia adentro cuidadosamente protegidas, el Fondo Monetario Internacional propuso políticas llamadas “ortodoxas”: estabilizar la moneda abandonando la emisión fiscal, dejar de subvencionar a los sectores “artificiales” y estimular las actividades de exportación tradicionales. No obstante, progresivamente empezó a formularse una política alternativa, elaborada sobre todo en el ámbito de la Comisión Económica para América Latina: los países “desarrollados” podían ayudar a los “subdesarrollados” a eliminar los factores de atraso mediante adecuadas inversiones en los sectores clave, que estos acompañarían con reformas “estructurales”, como la reforma agraria. Podía pensarse que ambas estrategias eran en última instancia complementarias, pero en lo inmediato tenían corolarios políticos muy diferentes: la primera llevaba a revitalizar a los viejos aliados, los sectores oligárquicos, quizá a las dictaduras, la segunda impulsaba cambios profundos: una “modernización” de la sociedad que se coronaría con el establecimiento de democracias estables, similares a las de los países desarrollados.

Luego de 1955, en la Argentina la apertura y la modernización fueron valores compartidos, pero las herramientas de esa transformación generaron una amplia polémica entre quienes confiaban en el capital extranjero y quienes desconfiaban de él. Algunos sectores empresariales locales descubrieron las ventajas de la asociación, pero otros, crecidos y consolidados al amparo de la protección estatal, aspiraron a ponerle trabas, y encontraron eco no solo en los nacionalistas o en las izquierdas, sino en la mayoría de las fuerzas políticas.

Los empresarios, nacionales o extranjeros, coincidían en que cualquier modernización debía modificar el estatus logrado por los trabajadores durante el peronismo. Esto implicaba restringir el poder de los sindicatos, y también el de los trabajadores. Recortar los ingresos y recuperar la autoridad patronal eran los puntos salientes de una actitud más general contra la situación de mayor igualdad social lograda por los trabajadores, la peculiar práctica de la ciudadanía en la que se había fundado el peronismo.

Se trataba de una clase obrera madura, bien defendida en un mercado de trabajo que se acercaba a la situación de pleno empleo, homogénea y con una clara identidad social y política. Esto resultó decisivo, debido a la indisoluble identificación de los trabajadores con el peronismo. La exclusión del peronismo de la política fue para los vencedores de 1955 el requisito para poder operar esa transformación en las relaciones de la sociedad, y a la vez la fuente de mayores dificultades. Entre las fuerzas sociales embarcadas en la transformación, que no habían terminado de definir sus objetivos, primacías y alianzas, y las antiguas, que conservaban una importante capacidad de resistencia, se produjo una situación “de empate”.

Tempranamente aparecía un conflicto entre la modernización y la democracia, una dificultad para conciliar las dos exigencias principales del mundo de las posguerra. Pero en lo inmediato no se lo interpretó así. La propuesta de proscribir al peronismo, que se impuso rápido en el gobierno de la Revolución Libertadora, se decidió no tanto en nombre de la racionalidad capitalista como en el de la regeneración democrática que el mundo alentaba. La proscripción del peronismo, y con ella la de los trabajadores, definió una escena política ficticia, ilegítima y constitutivamente inestable, que abrió el camino a la pugna -no resuelta- entre las grandes fuerzas corporativas.

El general Aramburu, que encabezó el gobierno provisional hasta 1958, asumió plenamente la decisión de desmontar el aparato peronista. El Partido Peronista fue disuelto y se intervinieron la Confederación General del Trabajo y los sindicatos, puestos a cargo de oficiales de las Fuerzas Armadas. Gran cantidad de dirigentes políticos y sindicales fueron detenidos. La administración pública y las universidades fueron depuradas de peronistas y se controlaron ferreamente los medios de comunicación. Se prohibió cualquier propaganda favorable al peronismo, así como la mera mención del nombre de quien, desde entonces, empezó a ser designado como el “tirano profugo” o el “dictador depuesto”.

Esta política fue respaldada por la Marina, convertida en el bastión del antiperonismo, pero surgieron dudas y divisiones en el Ejército, donde muchos oficiales habían acompañado a Perón casi hasta el último momento. Las discrepancias se agravaron por un problema profesional -la reincorporación de los oficiales dados de baja en los últimos años por razones políticas-. El 9 de junio de 1956, un grupo de oficiales peronistas realizó un levantamiento; contaba con el apoyo de muchos grupos civiles y aprovechaba un clima de descontento y movilización gremial. El gobierno lo reprimió con desusada violencia, ordenando el fusilamiento de muchos civiles y de los principales jefes militares. Desde entonces, las depuraciones de oficiales fueron frecuentes, y poco a poco el grupo más decididamente antiperonista fue ganando el control del Ejército.

Quiénes sobrevivieron se adecuaron rápidamente a las nuevas circunstancias y abrazaron el credo liberal y democrático por entonces dominante, al que agregaron un nuevo anticomunismo, a tono con la vinculación más estrecha del país con Occidente.

Los militares se propusieron compartir el gobierno con los civiles y transferírselo tan pronto como fuera posible. Se ilusionaron con una democracia limitada a los democráticos probados, y convocaron a los partidos que compartían el “pacto de proscripción” a integrar la Junta Consultiva, una suerte de Parlamento sin poder de decisión, presidida por el vicepresidente Rojas. El acuerdo incluía todas las tendencias del frente civil, con excepción de los comunistas, desde las más conservadoras a las más progresistas. Estas últimas dominaron en las universidades, pero pronto se enfrentaron con el gobierno cuando este propuso autorizar la existencia de universidades privadas, según lo demandaba la Iglesia.

En política económica hubo una parecida ambigüedad. Raúl Prebisch, mentor de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), elaboró un plan que combinaba algunos principios de la nueva doctrina con un programa más ortodoxo de estabilización y liberalización. Los instrumentos que el Estado tenía para intervenir -el Instituto Argentino de Promoción de Intercambio o el manejo de los depósitos bancarios- empezaron a ser desmontados. Se devaluó el peso y el sector agrario recibió un importante estímulo, con lo que se confiaba equilibrar las cuentas externas. Se aprobó el ingreso de la Argentina al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, y se obtuvo la ayuda de estos organismos para los problemas más inmediatos. La política social fue más definida. Combinando eficiencia y represión, patronos y gerentes empezaron a recuperar

autoridad en las plantas. Las convenciones colectivas fueron suspendidas, y en el marco de una fuerte crisis cíclica en 1956, los salarios reales cayeron fuertemente en 1957.

Allí, se encuentra una de las fuentes de la firme resistencia de los trabajadores. Algunos se limitaron a cantar la Marcha Peronista en los estadios de fútbol o a escribir en las paredes "Peron vuelve". Pero también las huelgas fueron numerosas y combativas. Sindicalistas y terroristas adherían en el fondo a estrategias divergentes y hasta enfrentadas, pero en el clima de la común represión que sufrieron unos y otros estas divergencias no afloraron. La política de los vencedores logró en cambio soldar definitivamente la identificación entre los trabajadores y un peronismo que de momento tenía más de sentimiento que de movimiento orgánico. Como en la década anterior, no se trataba de una doctrina revolucionaria o subversiva, pero se hizo más definidamente obrera. Aspiraban al funcionamiento normal y correcto de los mecanismos capitalistas, que incluían el Estado benefactor y la justicia social. Esta fue la primera novedad del peronismo en la era del antiperonismo. La otra fue el surgimiento de una capa de nuevos dirigentes sindicales, formados no en la cómoda tutela del Estado, sino en las duras luchas de esos años, y por ello mucho más templados para el combate. El gobierno libertador hizo lo posible por desplazarlos, pero fracasó por completo y debió resignarse a tolerarlos y a que progresivamente ganaran las elecciones en los sindicatos que se normalizaban. En septiembre de 1957 se reunió el Congreso Normalizador de la CGT y los peronistas, nucleados en las 62 organizaciones, accedieron a su control, aunque compartiéndolo con algunos sectores independientes.

Estas organizaciones sindicales asumieron simultáneamente la representación gremial y la política, y fueron, desde entonces, la "columna vertebral" del movimiento. Desde su exilio Peron conservaba todo su poder simbólico, pero en lo concreto debió dejar hacer y tolerar las desobediencias para no ser negado. Se dedicó a reunir a todos cuantos aceptara invocar su nombre, alentándolos y empujándolos a unos contra otros, para reservarse así la última palabra en cualquier negociación.

Para el gobierno y las fuerzas políticas que lo apoyaban, el "pacto de proscripción" planteaba un problema para el futuro, mediato o inmediato: qué hacer con el peronismo. Algunos aceptaron la exclusión, confiando vagamente en que la "educación democrática" terminaría surtiendo efecto. Otros aspiraban a comprender y redimir a los peronistas, y los más prácticos sencillamente a recibir su apoyo electoral, y a través de él a "integrarlos". En la derecha, optaron por acercarse al peronismo algunos de los viejos nacionalistas y de los conservadores "populares". En la izquierda, la política represiva del gobierno libertador apartó pronto a muchos de un bloque antiperonista en el que hasta entonces habían convivido con sus enemigos naturales. Su misión era dirigir a la clase obrera, y esta era peronista y no dejaba de serlo, lo que planteaba un serio problema a quienes seguían creyendo en la naturaleza burguesa o aun fascista de ese movimiento. El Partido Socialista se dividió en 1956 entre quienes se mantenían fieles a la línea antiperonista y se vincularon cada vez más con los grupos de derecha, y quienes creyeron que el partido debía construir una alternativa de izquierda para los trabajadores, más atractiva que la del peronismo. Algunos intelectuales, de la izquierda o del nacionalismo popular, se identificaron con el peronismo, mientras que para muchos otros el radical Arturo Frondizi empezó a representar una alternativa atractiva.

El ascenso de Frondizi en la Unión Cívica Radical provocó su ruptura. Los intransigentes convivían con dificultad con los unionistas y los sabattinistas, más cercanos a los grupos golpistas y conspirativos. Después de la caída de Peron el radicalismo se dividió: quienes seguían a Ricardo Balbín se identificaron con el gobierno libertador, mientras que Frondizi eligió la línea de acercamiento con el peronismo, basándose en el tradicional programa nacional y popular del radicalismo. Para atraer a los peronistas, reclamó del gobierno el levantamiento de las proscripciones y el mantenimiento del régimen legal de sindicalismo. En noviembre de 1956 la UCR proclamó la candidatura presidencial de Frondizi, que aceleró la ruptura, y el viejo partido se dividió en dos: la UCR Intransigente y la UCR del Pueblo.

En 1957, acosado por las dificultades económicas y una creciente oposición sindical y política, el gobierno provisional empezó a organizar su retiro y a cumplir con el compromiso de restablecer la democracia. Peron ordenó votar en blanco, y esos votos -alrededor del 24%- fueron los más numerosos, aunque ciertamente

muchos menos de los que el peronismo cosechaba cuando estaba en el gobierno, y casi iguales a los de la UCR del Pueblo, que era el partido oficialista. Las enseñanzas de los resultados electorales fueron claras: quien atrajera a los votantes peronistas tenía asegurado el triunfo, siempre que el peronismo siguiera proscripto. Esta condición era garantizada por el gobierno libertador.

Fronzizi se lanzó al juego. Con un discurso moderno, referencias claras a los problemas estructurales del país y una propuesta novedosa, que llenaba de contenidos concretos los viejos principios radicales, nacionales y populares, se había convertido sin dificultades en la alternativa para las fuerzas progresistas y para un sector amplio de la izquierda. Su vinculación con Rogelio Frigerio introdujo un sesgo significativo en su discurso, al subrayar la importancia del desarrollo de las fuerzas productivas y el papel que en ello debían cumplir los empresarios. La maniobra más audaz consistió en negociar con el propio Peron su apoyo electoral, a cambio del futuro levantamiento de las proscripciones. La orden de Peron fue acatada y Fronzizi se impuso en las elecciones del 23 de febrero de 1958, con algo más de 4 millones de votos, contra 2,5 millones que obtuvo Balbin.

Fronzizi aspiraba a renovar los acuerdos, de raigambre peronista, entre los empresarios y los trabajadores; estos eran convocados a abandonar su actitud hostil e integrarse y compartir, en un futuro indeterminado, los beneficios de un desarrollo económico impulsado por el capital extranjero. Todas las fuerzas del país moderno eran convocadas a unirse en la común oposición a los intereses, locales y foraneos, forjados en la etapa agroexportadora. Se legitima así a los equipos técnicos que encabezaba Frigerio así como el pacto con Peron y el acuerdo con los sindicatos. La confianza en la eficiencia de este programa justificaba las concesiones a otros “factores de poder”, en cuestiones juzgadas secundarias, como la iglesia, en el campo de la enseñanza, y a los militares, entre quienes, sin embargo, se aspiraba a desarrollar una tendencia adicta, “nacional” y desarrollista.

El realismo político del presidente incluía una tendencia a inclinarse por la negociación táctica con las grandes corporaciones. Es cierto que los partidos -y en particular la UCR del Pueblo- manifestaron un rechazo a priori de cualquier cosa que hiciera un presidente cuya victoria considerarían ilegítima, así como escaso aprecio por las instituciones democráticas y poca fe en el valor de la continuidad institucional, al punto de especular con la posibilidad de un golpe militar. Pero el estilo político de Fronzizi y su grupo era de por sí poco inclinado a la discusión programática, la persuasión o la búsqueda de acuerdos políticos, ni siquiera en el ámbito de sus propios partidarios.

El nuevo gobierno tenía amplia mayoría en el Congreso y controlaba la totalidad de las gobernaciones, no obstante lo cual su poder era claramente precario. Los votos eran prestados, y la ruptura con Peron y sus seguidores era una posibilidad muy real. Las Fuerzas Armadas no simpatizaban con quien había roto el compromiso de la proscripción, ganando con los votos peronistas. El propio partido oficial, dirigido desde la presidencia, era incapaz de cualquier iniciativa autónoma. Fronzizi apostó a obrar con prontitud, e introducir de manera inmediata cambios tales que configuraran una escena más favorable. Un aumento de los salarios del 60%, una amnistía y el levantamiento de las proscripciones -que sin embargo no incluían ni a Peron ni al Partido Peronista-, así como la sanción de la nueva ley de asociaciones profesionales, fueron parte de la deuda electoral. Fronzizi asumió personalmente lo que llamo “batalla del petróleo”, esto es, la negociación de las reservas y al mismo tiempo, anunció la autorización para el funcionamiento de las universidades no estatales, lo que generó un profundo debate entre los defensores de la enseñanza “laica” y los de la “libre”, en su mayoría católicos.

El meollo de la política económica fueron las leyes de radicación de capitales extranjeros y de promoción industrial, sancionadas antes de que terminara 1958. Por ellas se aseguraba a los inversores extranjeros libertad para remitir ganancias y aun para repatriar el capital. Se establecía un régimen especial a las inversiones en sectores juzgados clave para la nueva etapa de desarrollo: la siderúrgica, a petroquímica, celulosa, automotriz, energía, y naturalmente el petróleo. Habría trato preferencial en materia de derechos aduaneros, créditos, impuestos, suministro de energía y compras del Estado, así como en la protección arancelaria del mercado local, todo ello manejado con un alto grado de discrecionalidad, manifiesto notoriamente en los contratos

petroleros, que el presidente negoció personalmente. Los resultados de esta política fueron notables: las inversiones extranjeras, de alrededor de 20 millones de dólares en 1957, subieron a 248 en 1959, y 100 más en los dos años siguientes. La producción de acero y automotores creció de modo espectacular y casi llegó al autoabastecimiento del petróleo.

La fuerte expansión hizo probablemente más intensa crisis cíclica trienal, anunciada a fines de 1958 por una fuerte inflación y dificultades serias en la balanza de pagos. En diciembre de 1958 se pidió ayuda al FMI y se lanzó un Plan de Estabilización, cuya receta recesiva se profundizó en junio de 1959, cuando Frondizi convocó al Ministerio de Economía al ingeniero Alvaro Alsogaray. Se trataba de uno de los voceros principales de las corrientes liberales, y aplicó un ortodoxo programa de devaluación, congelamiento de salarios y supresión de controles y regulaciones estatales cuyas consecuencias fueron una fuerte pérdida en los ingresos de los trabajadores y una desocupación generalizada. Esta segunda política, liberal y ortodoxa, era contradictoria con la desarrollista inicial, que se afiliaba en las propuestas estructuralistas, pero en cierto modo complementaba y reforzaba sus efectos. Sin embargo, su adopción marco el final de la ilusión integracionista y puso en evidencia la necesidad de enfrentar el obstáculo sindical.

El Plan de Estabilización puso fin a una precaria convivencia entre el gobierno y los sindicatos peronistas. Pero los efectos de la política de estabilización y la dureza con que el gobierno reprimió las protestas, a partir de la huelga del Frigorífico Lisandro de la Torre en enero de 1959, pusieron a los sindicatos en pie de guerra. Las huelgas se intensificaron en los meses siguientes, y luego recrudesció el sabotaje. El gobierno respondió interviniendo los sindicatos y empleando al Ejército para reprimir, al tiempo que los empresarios, aprovechando la recesión, despedían a los cuadros más combativos de cada planta.

El año 1959 fue un punto de inflación. La intensa ola de protesta sindical iniciada a la caída de Perón concluyó con una derrota categórica. La racionalización laboral pudo avanzar libremente, mientras que en los sindicatos se consolidaba un nuevo tipo de dirección, menos comprometida en la lucha cotidiana y más preocupada por controlar las complejas estructuras sindicales, recurriendo incluso a la corrupción o al matonismo para acallar las disidencias. Reconocieron que no podían sostener una lucha frontal y se dedicaron, más prácticamente, a golpear -sobre todo al gobierno-, para enseguida negociar. Augusto Vandor, jefe del sindicato metalúrgico, fue la figura principal y arquetípica de esta nueva burocracia sindical. Este nuevo sindicalismo adquirió una enorme fuerza en la escena política.

Esa fuerza provenía de la persistencia de un problema político pendiente e insoluble -la proscripción peronista-, pero sobre todo del fuerte hostigamiento que el gobierno sufría a manos de los militares. Estos vieron con desconfianza el triunfo de Frondizi y se dedicaron a vigilarlo, y en particular a controlar sus relaciones con los peronistas. La Marina fue la más homogénea en su rechazo a la política presidencial, pero en el Ejército dominó un faccionalismo creciente, que amplificaba las divisiones anteriores. El gobierno intentó alentar en el Ejército una tendencia que lo apoyara, pero cuando el conflicto estallaba fue incapaz de sostener a sus eventuales partidos. A lo largo de los casi cuatro años de su presidencia, Frondizi sorpotó 32 “planteos” militares, algunos para exigir cambios en su propia línea política y otros destinados a ganar terreno en la propia institución. A todos cedió. En junio de 1959 llegó a la Comandancia en Jefe del Ejército Carlos Montero, que durante dos años ejerció una tutela pretoriana sobre el presidente. Fue el período del ministro Alsogaray y del Plan Conintes, y sin duda la época de mayor represión social y política.

El triunfo de Fidel Castro de 1959 había sido celebrado por demócratas y liberales, pero hacia 1960 su acercamiento al bloque socialista dividió profundamente las aguas. Las izquierdas, vacilantes ante la cuestión del peronismo, encontraron en el apoyo a la algo lejana experiencia cubana un campo de coincidencias propicio: a principios de 1961, el socialista Alfredo Palacios ganó una banca de senador en la Capital, lo que polarizó a las fuerzas progresistas y de izquierda. El anticomunismo, en cambio, perdió fuertemente en la derecha, en el liberalismo antiperonista y también en la Iglesia. Los militares asociaron con el comunismo tanto al peronismo como al grupo que orientaba Rogelio Frigerio o a los estudiantes universitarios. En momentos en que Estados Unidos empezaba a reclamar alineamiento y solidaridad contra Cuba, los militares encontraron

otro espacio para presionar a Frondizi. El presidente, que había adherido con entusiasmo a las consignas de la Alianza para el Progreso del presidente Kennedy, era reacio a condenar a Cuba, así como a perder cierta libertad de maniobra internacional que le brindaba la existencia de una alternativa socialista en el continente. Los militares presionaron duramente al presidente hasta que, un mes después de la abstención, el gobierno rompió relaciones con Cuba.

Por entonces, la marcha del proceso político y electoral acercaba al débil gobierno de Frondizi a su catástrofe final. Las elecciones de 1960, con el peronismo proscrito, habían mostrado que sus votos seguían siendo decisivos. Las elecciones de principios de 1962 debían ser más riesgosas, pues habrían de elegirse gobernadores provinciales. Para enfrentarlas, Frondizi despidió a principios de 1961 a Alsogaray y a Montero, dio por terminada la estabilización, adoptó una política social más flexible y se lanzó a la ardua tarea de enfrentar electoralmente a los peronistas, cuya proscripción no podía mantener sin riesgo de que estos apoyaran a cualquiera de sus enemigos.

Se esbozaron distintas alternativas. Una de ellas, la que generaba más preocupación, era el apoyo a alguna fuerza de izquierda, con quienes la Revolución Cubana había creado un campo de solidaridad y entendimiento. La sola existencia de esta alternativa, mostraba que el peronismo empezaba a ser trabajado por una fuerte renovación ideológica. Pero el deseo general de los dirigentes era levantar la abstención, concurrir a elecciones y recuperar espacios en las legislaturas, las municipalidades y las provincias, y el mismo Perón debió aceptarlo. A través de las 62 organizaciones dominaron el aparato electoral y pusieron a sus hombres a la cabeza de sus listas. Más allá del resultado mismo de las elecciones, habían ganado la puja interna: el peronismo era el movimiento obrero, y este a su vez era su dirección sindical, que encabezaba y administraba Vandor.

En el plano nacional, un triunfo peronista seguía siendo inadmisibles para quienes habían suscripto en 1955 el tácito pacto de proscripción, incluyendo al propio Frondizi, quien antes de las elecciones declaró que, frente a un eventual triunfo peronista, no les entregaría el poder. Pero nadie quería asumir los costos de la proscripción, y el gobierno, alentado por algunos éxitos electorales, corrió el riesgo de enfrentar al peronismo en elecciones abiertas. El 18 de marzo, los candidatos peronistas ganaron ampliamente en las principales provincias, incluyendo Buenos Aires. En los agitados días siguientes Frondizi hizo lo imposible para capear la situación: intervino las provincias donde habían triunfado los peronistas, quienes se mostraron muy prudentes, cambió todo su gabinete y encargó a Aramburu una mediación con los partidos políticos, que se negaron a respaldarlo y se declararon totalmente indiferentes a la suerte del presidente y del sistema institucional mismo. Esta era la señal que los militares esperaban, y el 28 de marzo de 1962 depusieron a Frondizi, quien conservó la serenidad como para organizar su reemplazo por el presidente del Senado, José María Guido, y salvar así un jirón de institucionalidad.

Muchos de quienes habían acompañado a Frondizi en su último tramo rodearon al presidente Guido y a la frágil institucionalidad por él representada, buscando negociar una alternativa que de alguna manera tuviera en cuenta a los peronistas. Pero apenas tres meses después, los militares, que habían asumido por completo su función tutelar, impusieron un gabinete definitivamente antiperonista. La crisis política y la crisis económica cíclica coincidieron y se potenciaron mutuamente, dando lugar a medidas erráticas. Federico Pinedo dispuso una espectacular devaluación, que favoreció en general a los grupos agropecuarios y en particular a sus amigos. En seguida fue reemplazado por Alsogaray, quien repitió su receta estabilizadora, que esta vez golpeó además al sector industrial local, que había crecido durante el período frondicista.

La inestabilidad de esos meses de 1962 reflejaba sobre todo las opiniones contrastantes de los distintos sectores de las Fuerzas Armadas. Mientras que los grupos oficiales antiperonistas más duros controlaban el gobierno y seguían buscando una salida basada en una infinita fuga hacia adelante, una posición alternativa empezó a dibujarse en el Ejército. Se constituyó en torno a los jefes y oficiales del arma de Caballería. Reflejaba en parte una competencia profesional interna, pero sobre todo una apreciación diferente sobre las ventajas y los costos de una participación tan directa como la del Ejército en la conducción política. Creían además que la asociación de peronismo con comunismo era simplista y exagerada, y que, dada su tradición nacional y conciliadora, el

peronismo podía incluso aportar algo al frente anticomunista. Esta posición se fue perfilando a lo largo de sucesivos enfrentamientos con la facción “gorila”, que hicieron crisis en el mes de septiembre, cuando unos y otros sacaron las tropas a la calle y hasta amagaron a combatir. Los azules trinfaron en la contienda militar y en la opinión pública. Poco después, grupos vinculados con ellos promovieron la aparición de una revista singular -Primera Plana- para defender su posición.

El triunfo azul en septiembre llevó al Comando en Jefe al general Juan Carlos Onganía, y al gobierno a quienes habían tratado de estructurar un frente político que de alguna manera integrara a los peronistas. Se trataba de un grupo de políticos provenientes de la democracia cristiana y del nacionalismo, y algunos del propio desarrollismo, a la busca de una fórmula que reuniera a militantes, empresarios y sindicalistas. Disponía de varias estructuras electorales vacantes, pero no del candidato, que eventualmente podría haber sido el propio Onganía. Pero las condiciones para esta alternativa todavía no habían madurado: la mayoría de los empresarios desconfiaban de los peronistas y en general de cualquier política que no fuera estrictamente liberal; los peronistas desconfiaban de los frondicistas, mientras que las fuerzas armadas tradicionalmente antiperonistas, como la UCR del Pueblo, denunciaban indignadas la nueva alternativa espuria e ilegítima. También se oponía la Marina, ausente de los enfrentamientos de septiembre, que el 2 de abril de 1963 realizó su propia sublevación. Esta vez el enfrentamiento con el Ejército fue violento, hubo bombardeos y cuarteles destruidos; la Marina fue derrotada. Al término del episodio, el comunicado final de los azules retomaba las posturas antiperonistas y se declaraba en favor de la proscripción del peronismo.

Los frentistas insistieron en encontrar la fórmula alquímica, esta vez sin los militares, reuniendo a frondicistas, democristianos y nacionalistas. En enero de 1963 lograron que la CGT fuera normalizada, con lo que terminaron de redondear su estructura sindical, y de inmediato comenzaron a presionar al gobierno con una Semana de Protesta. Pero a la vez jugaron la carta política, negociando su participación en el Frente, en competencia cada vez más evidente con Perón. Cuando Perón proclamó candidato a Vicente Solano Lima, se apartó el grueso de la UCR Intransigente y también otros grupos menores, al tiempo que el gobierno vetaba la fórmula, apelando a la legislación proscriptiva del peronismo de 1955.

Los peronistas decidieron votar en blanco, pero una porción de sus votos emigró en favor del candidato de la UCR del Pueblo, Arturo Illia. Es probable que haya influido en ese apoyo sorpresivo la presentación como candidato del general Aramburu, que definió su posición en términos antiperonistas.

Illia gobernó entre octubre de 1963 y junio de 1966. Esta segunda experiencia constitucional postperonista se inició con peores perspectivas que la primera. Las principales fuerzas corporativas, incapaces por el momento de elaborar una alternativa de la democracia constitucional, habían hecho un alto pero estaban lejos de comprometerse con el nuevo gobierno. El partido ganador, la UCR del Pueblo, había obtenido una magra parte de los sufragios, y si bien tenía la mayoría en el Senado, solo controlaba algo más de la mitad de las gobernaciones y no tenía mayoría en la Cámara de Diputados donde, debido al sistema de voto proporcional, estaba representando un amplio espectro de fuerzas políticas. El nuevo gobierno radical le dio mucha más importancia al Congreso y a la escena política democrática. La vida parlamentaria tuvo más actividad y brillo, pero el radicalismo no logró estructurar allí una alianza consistente, ni tampoco comprometer auténticamente a las fuerzas políticas en la defensa de la institucionalidad.

Illia no era la figura más destacada de su partido, y es probable que su candidatura derivara de la escasa fe de los principales dirigentes en su triunfo. Tenía simpatías por las posiciones más progresistas, pero debió negociar con los otros sectores, que ocuparon posiciones importantes en su gobierno. Su presidencia se definió por el respeto de las normas, la decisión de no abusar de los poderes presidenciales y la voluntad de no exacerbar los conflictos y buscar que estos decantaran naturalmente.

La política económica tuvo un perfil muy definido. Los criterios básicos del populismo reformista de la UCR del Pueblo heredaba del viejo programa de los intransigentes radicales -énfasis en el mercado interno, políticas de distribución, protección del capital nacional- se combinaban con elementos keynesianos: un Estado muy activo en el control y en la planificación económica. Los ingresos de los trabajadores se elevaron y el Congreso

voto una ley de salario mínimo. El gobierno controló los precios y avanzó con decisión en algunas tareas conflictivas, como la comercialización de los medicamentos. Frente al capital extranjero, procuró reducir la discrecionalidad de las medidas de promoción. Un caso especial fueron los contratos petroleros, que fueron anulados y renegociados.

Esta política económica despertó enconadas resistencias entre los sectores empresariales, expresadas tanto por los voceros desarrollistas, que se quejaban de la falta de alicientes a la inversión extranjera, como sobre todo por los liberales, y se preocupaban por los avances de los sindicatos y la pasividad del gobierno ante ellos.

Esta había intentado aplicar los recursos de la ley de asociaciones para controlar a los dirigentes sindicales, especialmente en el manejo de los fondos y de las elecciones internas, con la esperanza de que surgiera una corriente de dirigentes que rompiera el monolitismo peronista. Los sindicalistas respondieron con un Plan de Lucha que consistió en la ocupación escalonada de 11 mil fábricas, en una operación que involucró casi cuatro millones de trabajadores, sin desbordes ni amenazas a la propiedad. Aunque desde la derecha y desde la izquierda se quiso ver esto como el comienzo de un asalto al sistema, fue solo una expresión de la estrategia impulsada por Vandor, capaz de obtener los máximos frutos con una movilización controlada y restringida. Tal despliegue estaba dirigido en parte a obtener concesiones del gobierno pero sobre todo a hacer ver que estos constituían un actor insoslayable y de real peso en cualquier negociación seria.

El vandorismo aprovechaba así su cabal dominio de los sindicatos y también de las organizaciones políticas del peronismo, para actuar simultánea o alternativamente en los dos frentes y practicar su arte de la negociación. Alentados por un eventual levantamiento de la proscripción, los sindicatos encabezaron una reorganización del Partido Justicialista, que realizaron a su estilo, pues una afiliación relativamente baja les permitió un perfecto control, lo que los fue llevando a un enfrentamiento creciente con Perón, amenazando su liderazgo. La disputa entre ambos no podía superar ciertos límites, pues ni Perón podía prescindir de los sindicalistas más representativos ni estos podían renegar el liderazgo simbólico de Perón. Vandor fue ganando posiciones. A fines de 1964 la dirigencia local organizó el retorno de Perón al país, una provocación al gobierno y quizás al propio Perón. El Operativo Retorno suscitó una gran expectativa entre los peronistas y avivó nostalgias y fantasías. Perón tomó un avión, pero antes de que el gobierno se viera obligado a decidir que hacer, las autoridades de Brasil lo detuvieron y lo enviaron de nuevo a España. Perón estaba dispuesto a jugar sus cartas para evitar cualquier acuerdo que lo excluyera. Por entonces empezó a cobijar y alentar a los incipientes sectores críticos de la dirección sindical e inclinados a una política más dura, o incluso a seguir la senda de la Revolución Cubana.

La principal preocupación de Perón se hallaba en el campo electoral, donde podía competir mejor con Vandor. En marzo de 1965 se realizaron las elecciones de renovación parlamentaria. El gobierno proscribió al PJ pero autorizó a los peronistas a presentarse tras rótulos menos conflictivos, como la Unión Popular, controlados por el sindicalismo vandorista o por caudillos provinciales “neoperonistas”. Los resultados fueron buenos para el peronismo pero no aplastantes. Lograron constituir un fuerte grupo parlamentario, y empezaron a prepararse para las elecciones de 1967, en las que se competiría por los gobiernos de provincia. Si Vandor imponía sus candidatos en las principales provincias y lograba reunir a los grupos neoperonistas provinciales, habría logrado institucionalizar al peronismo sin Perón y armar una poderosa fuerza disidente. De alguna manera implícita, Perón y el gobierno concurren a enfrentarlo.

En los últimos meses de 1965, Perón envió a la Argentina a su esposa Isabel, como su representante personal. Isabel reunió a todos los grupos sindicales adversos o refractarios al liderazgo de Vandor y motorizó una división en las 62 organizaciones. Fracasaron en su intento de ganar la conducción sindical. Pero a principios de 1966, cuando se celebraba la elección de gobernador de Mendoza, Isabel apoyó una candidatura peronista alternativa a la que propiciaba Vandor y la superó ampliamente en votos. Así la competencia entre Perón y Vandor concluía en un empate: aquel se imponía en el escenario electoral y este en el sindical. Quizá por eso Vandor descartó de momento el escenario electoral, dirigiendo sus pasos hacia los grandes actores corporativos.

Las Fuerzas Armadas no miraban con demasiada simpatía el gobierno de Illia pero se abstuvieron de hacer planteos o de presionar. En el Ejército, la prioridad del comandante Onganía y del grupo de oficiales de Caballería que lo rodeaba era la reconstrucción de la institución, el establecimiento del orden y la disciplina, y la consolidación de la autoridad del comandante. Progresivamente, las Fuerzas Armadas no hablaron más que a través de sus comandantes en jefe, y de entre ellos Onganía fue adquiriendo una primacía nacional. En este renovado discurso de las Fuerzas Armadas, que no se mostraban ansiosas por sacar de él los corolarios obvios, la democracia empezaba a aparecer como un lastre para la seguridad.

El programa que en 1958 sintetizó de manera convincente Frondizi expresaba una sensibilidad colectiva y un conjunto de convicciones e ilusiones compartidas acerca de la modernización económica. Debía surgir de la promoción planificada por el Estado y de una renovación técnica y científica. Así surgieron el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. La investigación básica y la tecnología fueron promovidas desde el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), o desde la Comisión Nacional de Energía Atómica, que frecuentemente actuaron asociados a las universidades. El Consejo Federal de Inversiones debía regular las desigualdades regionales, mientras que el Consejo Nacional de Desarrollo asumiría la planificación global y la elaboración de planes nacionales de desarrollo. En suma, un conjunto de instituciones debían poner en movimiento, planificadamente, la palanca de la inversión pública, la ciencia y la técnica.

Pero la mayor fe estaba puesta en los capitales extranjeros. Pero su influencia excedió largamente la de las inversiones directas. Los inversores tuvieron una gran capacidad para aprovechar los mecanismos internos de capitalización. También instalaron por la vía de la compra o la asociación con empresas nacionales existentes, o simplemente por la concesión de patentes o marcas. Su influencia se notó en la transformación de los servicios o en las formas de comercialización y en general en una modificación de los hábitos de consumo, estimulada por lo que podía llevar a verse y apeteerse en la televisión.

En la industria, las nuevas ramas -petróleo, acero, celulosa, petroquímica, automotores- crecieron aceleradamente, por efectos de la promoción y aprovechando la existencia de un mercado insatisfecho, mientras que las que habían liderado el crecimiento en la etapa anterior -textil, calzado, y aun electrodomésticos- se destacaron o retrocedieron, en parte porque su mercado se había saturado o incluso retrocedía, y en parte también porque debían competir con nuevos productos. Aumentó la concentración, modificando la estructura relativamente dispersa heredada de la etapa peronista. En las ramas nuevas, esto se debió a la magnitud de las inversiones iniciales requeridas así como a las condiciones mismas de la promoción estatal. En las actividades antiguas, y en un contexto de contracción, algunas empresas con mayor capacidad de adaptación lograron, gracias a un crédito o a una asociación ventajosa, crecer a expensas de otras.

Se creó una brecha entre un sector moderno y eficiente de la economía, ligado a la inversión o al consumo de los sectores de mayor capacidad, y otro tradicional, más bien vinculado al consumo masivo, que se estancaba. La brecha tenía que ver con la presencia de empresas extranjeras, o su asociación con ellas, de modo que para muchos empresarios locales la experiencia fue negativa. El empleo industrial tendió a estancarse, sin que el aumento en las nuevas empresas compensara la pérdida en las tradicionales, y se deterioraron los ingresos de los asalariados por razones tanto económicas como políticas: un mayor desahogo empresarial en el mercado de trabajo, debido a los frutos de la racionalización y la contracción, se sumaba un recorte en la capacidad de negociación de las organizaciones sindicales.

El efecto traumático debía compensarse con otro renovador más fuerte y persistente, los inversores nuevos debían moverse en un contexto de características singulares y arraigadas: el tipo de fábricas heredado de la etapa peronista se caracterizaba por su escala pequeña, alta integración vertical, elevados costos y escasa preocupación por la competitividad. Las empresas nuevas tuvieron que adecuar su tecnología y sus formas de organización a estas realidades, de modo que su eficiencia fue mucho menor que en los países de origen.

En esos años la sociedad argentina, dominada por la problemática del desarrollo, la independencia y el imperialismo, discutió mucho más la magnitud y el destino de las ganancias de estas empresas que su aporte a

la modernización y la competitividad de la economía y particularmente del sector industrial. Los capitales extranjeros contribuyeron a mantener algunos de los mecanismos básicos. Su horizonte siguió siendo el mercado interno, y no fue prioritario alcanzar una eficiencia que les permitiera competir con mercados externos, a los cuales abastecían desde otras filiales. Atraídos con regímenes de promoción, pugnaron por mantener las situaciones de privilegio y hasta extenderlas, y así contribuyeron a fortalecer la injerencia de un Estado que debía garantizar las ventajas especiales.

Pese a que el gobierno había desarrollado una serie de organismos de planificación, sus políticas de promoción o tuvieron en cuenta cuestiones clave, como cuando dejar de promover, para estimular la competitividad, o la forma de compatibilizar las necesidades fiscales con la promoción, que generalmente consistía en la extensión de impuestos.

En los diez años que siguieron al fin del peronismo, la economía no solo se transformó sustancialmente, sino que, en conjunto, creció, aunque quizá menos de lo que se esperaba. En el sector industrial, esto fue el resultado de un promedio entre el crecimiento de los sectores nuevos y de la retracción de los tradicionales. En el sector agrícola empezaron a sentirse algunos efectos de los incentivos cambiarios ocasionales de las mejoras tecnológicas. Los resultados permitieron que la producción alcanzara en promedio los niveles de 1940, antes del comienzo de la gran contracción. Hubo también algunas mejoras relativas en el comercio exterior. Todo ello fue la base de una etapa de crecimiento general sostenido pero moderado, sustentado principalmente en el mercado interno, iniciada en los años del gobierno de Illia, que se prolongaría hasta mediados de la década siguiente.

Las crisis estallaron con regularidad cada tres años y fueron puntualmente seguidas por políticas llamadas “de estabilización”. Expresaban las limitaciones que experimentaba el país para un crecimiento sostenido. La expansión del sector industrial y del comercial y de los servicios ligados al mercado interno dependía en último término de las divisas con las que pagar los insumos necesarios para mantenerlo en movimiento. Estas eran provistas por un sector agropecuario con escasas posibilidades de expandirse, que afrontaba difíciles condiciones en los mercados mundiales. De ese modo, todo crecimiento de este significaba un aumento en las importaciones y concluía en un déficit serio de la balanza de pagos. Los planes de estabilización, que recogían la normativa estándar del FMI, consistían en primer lugar en una fuerte devaluación, y luego en políticas recesivas que reducían el empleo industrial y los salarios, y con ellos las importaciones, hasta que recuperara el equilibrio perdido, creando las condiciones para un nuevo crecimiento.

Cada uno de estos ciclos de avance, detención y un nuevo avance se inscribía en el contexto de una puja por el ingreso entre los distintos sectores, que a su vez formaba parte de la puja política más general, pues al empate político correspondía un empate económico. En una negociación entre varias partes, los beneficiarios y los perjudicados cambiaban en forma permanente, así como las alianzas y los enfrentamientos. Con la crisis y la devaluación había en primer lugar una traslación de ingresos del sector urbano al rural, pero también de los trabajadores a los empresarios, pues los salarios reales retrocedían ante la fuerte inflación. También solían perder las empresas chicas a manos de las grandes, y en esas coyunturas la concentración de la propiedad avanzó a saltos.

La crisis potenció la puja por el ingreso entre aquellos sectores con capacidad corporativa para negociar y creó la posibilidad de aprovechar una coyuntura, un cambio de las reglas en el juego, producidas desde el poder, y quedarse con la parte del otro. Si bien la acción del Estado era decisiva, no se trazaban desde allí políticas autónomas, sino que estaba a disposición de quien pudiera capturarlo un instante, y utilizarlo para sacar el mayor provecho posible.

La modernización económica introdujo algunos cambios profundos en la sociedad, pero también dio un nuevo impulso a transformaciones que venían de antaño. La fuerte migración del campo a la ciudad, que caracterizó este período, en realidad formaba parte de una tendencia iniciada en la década de 1940.

Quizá la mayor novedad estuvo en la forma de incorporación a las ciudades. El empleo industrial, que había sido la gran vía durante la época peronista, se estancó y aun retrocedió, y su lugar fue ocupado por la

construcción, que junto al pequeño comercio y algunas actividades de servicios absorbieron a los migrantes internos y también a los contingentes de bolivianos, paraguayos o chilenos, cuya migración contribuyó a ampliar la masa de trabajadores. El resultado fue el fenómeno, muy común en toda América Latina, de la nueva marginalidad: un cinturón de “villas miserias” en las grandes ciudades y sus alrededores, donde se combinaban casas de lata y antenas de televisión.

El mundo de los trabajadores urbanos experimentó cambios profundos. El número de asalariados industriales se mantuvo estable, y en consecuencia perdió importancia relativa. Fueron en general víctimas de las políticas sociales regresivas que dominaron en estos años. Los sindicatos organizaron una eficaz resistencia y se anotaron buenos éxitos en la pugna distributiva, los suficientes como para no quedar descolocados ante sus bases, y contribuyeron a mantener la homogeneidad de la clase obrera, sindicalizada y peronista. El sector de los desprotegidos, que se expandió precisamente cuando el Estado de bienestar renunciaba a algunas de sus responsabilidades, comenzó a constituir, en forma progresiva, una de las fuentes de tensión de la sociedad.

Los pequeños empresarios manufactureros se redujeron de manera drástica por obra de la concentración industrial, y aunque aumentó el número de comerciantes, en conjunto los sectores medios autónomos fueron menos numerosos. Creció en cambio el número de los asalariados de clase media, presentes en todos los sectores de la economía y en especial en la industria, donde las nuevas empresas demandaron técnicos y profesionales.

Su presencia puso de relieve el papel decisivo que en esta etapa siguió teniendo la educación. Consolidada la primaria, se prolongó la expansión de la enseñanza media, cuya matrícula creció en forma espectacular en la década peronista, y luego la universitaria. Viejas y nuevas expectativas confluían en este crecimiento: la tradicional búsqueda del prestigio anejo al título, el deseo de participar en el proceso de modernización de la economía y la ciencia, y luego también, el deseo de incorporarse a uno de los foros intelectuales y políticos más activos. Los egresados universitarios aumentaron mucho más rápido que los empleos, mientras que, progresivamente, se producía una pérdida de valor de los títulos. Las viejas clases altas no recuperaron su antiguo prestigio: la posesión de un apellido, o la frecuentación de las secciones de sociales de La Prensa o La Nación, no aseguraban por sí ni riqueza ni poder. Las élites siguieron diversificándose y se nutrieron de nuevos empresarios, militares y hasta algún gremialista particularmente exitoso.

Lo más característico de estos años fue la emergencia y la visibilidad de la capa de los así llamados ejecutivos, que según su nivel se ubicaban entre las clases altas o las medias. Eran por una parte la expresión de la modernización económica.

Los cambios en las formas de vida fueron notables, sobre todo en las grandes ciudades. La píldora anticonceptiva y en general una actitud más flexible sobre las conductas sexuales y sobre las relaciones familiares modificaron la relación entre hombres y mujeres. El voseo empezó a imponerse en el trato cotidiano y la conversación se nutrió de términos tomados de la sociología y del psicoanálisis, una de las pasiones de los sectores medios, que constituyeron en Buenos Aires una de las mayores comunidades psicoanalíticas del mundo. Era significativo que los nuevos sectores populares, a diferencia de sus antecesores de la primera mitad de siglo, no pusieron sus esperanzas en la casa propia, sino en el televisor, en parte porque aquella se había tornado inalcanzable, en parte por la singular combinación de placer inmediato y prestigio que proporcionaba el televisor. Entre las clases medias, fue el automóvil lo que colmó sus expectativas e ilusiones.

Fuerzas poderosas impulsaban la expansión y la homogeneización del consumo: la producción en masa, la propaganda, las técnicas del marketing. En cada ciudad, el viejo “centro” perdió importancia, y los nuevos centros comerciales se esparcieron por todos los barrios. Así, frente a la homogeneización de las apariencias, las clases medias acomodadas y los sectores altos de la sociedad, estimulados por una polarización creciente de los ingresos, buscaron formas originales de diferenciación a través de una exclusividad que debía cambiar permanentemente de referencias, antes que la vulgarización las atrapara.

En otro registro, un personaje de la historia que iba a conquistar la inmortalidad -Mafalda, de Quino- expresó toda otra gama del imaginario de las clases medias, combinando la ilusión del auto y de las breves vacaciones

anuales con las preocupaciones por el pacifismo, la ecología o la democracia, comunes a a ola de disconformismo y renovación que se insinuaba en el mundo.

Los intelectuales antiperonistas pasaron a regir las instituciones oficiales y el campo de cultura todo, dominado por la preocupación de la apertura y la actualización. Las vanguardias artísticas se concentraron en el instituto Di Tella. Quienes animaban esa experiencia estaban convencidos se recrear en Buenos Aires un verdadero centro internacional del arte, y si el diagnóstico quizás era excesivamente optimista, lo cierto es que, como pocas otras veces, la creatividad local se vinculó con la del mundo. La llamada “manzana loca”, y cerca de la Facultad de Filosofía y Letras, el Di Tella se convirtió en punto de referencia de otras corrientes, emergentes y medianamente contestatarias, pero por cierto provocativas, como el hippismo.

El principal foco de la renovación cultural estuvo en la universidad. Estudiantes e intelectuales progresistas se propusieron en primer lugar “desperonizar” la universidad y luego modernizar sus actividades, acorde con la transformación que la sociedad toda emprendía.

La ciencia debía convertirse en palanca de la economía, lo que planteó un largo debate acerca de las prioridades: ciencias básicas, que trabajaran según los estándares internacionales, o tecnología aplicada, mirando los problemas específicos de nuestra economía y atendiendo a la formación del personal calificado que esta podía requerir. Surgió una nueva universidad, orientada a la biología, la bioquímica, la física, la agronomía o la computación. Incluso las viejas carreras cambiaron: la economía y la administración de empresas empezaron a reemplazar a la vieja formación de contadores públicos. En las ciencias sociales la modernización se asoció con dos nuevas carreras: psicología y sociología. La sociología suministraba a la vez una filosofía de la historia, un vocabulario y otros signos de modernidad. Los sociólogos constituyeron, con psicólogos, economistas, científicos y técnicos industriales, toda una cohorte de nuevos sectores medios.

Desde 1955, la universidad se gobernó según los principios de la Reforma Universitaria de 1918, verdadera ideología de estudiantes e intelectuales progresistas. Sus relaciones con los gobiernos fueron conflictivas y la ruptura se produjo cuando el presidente Frondizi decidió autorizar las universidades privadas en igualdad de condiciones con las del Estado. La confrontación mostró como la universidad se convertía en un polo crítico no solo del gobierno, sino de tendencias cada vez más fuertes en la sociedad y la política. En ese sentido, y gracias a su autonomía, la universidad se convirtió en una “isla democrática” en un país que lo era cada vez menos y que creía cada vez menos en la democracia, de modo que la defensa misma de la “isla” contribuyó a consolidar las solidaridades internas. No se trataba, sin embargo, de una isla con voluntad de encierro. La universidad se ocupó intensamente, aunque con éxito desigual, por la extensión de sus actividades a la sociedad toda.

En este polo de modernidad concentrado en la universidad empezaron a manifestarse tensiones crecientes. El valor absoluto de la ciencia universal fue cuestionado a la luz de las necesidades nacionales. Se debatió primero el financiamiento de muchos grupos de científicos por fundaciones internacionales. De allí se pasó al cuestionamiento de los paradigmas científicos mismos, postulando una manera nacional de hacer ciencia. Si bien el compromiso era un valor compartido entre el conjunto de los intelectuales progresistas había quienes cuestionaban la supuesta neutralidad de la ciencia.

Fue el giro a la izquierda de buena parte del núcleo progresista el que reveló la imposibilidad de mantener los acuerdos en los que esa experiencia se había fundado.

La radicalización de los sectores progresistas y la formación de una nueva izquierda tuvieron en la universidad su ámbito privilegiado antes de partir, luego de 1966, hacia destinos más amplios. Fue en la universidad y sus debates donde los intelectuales construyeron y reconstruyeron sus interpretaciones y sus discursos, que con posterioridad encauzarían en una amplia gama de opciones políticas.

La ruptura entre el sector más progresista de los intelectuales y sus aliados más conservadores del frente antiperonista cristalizó casi de inmediato, por obra de la política antipopular y represiva del gobierno libertador, y sobre todo por una suerte de culpa ante la incomprensión de unas mayorías populares cuya persistencia en el peronismo quedó demostrada en las elecciones de 1957. La atracción que ejerció Frondizi entre los progresistas

independientes y aun entre militantes de los partidos de izquierda tradicionales obedecía a que proponía la apertura al peronismo sin renunciar a la propia identidad.

La “nueva izquierda” se formó mirando al peronismo y luego a la Revolución Cubana. Se caracterizó por la espectacular expansión del marxismo, fuente de creencias básicas. La desilusión de Frondizi, y con su equivalente brasileño Kubitschek, el asesinato a Kennedy y la intervención estadounidense a Santo Domingo diluyeron las ilusiones de la Alianza para el Progreso, y las teorías del desarrollo dejaron paso a las de la dependencia, que reelaboraba los motivos anteriores pero subordinando las raíces del atraso a situaciones políticas, frente a las cuales la opción era una alianza nacional para la liberación. Este populismo tendió un puente hacia sectores cristianos que se interesaron en dialogar con el marxismo. Se Hernández Arregui a José María Rosa, los intelectuales nacionalistas incorporaron el marxismo rehaciendo un camino. A su vez, las izquierdas revisaron su interpretación liberal de la historia.

La amalgama fue difícil y la polémica intensa. La Revolución Cubana tuvo la virtud de resumir la mayoría de esos sentidos. Mostraba que América Latina alzada contra el imperialismo, sobre todo luego de la expansión de la guerrilla en Venezuela, Colombia y Perú, y llevaba a una revalorización cultural que iba desde las fuerzas telúricas hasta la “nueva novela”. Cuba consagró la idea misma de revolución. Para la vertiente nacionalista, el sujeto de esta transformación seguía siendo, en clave romántica, el pueblo, mientras que para la izquierda lo era el trabajador, detrás de quien, como ha dicho con agudeza Terán, no se vislumbraba todavía al guerrero.

La nueva izquierda todavía no tenía claro que hacer. Miraba con avidez al peronismo, alentaba sus variantes “duras”, especulaba con su vuelco a la izquierda y empezaba a jugar con diversas alternativas. Nada estaba definido en 1966, salvo el rechazo cada vez más categórico de la tradición liberal y democrática.

En realidad, nadie tenía demasiada fe en la democracia, ni siquiera los partidos políticos que debían defenderla. Ciertamente se trataba de una democracia ficticia y de escasa legitimidad, pero los interesados directos en su supervivencia y mejora la dieron por caduca sin lucha, hasta que el final anunciado llegó. La derecha por su parte, no lograba organizar un partido capaz de hacer atractivos sus intereses al conjunto de la sociedad, en parte por los problemas ya crónicos de estas fuerzas, que solo funcionaron eficazmente cuando se las articuló desde el poder, y en parte porque, en el seno mismo de los sectores propietarios, subsistían conflictos y no se había llegado a conformar una propuesta que fuera válida para todos ellos, y mucho menos para un sector mayoritario de la sociedad.

Los sectores más concentrados de la economía, en los que el capital extranjero tenía un peso decisivo, se movían con más comodidad en la escena corporativa, donde sus intereses eran formulados con precisión y claridad por un grupo de bien entrenados economistas y técnicos. Allí dialogaban con los factores de poder reales -los sindicalistas, las Fuerzas Armadas, y en menor medida la Iglesia- que por distintos motivos tampoco tenían mayor interés en fortalecer la escena democrática. Los sindicalistas dirigidos por Vandor, habían probado sin suerte la arena electoral, donde Perón los había derrotado; los militares estaban cada vez más consustanciados con su papel tutelar del Estado, y defensor de los valores occidentales y cristianos. Se trataba sin embargo, de una negociación empantanada, a mitad de camino entre la democracia y el autoritarismo.

Las voces para romper el empate empezaron a multiplicarse. Para los militares, la democracia resultaba un obstáculo en el combate contra un enemigo comunista imaginado, que veían cada vez más amenazador. Se alarmaban por la atracción que ejercía la Revolución Cubana y los horrorizaba el cuestionamiento de los valores tradicionales de la sociedad y la convivencia, pues en el fondo la libertad sexual, la revolución y el arte de vanguardia parecían distintos aspectos de un mismo desafío a los valores occidentales y cristianos.

Para el catolicismo integrista, el cuestionamiento de los valores sustantivos de la sociedad arrancaba con la Revolución Francesa, y suponía una condena del mundo moderno y en particular de la democracia liberal, así como una reivindicación de la sociedad organicista. Esta postura ultramontana resultaba bien acogida por quienes encontraban en el escenario democrático y sus callejones sin salida las raíces del desorden económico y reclamaban un Estado fuerte, con capacidad para ordenar la vida económica, disciplinar a sus actores y superar los bloqueos para una alternativa eficiente.

El gobierno de Illia fue condenado por ineficiente por Primera Plana, vocero de este grupo. Objetivos distintos pero no contradictorios confluían en la crítica al gobierno y una propuesta definida, de manera algo vaga como corresponde a una propuesta política, como “el cambio de estructuras” que se entendía se refería a las políticas. Durante los seis meses finales del gobierno de Illia se tenía la impresión de que buena parte del país emprendía con paciencia y con confianza, el camino que llevaría a la redención. El 28 de junio de 1966 los comandantes en jefe depusieron a Illia y entregaron la presidencia al general Onganía. Con la caída de la democracia limitada terminó el empate, las opciones se definieron y los conflictos de la sociedad, hasta entonces disimulados, pudieron desplegarse plenamente.

“Dependencia o liberación, 1966-1976” (hasta el apartado “la vuelta de Perón”) - Breve historia contemporánea de la Argentina

Amplio consenso al golpe: los grandes sectores empresarios y también los medianos y pequeños, la mayoría de los partidos políticos -con excepción de los radicales, socialistas y los comunistas- y hasta muchos grupos de extrema izquierda, satisfechos del fin de la democracia “burguesa”. Perón abrió una carta de crédito, los políticos peronistas fueron algo más explícitos y los sindicalistas se mostraron francamente esperanzados y concurrieron a la asunción del nuevo presidente.

Este crédito amplio y variado tenía que ver con la indefinición inicial entre las diversas tendencias que coexistían en el gobierno. El estado mayor de las grandes empresas tenía interlocutores directos en muchos jefes militares. Otros se nutrían en cambio de una concepción mucho más tradicional. Las contradicciones profundas entre corporativistas y liberales se disimulaban en una red de contratos sociales e ideas mezcladas.

Así, por el momento primaron las coincidencias. Era necesario reorganizar el Estado. Para unos, era la condición de un reordenamiento económico que usara las tradicionales herramientas keynesianas para romper los bloqueos de crecimiento. Para otros, era la condición un reordenamiento de la sociedad, de sus maneras de organización y representación, que liquidara las formas políticas del liberalismo, juzgadas nefastas, y creara las bases para otras naturales, orgánicas y jerárquicas.

La primera fase del nuevo gobierno se caracterizó por un “shock autoritario”. A la Constitución se le adosó un Estatuto de la Revolución Argentina, por el cual juró el general Juan Carlos Onganía, presidente designado por la Junta de Comandantes, que se mantuvo en el poder hasta junio de 1970. Se disolvió el Parlamento y también los partidos políticos. Los militares fueron cuidadosamente apartados de las decisiones políticas, se institucionalizó la representación de las armas por la vía de sus comandantes. Los ministerios fueron reducidos a cinco, y se creó una suerte de Estado Mayor de la Presidencia, integrado por los Consejos de Seguridad, Desarrollo Económico y Ciencia y Técnica, pues en la nueva concepción el planeamiento económico y la investigación científica se consideraban insumos de seguridad nacional.

Unificadas las decisiones, se comenzó a encorsetar a la sociedad. La represión del comunismo se extendió a todas aquellas expresiones del pensamiento crítico. El blanco principal fue la universidad, que era vista como el lugar típico de infiltración. Fueron intervenidas y se acabó con su autonomía académica. El 29 de julio de 1966, en la “noche de los bastones largos”, la policía irrumpió en algunas facultades de la Universidad de Buenos Aires y apaleó a profesores y alumnos. A este impromptu le siguió un movimiento importante de renunciaciones de docentes. Muchos de ellos continuaron con sus trabajos en el exterior y otros procuraron trabajosamente reconstruir, de manera subterránea, las redes intelectuales y académicas. Mientras tanto en las universidades reaparecieron los grupos tradicionalistas, clericales y autoritarios.

La censura se extendió a las manifestaciones más diversas de las nuevas costumbres, como las minifaldas o el pelo largo, que según la iglesia, eran la antesala del comunismo: el amor libre, la pornografía, el divorcio. Amplias capas de la sociedad coincidían con el diagnóstico de los militares o de la iglesia acerca de los peligros de la modernización intelectual con la necesidad de usar la autoridad para extirpar los males.

Antes de que se hubiera definido una política económica, se procedió a reducir de manera drástica al personal en la administración pública y en algunas empresas del Estado, como los ferrocarriles, y se realizó una sustancial modificación de las condiciones de trabajo en los puertos, para reducir los costos. Otra medida fue el

cierre de la mayoría de los ingenios azucareros en la provincia de Tucuman, que venían siendo ampliamente subsidiados. En todos los casos la protesta sindical, que fue intensa, resultó acallada con violencia. Se sancionó una ley de arbitraje obligatorio, que conducía a la posibilidad de iniciar huelgas. En febrero de 1967 lanzaron un Plan de Acción, que recordaba el Plan de Lucha montado contra Illia. Pero en la ocasión tropezaron con una respuesta muy fuerte: despidos masivos, retiros de personería sindical, intervenciones a los sindicatos y el uso de todos los resortes que la ley le daba al Estado para controlar al gremialismo discolo. La Confederación General del Trabajo debió reconocer su derrota total y suspender las medidas.

En los seis primeros meses, y más allá de aquellas acciones espectaculares, no se había adoptado un rumbo claro en materia económica pues el equipo designado estaba lejos de conformar al establishment. El conflicto se resolvió en diciembre de 1966 en favor de los llamados liberales. El general más afín a ellos, Julio Alsogaray fue designado comandante en jefe del Ejército, y Vasena, ministro de Economía y Trabajo. Se trataba de un economista surgido del riñón mismo de los grandes grupos empresarios. Vasena ocupó el centro del gobierno, pero debió seguir enfrentándose con los grupos corporativistas, que se concentraron en el Ministerio de Interior y la Secretaría General de la Presidencia.

El plan de Vasena, lanzado en marzo de 1967, coincidiendo con la debacle de la CGT, apuntaba a superar la crisis cíclica y a lograr una estabilización prolongada que eliminara una de las causas de la puja sectorial. Mas a largo plazo, se proponía racionalizar el funcionamiento de la economía toda y facilitar así el desempeño de las empresas más eficientes, cuya imposición sobre el conjunto acabaría definitivamente, en este terreno, con empates y bloqueos.

En el caso de la inflación se recurrió a la autoridad estatal para regular las grandes variables, asegurar un período prolongado de estabilidad y desalentar las expectativas inflacionarias. Se congelaron todos los salarios por dos años, luego de un módico aumento, se suspendieron las negociaciones colectivas. También se congelaron las tarifas de servicios públicos y combustibles, y se estableció un acuerdo con las empresas líderes. El déficit fiscal se redujo con las racionalizaciones de personal y una recaudación más estricta. Con esta medida se logró a la vez arreglar las cuentas del Estado, evitar la alza de los alimentos, impedir que la devaluación fuera aprovechada por los sectores rurales y asegurar un período prolongado de estabilidad cambiaria, reforzado por préstamos del Fondo Monetario y una importante corriente de inversiones de corto plazo. Todo ello permitió establecer el mercado libre de cambios. En lo inmediato, los éxitos de esta política de estabilización fueron notables: a mediados de 1969 la inflación se había reducido drásticamente, aunque seguía siendo elevada para los niveles de los países centrales, y las cuentas del Estado estaban equilibradas, lo mismo que la balanza de pagos.

No hubo restricción monetaria ni crediticia. Las inversiones del Estado fueron considerables, particularmente en obras públicas. Las exportaciones no tradicionales fueron beneficiadas con reintegros de impuestos a insumos importados. Se estimuló la eficiencia general de la economía mediante una reducción de los aranceles y la eliminación de subsidios a económicas regionales. Creció el producto bruto, sosteniendo la tendencia de los años anteriores, la desocupación fue en general más baja, los salarios no cayeron notablemente y la inversión fue en general alta, aunque concentrada en obras públicas.

El sector más concentrado -predominantemente extranjero- resultó el mayor beneficiario de esta política, que además de estabilizar, apuntaba a reestructurar de manera profunda el mundo empresario y a consolidar de modo definitivo los cambios esbozados desde 1955.

En cambio, la lista de perjudicados fue amplia. A la cabeza estaban los sectores rurales; se sintieron perjudicados por lo que consideraban un despojo: las fuertes retenciones a la exportación. Los sectores empresarios nacionales se quejaban de la falta de protección y se lamentaban de la desnacionalización. Economías provinciales enteras habían recibido verdaderos mazazos al suprimirse protecciones tradicionales. Amplios sectores medios, perjudicados de formas varias, desde la liberación de los alquileres urbanos hasta el avance de los supermercados en la comercialización minorista, y naturalmente con los trabajadores.

La nueva política modificaba en forma profunda los equilibrios de la etapa del empate, y volcaba la balanza a favor de los grandes empresarios. Se trataba del proyecto propio y específico de la gran burguesía, que solo en estas circunstancias sociales y políticas podía ser propuesto. Sostenido por quienes gustaban de llamarse liberales, era en realidad una política que si bien achicaba las funciones del Estado benefactor, conservaba y aun expandía las del Estado intervencionista.

A lo largo de 1968, empezaron a notarse los primeros indicios del fin de la pax romana. En marzo, un grupo de sindicalistas contestatarios, encabezados por Raimundo Ongaro, dirigente gráfico de orientación social cristiana, ganó la conducción de la CGT, aunque de inmediato los dirigentes tradicionales la dividieron. Pero a lo largo de 1968 la CGT de los Argentinos encabezó un movimiento de protesta que el gobierno pudo controlar combinando amenazas y ofrecimientos. Esta emergencia contestataria reunió a dos grupos de dirigentes hasta ese momento enfrentados: el tradicional núcleo vanguardista y los llamados “participacionistas”. En ellos centraban sus ilusiones quienes rodeaban a Onganía: concluida la reestructuración económica, era posible iniciar el “tiempo social”, con el apoyo de una CGT unida y domesticada. Los sectores rurales eran fácilmente escuchados por los jefes militares, y también los sectores de empresariado nacional, capaces de tocar una fibra todavía sensible en ellos: frente a la política económica imperante, hay otra alternativa, decían; es posible un desarrollo más nacional, algo más popular y más justo.

Todas estas voces, pusieron en tensión la relación entre el presidente y su ministro de Economía. A mediados de año, Onganía relevó a los tres comandantes y reemplazó a Alsogaray por Lanusse. Las voces del establishment salieron a defender a Vasena, comenzaron a quejarse del excesivo autoritarismo de Onganía. Cuando en mayo de 1969 estalló el breve pero poderoso movimiento de protesta -El Cordobazo-, el único capital de Onganía, el mito del orden, se desvaneció.

El estallido ocurrido en Córdoba en mayo de 1969 vino precedido de una ola de protestas estudiantiles en diversas universidades de provincias y de una fuerte agitación sindical en Córdoba. Activismo estudiantil y obrero se conjugaron el 29 de mayo de 1969. La CGT local realizó una huelga general y grupos de estudiantes y obreros ganaron el centro de la ciudad, donde se sumó mucha otra gente. La fortísima represión policial generó un violento enfrentamiento. La multitud, que controló varias horas el casco central de la ciudad, no tenía consignas ni organizadores pero se comportó con rara eficacia, dispersándose y reagrupándose. Finalmente intervino el Ejército y recuperó el control, salvo en algunos reductos donde flancotiradores jaquearon a los militares un día más. Lentamente, el 31 de mayo se restableció el orden.

Como acción de las masas, el Cordobazo solo puede ser comparado con la Semana Trágica de 1919, o con el 17 de octubre, con la diferencia de que en este último caso la policía apoyó y custodió a los trabajadores.

La ola de movilización social que inauguró el Cordobazo se expresó de maneras distintas. Una de ellas fue un nuevo activismo radical, que se manifestó primero en la zona de Rosario o sobre todo en Córdoba, donde se destacaban las plantas de las grandes empresas establecidas luego de 1958, en especial las automotrices. Con obreros estables, especializados y relativamente bien pagados, los conflictos no se limitaron en lo salarial y se extendieron a las condiciones de trabajo, los sistemas de incentivos, las clasificaciones y categorías. Esas mismas empresas habían logrado autorización del gobierno para negociar particularmente sus convenios de trabajo e incluso para crear sindicatos por planta, como ocurrió con las de Fiat. Al principio esto debilitó a las organizaciones sindicales, pero a la larga permitió que se surgieran conducciones con orientaciones marcadamente diferentes de las del sindicalismo nacional. Mientras aquel se limitaba a negociar los salarios y afirmaba su control en la desmovilización, la cooptación y el matonismo, los nuevos dirigentes gremiales ponían el acento en la honestidad, la democracia interna y la atención de los problemas de la planta.

Una movilización que escapaba a los límites y controles de las burocracias gremiales y un tipo de demandas novedoso fueron configurando un sindicalismo singular. En ese ámbito era posible pasar de las reivindicaciones concretas a un cuestionamiento más amplio de las relaciones sociales y de la misma propiedad.

Por entonces, ya muchos salían a la calle. Poco después del Cordobazo hubo episodios similares en Rosario y en Cipoletti; los episodios se repitieron luego en Córdoba, en 1971, en Neuquén y en General Roca, y

adquirieron una magnitud notable en Mendoza, en julio de 1972. La misma agitacion se advertia en las zonas rurales, sobre todo en las no pampeanas como Chaco, Misiones o Formosa, donde arrendatarios y colonos, presionados por los desalojos o los bajos precios del algod6n o la yerba, se organizaban las ligas Agrarias. Las explosiones urbanas se prolongaron en manifestaciones callejeras, a las que se sumaban los estudiantes universitarios en permanente estado de ebullicion. Estas formas originales de protesta eran desencadenadas por algun episodio ocasional: un impuesto, un aumento de tarifas, un funcionario particularmente desafortunado, pero expresaban un descontento profundo y un conjunto de demandas que, puesto que el poder autoritario habia cortado los canales de expresion establecidos, se manifestaban en espacios sociales reconditos, en villas, barrios o peque~nas ciudades, y emergian poniendo en movimiento extensas y difusas redes de solidaridad. Surgidas de cuestiones que hacian a la vida cotidiana antes que laborales -la vivienda, el agua, la salud-, movilizaban a sectores mucho mas vastos que el de los obreros sindicalizados: desde trabajadores ocasionales, no agremiados y desprotegidos, hasta sectores medios cuya participacion era uno de los datos novedosos, y que se manifestaba tambien en las huelgas de maestros y profesores, empleados publicos, funcionarios judiciales o en los lock out de peque~nos comerciantes e industriales.

Unos y otros se legitimaban de manera reciproca y conformaron un imaginario social sorprendente, una verdadera "primavera de los pueblos". Todos los males de la sociedad se concentraban en un punto: el poder autoritario y los grupos minoritarios que lo apoyaban, responsables directos y voluntarios de todas y cada una de las formas de opresion, explotacion y violencia de la sociedad. Frente a ellos se alzaba el pueblo, la hermandad solidaria y sin fisuras, que se ponía en movimiento para derrotarlos y resolver todos los males.

No era difícil encontrar por entonces en todo el mundo se~nales confirmatorias de esa primavera. Los vastos acuerdos sociales que habian presidido el largo ciclo de prosperidad posterior a la Segunda Guerra Mundial estaban agotandose, como se advertia en la ola de descontento que recorria a la sociedad, y sobre todo en la rebelion de su grupo mas sensible, los estudiantes. Se expreso en Praga, Mexico o Berkeley, y culminó en Paris en mayo de 1968.

En America Latina, donde los prospectos de la Alianza para el Progreso y el apoyo a las democracias habian quedado definitivamente archivados, los campos estaban nien delimitados: si para el poder autoritario el desarrollo era un fruto de la seguridad nacional, para quienes lo enfrentaban la unica alternativa a la dependencia era la revolucion, que conducía a la liberacion. Cuba constituía un ejemplo fundamental. La accion del Che Guevara en Bolivia mostro las posibilidades y limites del "foco" revolucionario pero sobre todo su muerte dio origen al simbolo mas fuerte de quienes luchaban. En el mismo frente, unidos por el enemigo, se alineaban las guerrillas urbanas de Brasil o del Uruguay, los partidos marxistas chilenos que llevaron a Salvador Allende a la presidencia por la via electoral, o militares nacionalistas y populistas como el boliviano Torres, el panameño Torrijos o el peruano Velasco Alvarado. Hasta la Iglesia, tradicional baluarte de los sectores oligarquicos, se sumaba, al menos en parte. En 1967 los obispos del Tercer Mundo, encabezados por el brasileño Camara, proclamaron su preocupacion prioritaria por los pobres, asi como la necesidad de comprometerse en forma activa en la reforma social y asumir las consecuencias de ese compromiso.

En Argentina, desde 1968, los religiosos que se reunieron en el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo, y los laicos que lo acompañaban, militaron en las zonas mas pobres, particularmente en las villas de emergencia, promovieron la formacion de organizaciones solidarias e impulsaron reclamos y acciones de protesta, que incluían huelgas de hambre. Su lenguaje evangelico fue haciendose rapidamente politico. La violencia de abajo se legitimaba por la injusticia social, que tambien era una forma de violencia. Los sacerdotes tercermundistas facilitaron la incorporacion a la politica y a la militancia de vastos contingentes de jovenes, educados en los colegios religiosos y formados inicialmente en el nacionalismo catolico.

Por esa y otras vias, contingentes de jovenes se incorporaron rapidamente a un activismo cuyo perfil resultaba irreconocible para muchos. La tradicional politica universitaria cambio de forma y de sentido luego de que el poder autoritario destruy6 la "isla democratica" que se habia construido desde 1955, en la que era posible

combinar la excelencia académica con la militancia. Las universidades, cada vez más descalificadas desde la perspectiva académica, se fueron convirtiendo en centros de agitación y de reclutamiento.

Para muchos, y muy especialmente para los jóvenes sin experiencias políticas anteriores, ejerció una atracción muy fuerte el peronismo, proscrito y resistente, donde encontraban el mejor espacio para la contestación. Del peronismo pasado y presente -y del propio Perón- podían derivarse muchas imágenes. En su exilio de Madrid, el líder había ido actualizando su discurso. Mientras Perón se iba sintonizando, los que mejor cuadraban a su papel de jefe de Iglesia, obligado a ser una de para muchos, quienes en la Argentina lo proclamaban su líder seleccionaban aquellos elementos que mejor se adaptaban a su propia percepción de la realidad.

El peronismo resultó permeable a muchos discursos, provenientes del catolicismo y del nacionalismo, del revisionismo histórico y también de la izquierda, sobre todo en la medida en que esta iba resolviendo sus perplejidades ante lo que Cooke llamó el “hecho maldito”. Definida como se vio por la vía revolucionaria, y admitió el hecho de que los trabajadores eran irrevocablemente peronistas, buena parte de las corrientes de izquierda aceptó profesar la religión. La experiencia del Cordobazo vitalizó a las corrientes que, en una perspectiva más clásica, confiaban en las posibilidades de la acción de las masas y privilegiaron “la clase” por sobre “el pueblo”.

Los que optaron por el peronismo terminaron de redondear su revisión ideológica y de encontrar el lugar que ese movimiento ocupaba en el gran proceso de construcción del socialismo. Lo más espectacular fueron los asesinatos: antes que Aramburu, había muerto Vandor y luego José Alonso, otro dirigente sindical destacado.

El caso de Aramburu reúne todas las explicaciones y las significaciones de esta práctica: venganza por los fusilamientos de 1956, caída en un dirigente particularmente odiado por los peronistas, pero también liquidación de una alternativa política que los grupos liberales venían preparando ante el desgaste de Onganía.

Entre todas las organizaciones había grandes diferencias teóricas y políticas, pero prevalecía un espíritu común. Todas aspiraban a transformar la movilización espontánea de la sociedad en un alzamiento generalizado, y todas coincidían en una cultura política que retomaba y potenciaba la de los grupos de izquierda, pero que de alguna manera tomaba la de sus adversarios. Las organizaciones eran la vanguardia de la movilización popular, cuya representación consistía en la acción violenta. La unidad, el orden, la jerarquía y la disciplina eran los atributos de la organización armada. Los atributos del verdadero militante eran el heroísmo y la disposición a una muerte gloriosa y redentora, camino de la verdadera trascendencia.

Del cúmulo de organizaciones guerrilleras, fue Montoneros la que mejor se adecuó al clima del país, y la que fue absorbiendo a casi todas las otras, con la excepción del ERP. También triunfaron, dentro del peronismo, en la difícil competencia de la “lectura estratégica” de Perón, ganando espacios para su acción autónoma, y a la vez el reconocimiento del líder, que también había adquirido maestría en el arte de “utilizar sus dos manos”. Eran también, por su formación y tradición, los menos orientados al movimiento obrero y los más propensos a buscar apoyos y su legitimación en los amplios sectores marginales cultivados por los sacerdotes tercermundistas. Desde 1971, aprovecharon el clima creado por la salida política y el retorno de Perón, se volcaron a la organización y movilización de esos y otros sectores e barrios, villas, universidades y, en menor medida, en sindicatos, a través de la Juventud Peronista, que creció notablemente.

La movilización fue identificándose cada vez más con el peronismo y con el propio Perón. Impotentes y desconcertadas, las Fuerzas Armadas fueron advirtiendo que debían buscar una salida. En retirada, debían negociar sus términos con diversas fuerzas sociales y políticas, en definitiva con Perón mismo.

A su manera, Onganía inició la búsqueda. En mayo de 1969 su autoridad se resintió tanto por la impotencia frente al desafío social cuando por las vacilaciones del Ejército para reprimirlo. Sintió también el impacto en el área económica, donde se produjo una apresurada salida de capitales extranjeros y una reaparición de las expectativas de inflación. Onganía intentó sortear las dificultades con modificaciones menores y una apertura más decidida a “lo social”, en particular con la CGT y sus dirigentes “participacionistas”. Los sindicalistas eran menos dóciles y los empresarios manifestaban abiertamente su desconfianza por los escarceros populistas. Un sector hasta entonces sacrificado -los productos rurales- elevó su protesta y mantuvo un duro entredicho con los

frigoríficos extranjeros, aparentemente protegidos por el gobierno. El 29 de mayo de 1970, a un año del Cordobazo, Aramburu fue secuestrado y pocos días después se encontró su cadáver. Lo cierto es que el episodio despejó las dudas de los militares: a principios de junio de 1970, depusieron a Onganía y designaron a un presidente. El designado fue el general Roberto Levingston, figura poco conocida y a la sazón ausente del país.

Levingston, que gobernó hasta marzo de 1971, reveló tener ideas propias, muy diferentes de las del general Lanusse, figura dominante de la Junta. Designó ministro de Obras Públicas y luego de Economía a Aldo Ferrer, que había ocupado cargos durante la administración de Frondizi. Ferrer se propuso reeditar la fórmula nacionalista y populista. Un ministro de Trabajo de extracción peronista negoció con la CGT y hubo un impulso salarial distribucionista. Se protegió a los sectores nacionales del empresariado, por la vía del crédito y de los contratos de las empresas del Estado. El “compre argentino” y la “argentización del crédito” sintetizaban esa política. Levingston confirmó la caducidad de los “viejos” partidos y alentó la formación de otros “nuevos”, y quizá de un movimiento nacional que asumiera la continuidad de la transformación. La aspiración a movilizar al “pueblo” desde el gobierno militar resultaba ingenua, pero de cualquier modo fue el primer reconocimiento formal de la necesidad de una salida política.

Convocándola a negociar, el gobierno reflotó a la alicaída CGT. Los dirigentes sindicales, presionados por demandas sociales crecientes y la inflación que había reaparecido lanzaron en octubre de 1970 un plan de lucha que incluyó tres paros generales, no contestados por el gobierno. Los partidos tradicionales también reaparecieron en el escenario. A fines de 1970 la mayoría de ellos firmó un documento, La Hora del Pueblo, cuyos artífices fueron Jorge Daniel Paladino, delegado personal de Perón, y Arturo Mor Roig, veterano político radical. Allí se acordaba poner fin a las proscripciones electorales y asegurar, en un futuro gobierno electo de manera democrática, el respeto a las minorías y a las normas constitucionales. Radicales y peronistas deponían las armas que tradicionalmente habían esgrimido y ofrecían a la sociedad la posibilidad de una convivencia política aceptable.

El resurgimiento del sindicalismo organizado y de los partidos políticos se debía en parte a la apertura del juego por un gobierno que buscaba su salida, pero fundamentalmente a la emergencia social, que en forma directa los revitalizaba y a la vez los convertía en posibles mediadores. Levingston resultó incapaz de manejar el espacio de negociación que se estaba abriendo. Los jefes militares apreciaron que Levingston era tan poco capaz como Onganía de encontrar la salida, y cuando en marzo de 1971 se produjo una nueva movilización de masas en Córdoba decidieron su remoción y su reemplazo por el general Lanusse.

En marzo de 1971, Lanusse anunció el restablecimiento de la actividad política partidaria y la próxima convocatoria a elecciones generales, subordinadas sin embargo a un Gran Acuerdo Nacional, sobre cuyas bases había venido negociando con los dirigentes de La Hora del Pueblo. Finalmente, las Fuerzas Armadas optaban por dar prioridad a la salida política y con ella aspiraban a reconstruir el poder y la legitimidad de un Estado cada vez más jaqueado. Las discrepancias sobre cómo enfrentar a las organizaciones armadas y la protesta social eran crecientes y anunciaban futuros dilemas: mientras se creó un fuero antiterrorista y tribunales especiales para juzgar a los guerrilleros, algunos sectores del Estado y las Fuerzas Armadas iniciaron una represión ilegal: secuestro, tortura y desaparición de militantes, o asesinatos a mansalva, como ocurrió con un grupo de guerrilleros detenidos en la base aeronaval de Trelew en agosto de 1972. Similares vacilaciones había con la política económica, hasta que se optó por renunciar a cualquier rumbo y se disolvió el Ministerio de Economía. Así, en un contexto de inflación desatada, fuga de divisas, caída del salario real y desempleo, agravado por la ola generalizada de reclamos, el tironeo sectorial se instaló en el gobierno mismo, presto a conceder lo que cada uno pedía.

El Gran Acuerdo Nacional empezó siendo una negociación amplia y se convirtió en un tironeo entre Lanusse y Perón. La propuesta inicial de gobierno contemplaba una condena general de la “subversión”, garantías sobre la política económica y el respeto a las normas democráticas, y que se asegurara a las Fuerzas Armadas un lugar institucional en el futuro régimen, desde donde tutelar la seguridad. Pero lo principal era acomodar una

candidatura presidencial de transición, para la que el propio general Lanusse se ofrecía. Asegurar el lugar institucional de las Fuerzas Armadas era imposible. Los otros dos puntos -la condena de la subversión y el acuerdo de la candidatura- tenían que ver principalmente con la táctica de Perón.

En noviembre de 1971, Perón relevó a Paladino y lo reemplazó por Hector Campora. Perón se propuso conducir a negociación sin renunciar a ninguna de sus cartas. No renunció su papel de referente de la ola de descontento social ni renunció al apoyo proclamado por buena parte de las organizaciones armadas. Mas aun, las alentó y legitimó permanentemente. Al mismo tiempo, alentó a La Hora del Pueblo y organizó su propio GAN, el Frente Cívico de Liberación Nacional, con partidos aliados y luego con la CGT-CGE. En verdad, nadie sabía a donde quería llegar Perón.

Lanusse planteó al principio que el Acuerdo era condición para las elecciones, pero progresivamente tuvo que reducir sus exigencias, vista la imposibilidad de obligar a Perón a negociar. En el mes de julio de 1972, Lanusse optó por asegurar la condición mínima: que Perón no sería candidato, a cambio de su propia autoproscricción. Tacitamente, Perón aceptó las condiciones. En noviembre de 1972, regresó al país, por unos pocos días. No trató con el gobierno pero dialogó con los políticos y en particular con el jefe del radicalismo, Ricardo Balbín. Cultivó su imagen pacificadora, habló de los grandes problemas del mundo, como los ecológicos, y evitó cualquier referencia urticante. Por último, organizó su combinación electoral: el Frente Justicialista de Liberación, con una serie de partidos menores, al que impuso la fórmula presidencial Campora, su delegado personal, y Vicente Solano Lima, un político conservador que desde 1955 acompañaba fielmente a los peronistas.

La fórmula constituía un desafío a los políticos de La Hora del Pueblo y sobre todo a los sindicalistas, a quienes excluyó de la negociación. “Campora al gobierno, Perón al poder”, su lema, señalaba el carácter ficticio de la representación política. Los radicales, con la candidatura de Balbín, aceptaban el triunfo peronista y su futuro papel de minoría legitimadora, mientras que a la derecha e izquierda surgieron otras formas de escasa significación.

El clima se prolongó luego del triunfo electoral del 11 de marzo de 1973 -cuando el peronismo triunfó con casi 50% de los votos- hasta el 25 de mayo siguiente, fecha de la asunción de Campora. Liberaron de la cárcel a los presos políticos condenados por actos de subversión. Las formas institucionales fueron salvadas por una inmediata ley de amnistía dictada por el Congreso. Para muchos, parecía llegada la hora del “argentino”.

La figura simbólica de Perón había llegado a reemplazar a su figura real. Para todos, Perón expresaba un sentimiento general de tipo nacionalista y popular, de reacción, contra la reciente experiencia de desnacionalización y privilegio. Para algunos esto se encarnaba en el líder histórico, que, como en 1945, traería la antigua bonanza, distribuida por el Estado protector y munificentemente. Para otros Perón era el líder revolucionario del Tercer Mundo, que eliminaría a los traidores de su propio movimiento y conduciría a la liberación, nacional y social, potenciando las posibilidades de su pueblo. Inversamente, otros, veían en Perón a quien descabezaría con toda la energía necesaria la hidra de la subversión social, más peligrosa y digna de exterminio en tanto usurpaba las tradicionales banderas peronistas. Para otros muchos Perón era el pacificador, el líder descarnado de ambiciones. La maravilla del carisma de Perón, fue su capacidad para sacar a la luz tantos anhelos insatisfechos, mutuamente excluyentes pero todos encarnados con alguna legitimidad en el anciano líder que volvía al país.

Vista desde una perspectiva más amplia, la economía del país tuvo un desempeño medianamente satisfactorio, que habría de prolongar hasta 1975, y que no justificaba los pronósticos apocalípticos, aunque tampoco las fantasías de la Argentina potencia. Lo más notable fue el crecimiento del sector agropecuario pampeano. En estos años prósperos, el mundo se encontraba en condiciones de transformar al menos parte de su necesidad de alimentos en demanda efectiva, y se abrieron nuevos mercados para los granos y aceites argentinos.

El estado promovió el cambio de diversas maneras, aunque no cambió su tradicional política de transferir recursos a la economía urbana, que se mantuvo con apenas algunas modificaciones en los métodos. Pero lo decisivo fueron los efectos de la modernización general de la economía. La fabricación local de tractores y

cosechadoras, y también silos y otras instalaciones, permitió una mecanización total de la tarea y cambios sustanciales en las formas de almacenaje y el transporte. Las empresas agroquímicas introdujeron las semillas híbridas: a principios de la década de 1970 se obtuvieron éxitos espectaculares con el maíz, y luego con el sorgo granífero, el girasol, el trigo y la soja.

Esta verdadera revolución productiva permitió el crecimiento de las exportaciones de granos y aceites, mientras que los mercados para la carne continuaron estancados o en retroceso. También crecieron las exportaciones industriales: maquinaria agrícola, máquinas herramienta, automotores, productos siderúrgicos y químicos pudieron competir en los países vecinos, aprovechando a veces las oportunidades de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. La fase traumática dejó lugar a una expansión suave y sostenida que arrancó en los años de la presidencia de Illia y se mantuvo pese a los cambios de gobierno y a los avatares de las políticas económicas.

El producto industrial creció en forma sostenida luego de la gran crisis de 1963, sin ningún año de retroceso hasta 1975. Parte de ese crecimiento corresponde a la masificación de muchas de las inversiones realizadas luego de 1958, pero también contribuyó a un conjunto variado de empresas nacionales, de ramas dinámicas o vegetativas, grandes o medianas, que repuntaron luego de soportar el primer impacto de la instalación de las empresas extranjeras. Las empresas nacionales, luego de sufrir una fuerte depuración, se adecuaron a las nuevas condiciones, acomodaron sus posibilidades al espacio que le dejaban las grandes empresas extranjeras, absorbieron lo que podían de los nuevos socios o encontraron formas de asociación, como el uso de patentes y licencias o el suministro de partes para las grandes plantas de montaje.

Al igual que la agricultura, la industria se modernizó y se acercó, como nunca antes ni después, a los estándares internacionales. Su crecimiento se relaciona en parte con los procesos de concentración y depuración, y también con el aumento de la inversión del Estado, las compras de las empresas públicas o las nuevas obras de infraestructura, o la expansión de un sector consumidor pudiente, dispuesto a cambiar su automóvil cada dos años. Pero también, hubo un crecimiento del mercado interno debido al aumento de empleo industrial y sobre todo a la construcción, junto con una recuperación en los ingresos de los asalariados. Más allá de las políticas racionalizadoras, los sindicatos conservaron su eficacia en la defensa de sus representados, aunque probablemente esto no valió para la masa sin duda vasta de trabajadores no sindicalizados, de donde provenían muchos de los protagonistas de las nuevas formas de protesta social.

La fuerte conflictividad social, sustentada en un ciclo de crecimiento y de elevación de las expectativas, no podría ser satisfecha con una fácil redistribución, según la fórmula histórica del peronismo.

Pese al declamado liberalismo de los sectores propietarios, desde 1955 no habían disminuido ni los atributos del Estado ni su capacidad para definir las reglas del juego. Por allí pasaban grandes decisiones, como la transferencia de ingresos del sector exportador agrario al industrial, pero también el uso del crédito subsidiado, la promoción, las compras de empresas estatales o de los contratos de las obras públicas. Para los empresarios todo ello representaba la posibilidad de ganancias más fáciles y seguras que las derivadas de mejorar la eficiencia o la competitividad.

La experiencia del general Onganía muestra esas dificultades aun para las Fuerzas Armadas, proclives a identificar su propia estructura institucional con la del Estado. El sorprendente poder conservado por el sindicalismo después de 1955 muestra otro aspecto de ese Estado incontrolable: las frecuentes alianzas entre dos competidores para sacar beneficio a costa de un tercero o de la comunidad toda.

A través de la reiterada convocatoria a los sindicalistas para participar de la puja, los sectores subordinados tuvieron desde 1945 algún acceso al Estado y a sus decisiones. Durante el gobierno de Perón, su poder y su voluntad de controlar a cualquier fuerza social o política aseguraron la disciplina. Después de 1955, la conducción vanguardista de los sindicatos fue para los empresarios una garantía de la desmovilización de los trabajadores y de la negociación siempre posible. La ruptura de ese equilibrio luego de 1966, la fuerte movilización social y el desborde de cualquier instancia mediadora, así como la incapacidad demostrada por los militares para custodiar el poder, mostraron el peligro de que porciones importantes de los resortes del Estado

cayeran en manos dudosas. Quienes en 1973 confiaron su suerte a Peron esperaban que fuera capaz de controlar la movilizacion social y a la vez disciplinar a quienes apelaran en la puja corporativa a su capacidad de presion. En 1973, podia vislumbrarse un futuro para la escena corporativa, en la que Peron habia demostrado saber manejarse con soltura. Sobre la escena democratica, en cambio, habia muchas mas dudas, pese a la espectacular experiencia electoral de marzo. Los partidos politicos que debian ocuparla no entusiasmaban mayormente. La Hora del Pueblo, no llego a constituir un espacio de discusion y negociacion reconocido; mas alla de los acuerdos iniciales, Peron solo la uso como escenario para mostrar a la sociedad su fisonomia pacificadora, y a lo sumo para garantizar el respeto de las formas constitucionales. El resto de los partidos, empezando por la Union Civica Radical, participaron del embeleso general con Peron o se sintieron abrumados por la culpa de la proscripcion y se limitaron a aceptar sus terminos, renunciando de entrada a su funcion de control y alternativa. La idea misma de democracia, de representacion politica de los intereses sociales, de negociacion primero en el ambito de cada partido y luego de los espacios politicos comunes, de construccion colectiva del poder, tenia escaso prestigio en una sociedad largamente acostumbrada a que cada una de sus partes negociara por separado con el poder constituido. Los sectores propietarios se sentian mucho mas comodamente expresados por sus organizaciones corporativas. Los sectores populares, por su parte, que podian haber estado interesados en la construccion de un ambito especificamente politico, no encontraron para ello ni representacion ni voceros entre los actores politicos, ni mucho menos entre los corporativos.

La ola de movilizacion, que estaba llevando el enfrentamiento social a un punto extremo, contenia en sus origenes un importante elemento de participacion, visible en cada uno de los lugares de la sociedad donde se gestaba, desde una sociedad vecinal a un aula universitaria o una fabrica. Pero sus elementos potencialmente democraticos se cruzaban con toda una cultura politica espontanea que llevaba a identificar el poder con el enemigo y la represion, a menos que se lo “tomara”, para reprimir a su vez al enemigo. Mientras los partidos politicos carecian de fuerza o de conviccion para hacerse oir entre ellos, los activistas formados en las matrices del peronismo, el catolicismo o la izquierda, tendieron a acentuar y dar forma a esta cultura espontanea y a incluirla en la logica de la guerra. Los Montoneros particularmente, tuvieron una enorme capacidad para combinar la accion clandestina con el trabajo de superficie, que realizaron a traves de la Juventud Peronista. Pero al hacerlo introdujeron un sesgo en el desarrollo del movimiento popular: lo encuadernaron, lo sometieron a una organizacion rigida, cuya estrategia y taticas se elaboraban en otras partes, y eliminaron lo que la movilizacion tenia de espontaneo, de participativo, de plural. Convertida en parte de una maquina de guerra, la movilizacion popular fue apartada de la alternativa democratica y llevada a dar en otro terreno el combate final.

UNIDAD 5

“Dependencia o liberacion, 1966-1976” (desde el apartado “la vuelta de Peron”) - Breve historia contemporanea de la Argentina.

El 25 de mayo de 1973, asumió el gobierno el presidente Hector J. Campora, y el 20 de junio retornó al país Juan Domingo Peron. Ese día, un enfrentamiento entre grupos armados de distintas tendencias del peronismo provocó una masacre. El 13 de julio, Campora y el vicepresidente Solano Lima renunciaron; asumió la presidencia el titular de la Cámara de Diputados, Raul Lastiri. En septiembre se realizaron las nuevas elecciones y la fórmula Peron-Peron, que el líder compartió con su esposa Isabel alcanzó el 62% de los votos. El 1ro de julio del año siguiente, murió Peron e Isabel lo reemplazó.

Peron, puesto en el juego, armó su proyecto sobre tres bases: un acuerdo democrático con las fuerzas políticas, un pacto social con los grandes representantes corporativos y una conducción más centralizada de su movimiento. Para que funcionara necesitaba que la economía tuviera un desempeño medianamente satisfactorio y que pudiera reforzarse el poder del Estado. Este era un punto débil: los mecanismos y los instrumentos estaban desgastados y resultaron ineficaces, y el control que Peron podía tener no era pleno, pues las Fuerzas Armadas se mostraban reticentes, pese a la rehabilitación mutua que se concedieron con Peron; el gobierno, finalmente resultó corroído por la dormidable lucha desencadenada dentro del movimiento. El pacto social funcionó mal casi desde el principio, mientras que el pacto democrático al final resultó irrelevante pues no sirvió

ni para constituir una oposicion eficiente ni para suministrar se por si el respaldo necesario para el mantenimiento del gobierno constitucional.

El Programa de Reconstruccion y Liberacion Nacional, presentado en mayo de 1973, consistia en un intento de superar las limitaciones al crecimiento de una economia cuyos rasgos basicos no se pensaba modificar. Peron recurrio para pilotearlo a un empresario exitoso, en este caso ajeno al peronismo: Jose Ber Gelbard, jefe de la CGE, donde se nucleaban la mayoria de las empresas de capital basicamente nacional. Sus objetivos, acordes con los cambios ya consolidados en la estructura economica del pais, eran fuertemente intervencionistas y, en menos medida, nacionalistas y distribucionistas, y no implicaban un ataque directo a ninguno de los intereses establecidos.

Se esperaba apoyar el crecimiento de la economia tanto en una expansion del mercado interno cuanto en el crecimiento de las exportaciones. Las perspectivas de las exportaciones tradicionales eran excelentes: muy buenos precios y posibilidad de acceder a nuevos mercados; la nacionalizacion del comercio exterior apuntaba a asegurar la transferencia de parte de los beneficios al sector industrial, se ciudo mucho de preservar los ingresos de los sectores rurales, cuya productividad se quiso incrementar combinando alicientes y castigos. Uno de ellos -la posibilidad de expropiar tierras sin cultivar, incluido el proyecto de ley agraria- desencadeno a la larga un fuerte conflicto. Se trato de continuar expandiendo las exportaciones industriales a traves de convenios especiales.

Las empresas nacionales, fueron respaldadas con lineas especiales de credito; para lograr mayor eficiencia y control, se integraron a una Corporacion de Empresas Nacionales. Se apoyo especialmente algunos grandes proyectos industriales, de "interes nacional", mediante importantes subvenciones. El Estado aumento considerablemente sus gastos a traves de obras sociales e incremento el numero de empleados publicos y de empresas del Estado; contribuyo asi a activar la economia interna, aunque a costa del deficit creciente.

La clave del programa residia en el pacto social, con el que se procuraba solucionar el problema clasico de la economia. Mientras Ongania habia fracasado en su intento de cortar el nudo con la pura autoridad, Peron recurria a la concentracion. El Estado debia disciplinar a los actores combinando persuasion y autoridad. Hubo concertaciones sectoriales y una mayor, suscripta por la CGE y la CGT, que establecio el congelamiento de los precios y la supersion por dos años de las convenciones colectivas o paritarias. Fue compensado con un inmediato aumento del 20% general en los salarios.

La inflacion se freno bruscamente, mientras que la excelente coyuntura del comercio exterior permitio superar la angustiante situacion de la balanza de pagos y acumular un buen superavit, y las mejoras salariales y el incremento de gastos del Estado estimulaban el aumento de la actividad interna. Desde diciembre de 1973 comenzaron a acumularse problemas. El incremento del consumo hizo reaparecer la inflacion, mientras que el aumento del precio del petroleo en el mundo encarecio las importaciones. El Mercado Comun Europeo se cerro para las carnes argentinas. El pacto social debia servir para encontrar la manera equitativa y razonable de repartir los mayores costos, pero las reglamentaciones cada vez mas frondosas a las que se apelo, revelaron las crecientes falencias del Estado para hacer valer su autoridad.

Los actores del pacto social demostraron escasa capacidad y poca voluntad para cumplirlo. La CGE, investida de la delegacion global de los empresarios, los representaba mal, y aun a sus instituciones primarias, que en muchos casos habian sido forzadas a encuadrarse en ella, de acuerdo con las concepciones organicistas de Peron. Es probable que por las mismas razones, hayan firmado los acuerdos sin mucha conviccion, esperando que el paso del tiempo trajera condiciones mejores. Pero se descubrio que no podian asegurar que sus miembros cumplieran lo acordado. Los empresarios encontraron muchas maneras de violar el pacto: desabastecimiento, sobrepuestos, mercado negro, exportaciones clandestinas.

La CGT no se hallaba comoda y a gusto con un gobierno peronista con el cual no servia su tactica clasica de golpear y negociar sin comprometerse, la unica que sabian manejar cabalmente. Los sindicalistas carecian de tradicion, instrumentos y objetivos para cogobernar. La movilizacion de los trabajadores les impedia negociar con libertad. El triunfo electoral avivo las expectativas de la sociedad y dio un nuevo estimulo a la "primavera

de los pueblos”; en las fabricas, se tradujo en generalizado incremento de las reivindicaciones y en un estilo de lucha que incluía ocupaciones de plantas, que rebaso a las direcciones sindicales y hasta cuestiono la autoridad de los gerentes y patronos.

Peron se dedico a fortalecer a los dirigentes nacionales; reivindicando su imagen publica, amenazada por la izquierda peronista y reinstalandolos simbolicamente en el centro mismo del movimiento. Violado de uno y de otro lado, el pacto de fue desgastando ante la impotencia de las autoridades. El 12 de junio Peron convoco a una concentracion masiva en la historica Plaza de MAyo, dramaticamente pidio a las partes disciplina y amenaza con renunciar. Fue la ultima aparicion en publico antes de su muerte.

En la segunda fase del gobierno peronista, los actores cambiaron de estrategia y la puja recupero sus formas classicas. En la CGT se impusieron los partidarios de la negociacion dura. Isabel Peron se lanzo a construir una base propia de poder. Pese a que Isabel se dedico a parodiar las formulas y los gestos del lider muerto para capitalizar su herencia simbolica, su politica se aparto totalmente de la que aquel habia trazado en sus ultimos años. Se propuso homogeneizar el gobierno, colocando amigos e incondicionales en los puestos clave rompiendo una a una las alianzas que habia tejido Peron, que en un futuro esperaba reemplazar por otras nuevas, con los militares y los empresarios. En algunos de esos propositos, Isabel y los sindicalistas coincidieron. Asi provocaron la renuncia del ministro Gelbard.

El 1975 la crisis economica urgia a tomar medidas drasticas. Los problemas de la balanza de pagos eran muy graves, la inflacion estaba desatada, la puja distributiva era encarnizada y el Estado estaba totalmente desbordado. En ese contexto, el gobierno debio acceder a la tradicional demanda de la CGT y convoco a paritarias. A fines de marzo, la mayoria de los gremios habia acordado aumentos del 40%; el 2 de junio, el nuevo ministro de Economia, Celestino Rodrigo, del equipo de Lopez Rega, provoco un shock economico al decidir una devaluacion del 100% y un aumento de tarifas y combustibles similar o superior. El “rodrigazo” echo por tierra los aumentos acordados; los sindicalistas volvieron a exigir en las paritarias y los empresarios concedieron aumentos que llegaban al 200%. La presidenta decidio no homologarlos y genero una masiva resistencia de los trabajadores, que culmino en movilizaciones en la Plaza de Mayo y un paro general de 48 horas. Isabel cedio, Lopez Rega y Rodrigo renunciaron, los aumentos fueron homologados y devorados por la inflacion en solo un mes. En medio de una crisis economica galopante, el gobierno entro en su etapa final.

Peron y quienes, alrededor de Montoneros y la Juventud Peronista, constituian la llamada “tendencia revolucionaria” del peronismo. Hasta 1973, unidos en la lucha comun contra los militares, ni uno ni los otros tenian interes de hacerlas explicitas. Peron cimentaba su liderazgo en su capacidad de incluir a todos los que invocarian su nombre, desde los jovenes revolucionarios hasta los sindicalistas, los politicos provinciales mas conservadores o los grupos de choque de extrema derecha.

Montoneros y la Juventud Peronista aprovecharon su proclamada adhesion a Peron para insertarse mas profundamente en el movimiento popular y servirse de su espectacular crecimiento luego de 1973, cuando la sociedad entera parecia entrar en una etapa de rebelion y creatividad. En la cultura politica de estos sectores, podian reconocerse dos grandes concepciones. Una de ellas se apoyaba en la vieja tradicion peronista, nacionalista y distribucionista, alimentada durante la larga exclusion por la ausencia del retorno del lider, y con el, de los buenos tiempos en los que la justicia social coronaba el ascenso individual. Quienes permanecieron fieles a lo que sin duda era la capa mas profunda y solida de la cultura politica popular adherian al viejo estilo politico, autoritario, faccioso, verticalista y visceralmente anticomunista. La otra, arraigada en una parte importante de los sectores populares, pero sobre todo en quienes se agregaron tarde al peronismo, e incorporo la critica radical de la sociedad, condensada en la consigna “liberacion o dependencia”. Ambas concepciones, se definieron en consignas de batalla: la “patria peronista” y la “patria socialista”. Los Montoneros, que aspiraban al principio a encarnar ambas, terminaron identificados con la segunda, mientras que el sindicalismo y los grupos de extrema derecha se convirtieron en abanderados de la primera.

El triunfo de 1973 acabo con los equívocos dentro del peronismo y abrio la lucha por la conduccion real y simbolada del movimiento y del pueblo. El trotskista ERP, la otra gran organizacion armada, no creia ni en la

vocacion revolucionaria del peronismo ni en la democracia misma. Otras lineas revolucionarias dentro del peronismo nunca habian contado con el posible apoyo de Peron, y estaban dispuestas a una guerra larga y de posiciones, en la que la victoria electoral de 1973 era apenas una etapa y una circunstancia. Para Montoneros, el triunfo en marzo abria una lucha decisiva por el control del poder y del discurso peronista, y concentraron todas sus energias en dominar a ambos, expulsando a los enemigos "infiltrados y traidores" y ganando para su causa al propio Peron.

A principios de 1973, empujados por la euforia electoral y estimulados por el espacio que les habia abierto el propio Peron, los militares de la Tendencia se lanzaron a ocupar espacios de poder en el Estado. Aliados o simpatizantes suyos ocupaban varias gobernaciones -incluyendo las que eran clave, como la de Buenos Aires, Cordoba y Mendoza-, dos o tres ministerios, las universidades y muchas otras instituciones y departamentos gubernamentales. Pero pronto se restablecieron las relaciones de fuerza reales. A partir de la renuncia de Campora, una a una perdieron las posiciones ocupadas.

Desplazada de las posiciones de poder en el gobierno, la Tendencia revolucionaria se lanzo a la lucha de aparatos, en competencia con el sindicalismo y con los grupos de derecha que rodeaban a Peron. Dentro de la tradicion del peronismo, la movilizacion callejera y la concentracion en la Plaza de Mayo, constituian la expresion del poder popular y el ambito donde el lider recogia los impulsos del pueblo. Los manifestantes se encolumnaban de manera disciplinada y competian por los lugares mas visibles o mas cercanos al lider, los carteles o las consignas. En cada una de esas jornadas se libraba una batalla real.

Simultaneamente, la guerra de aparatos se desarrollo bajo la terrible forma del terrorismo, y en particular de los asesinatos. Montoneros se dedico a eliminar personajes conspicuos, como Jose Rucci, secretario general de la CGT y pieza importante en la estrategia de Peron con los sindicistas. Contra ellos se constituyo otro terrorismo, con aparatos parapoliciales que operaban bajo el rotulo de Accion Anticomunista Argentina, o "Triple A".

Por ultimo, la competencia se desarrollo en el ambito del discurso. Los Montoneros habian hablado en nombre de Peron, pero en el peronismo no cabia mas que un solo enunciador, aunque tuviera infinitos traductores, mas o menos traidores. Los Montoneros debieron enfrentarse con el problema de un lider vuelto al pais que, abandonando su cultivada ambigüedad, empezaba a hablar inequívocamente, recordando la ortodoxa peronista, que poco tenia que ver con la "socialista". Mientras concentraban toda su artilleria en los "traidores", ajenos al peronismo, reinterpretaron hasta donde era posible las palabras de Peron, elaboraron la teoria del "cerco" o el "entorno" que impedia a Peron reconocer la verdadera voluntad de su pueblo, y se aferraron a la imagen de una "Evita montonera" que debia legitimar su ortodoxia en los origenes mismos del peronismo. El 1ro de Mayo de 1974, se llego a la ruptura: al abandonar una plaza donde el propio Peron los expulsaba, renunciaban a hablar en nombre del Movimiento.

Pronto optaron por volver a la vieja tactica y pasaron a la clandestinidad. Hubo mas asesinatos, secuestros e intervencion en conflictos sindicales. En ese camino los siguio el ERP, que desde 1974 habia instalado un foco en el monte de Tucuman. Contra ambos crecio la represion clandestina, que se cebó sobre todo en quienes -intelectuales, estudiantes, obreros, militantes de villas o barrios- habian acompañado la movilizacion pero no pudieron pasar a la clandestinidad.

Por entonces, el gobierno peronista se acercaba a su final. El "rodrigazo" habia desatado una crisis economica que hasta el final resulto imposible de dominar: inflacion galopante, "corridas" hacia el dolar, aparicion de los mecadismos de indexacion y, en general, escasas posibilidades para controlar la coyuntura desde el poder. Los empresarios cedieron con facilidad a los reclamos de los sindicalistas, como si se complacieran en fomentar el caos de la economia. Rotos los acuerdos que habia construido Peron, los grandes empresarios se separaron de la CGE y atacaron con decision al gobierno. Luego de julio, cuando Lopez Rega cayo en desgracia, comenzaron a prepararse para el golpe. El general Videla, nuevo comandante en jefe, al tiempo que se negaba a respaldar politicamente al gobierno en crisis, le puso plazos, espero que la crisis economica y la politica sumadas consumaran su deterioro y preparo su reemplazo.

Luego de la renuncia de Lopez Rega y de Rodrigo, una alianza de politicos y sindicalistas ensayo una salida: Italo Luder, presidente del Senado reemplazo brevemente a Isabel y se especulo con que el cambio fuera definitivo, por renuncia o juicio politico. El retorno de Isabel a la presidencia clausuro la posibilidad y a la vez agravo la crisis politica que, sumada a la economica, creo una situacion de tension insoportable y una aceptacion anticipada de cualquier salida. Muchos peronistas se convencieron de que la caida de Isabel era inevitable y, pensando en el futuro, prefirieron evitar diversiones, acompañandola hasta el fin, el 24 de marzo de 1976, cuando los comandantes militares la depusieron y arrestaron. Como en ocasiones anteriores, el grueso de la poblacion recibio el golpe con inmenso alivio y muchas expectativas.

“El Proceso, 1976-1983”- Breve historia contemporánea de la Argentina.

El 24 de marzo de 1976, la Junta de Comandantes en Jefe, integrada por el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier Orlando Ramon Agusti, se hizo cargo del poder, dicto los instrumentos legales del llamado “Proceso de Reorganizacion Nacional” y designo presidente de la Nacion al general Videla.

El caos economico de 1975, la crisis de autoridad, las luchas facciosas y la muerte presente cotideanamente, la accion espectacular de las organizaciones guerrilleras, el terror sembrado por la Triple A, todo ello creo las condiciones para la aceptacion de un golpe de Estado que prometia reestablecer el orden y asegurar el monopolio estatal de la fuerza. El caracter de a solucion proyectada podia adivinarse en las metáforas empleadas, resumidas en una mas clara y contundente: cortar con la espada el nudo gordiano.

El tajo fue en realidad una operacion integral de represion, cuidadosamente planeada por la conduccion de las tres armas, ensayada primero en Tucuman y luego ejecutada de modo sistematico en todo el pais.

La planificacion general y la supervision tactica estuvieron en manos de los mas altos niveles de conduccion castrense, y los oficiales superiores no desdeñaron participar personalmente en tareas de ejecucion, poniendo de relieve el compromiso colectivo. Las ordenes bajaban, por la cadena de mandos, hasta los encargados de la ejecucion, los Grupos de Tareas, que tambien tenian una organizacion especifica. La represion fue, en suma, una accion sistematica realizada desde el Estado.

Se trato de una accion terrorista clandestina, dividida en cuatro momentos principales: el secuestro, la tortura, la detencion y la ejecucion. Para los secuestros, cada grupo de operaciones operaba preferentemente de noche, en los domicilios de las victimas, a la vista de su familia, que en muchos casos era incluida en la operacion. Al secuestro le seguia el saqueo de la vivienda, perfeccionado posteriormente cuando se obligo a las victimas a ceder la propiedad de sus inmuebles, con todo lo cual se conformo un botin de la horrenda operacion.

El destino primero del secuestrado era la tortura, sistematica y prolongada. En principio la tortura servia para lograr la denuncia de compañeros, lugares, operaciones; pero mas en general tenia el proposito de quebrar la resistencia del detenido, anular sus defensas, destruir su dignidad y su personalidad. Los sobrevivientes iniciaban una detencion mas o menos prolongada en alguno de los 340 centros clandestinos de detencion. Se encontraban en unidades militares pero generalmente en dependencias policiales. La administracion y el control del movimiento de este enorme numero de centros da idea a la complejidad de la operacion y de la cantidad de personas involucradas. En esta etapa final de su calvario, de duracion imprecisa, la completaba la degradacion de las victimas, mal alimentadas, sin atencion medica, y siempre encapuchadas o “tabicadas”. Muchas detenidas embarazadas dieron a luz en esas condiciones; muchas veces los mismos secuestradores se apropiaban de sus hijos, o los entregaban a conocidos.

Pese a que la Junta Militar establecio la pena de muerte, todas las ejecuciones fueron clandestinas. A veces los cadaveres aparecian en la calle, como muertos en enfrentamientos o en intentos de fuga. En algunas ocasiones se dinamitaron pilas enteras de cuerpos, como espectacular represalia en alguna accion guerrillera. Pero la mayoria de los casos los cadaveres se ocultaban, enterrados en cementerios como personas desconocidas, quemados en fosas colectivas o arrojados al mar con bloques de cemento, luego de ser adormecidos con una inyeccion. De ese modo, no hubo muertos, sino “desaparecidos”.

Las desapariciones se produjeron masivamente entre 1976 y 1978, el trienio sombrío, y luego se redujeron a una expresión mínima. Se trató en su mayoría de jóvenes de entre 15 y 35 años. Algunos pertenecían a las organizaciones armadas: el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) fue diezmado entre 1975 y 1976, y Montoneros, que también experimentó fuertes bajas en sus cuadros, siguió operando, aunque limitada a acciones terroristas desvinculadas de su anterior práctica política. Cayeron militantes de organizaciones políticas y sociales, dirigentes gremiales de base, con actuación en las comisiones internas de fábricas, y junto con ellos militantes políticos varios, sacerdotes, intelectuales, abogados relacionados con la defensa de presos políticos, activistas de organizaciones de derechos humanos. Algunos tenían relaciones indirectas con las organizaciones armadas; muchos otros cayeron por la sola razón de ser parientes de alguien, figurar en una agenda o haber sido mencionados en una sesión de tortura. La operación procuraba eliminar todo activismo, toda protesta social, toda expresión de pensamiento crítico, toda posible dirección política de la movilización popular que se había desarrollado desde mediados de la década anterior, y que entonces era aniquilada.

Las víctimas fueron muchas, pero el verdadero objetivo eran los vivos, el conjunto de la sociedad que, antes de emprender su transformación profunda, debía ser controlada y dominada por el terror y la palabra. El Estado se desdobló: una parte, clandestina y terrorista, practicó una represión sin responsables, eximida de responder a los reclamos. La otra, pública, apoyada en un orden jurídico que ella misma estableció, silenciaba cualquier otra voz. No solo desaparecieron las instituciones de la república, sino que fue clausurada autoritariamente la expresión pública de opiniones. Los partidos y la actividad política toda quedaron prohibidos, así como los sindicatos y la actividad gremial; se sometió a los medios de prensa de una explícita censura, que impedía cualquier mención del terrorismo estatal y sus víctimas, y artistas e intelectuales fueron vigilados. Solo quedó la voz del Estado, dirigiéndose a un conjunto atomizado de habitantes.

Clausurados los espacios donde los individuos podían identificarse en colectivos más amplios, cada uno quedó solo e indefenso ante el Estado aterrorizador, y en una sociedad inmovilizada y sin reacción se impuso la cultura del miedo. Algunos no aceptaron esto y emigraron al exterior o se refugiaron en un exilio interior; en ámbitos recoletos, casi domésticos, practicando el mimetismo a la espera de la brecha que permitiera volver a emerger. La mayoría aceptó el discurso estatal, justificó lo poco que no podía ignorar de la represión con el argumento del “por algo será”, o se refugió en la deliberada ignorancia de lo que sucedía a la vista de todos.

El gobierno militar nunca logró despertar ni entusiasmo ni adhesión explícita en el conjunto de la sociedad, pese a que lo intentó. A mediados de 1978, cuando se celebró el Campeonato Mundial de Fútbol, las máximas jerarquías asistieron a los estadios donde la Argentina obtuvo el título, y a fines de ese año, agitando el turbio sentimiento chauvinista, poco faltó para que iniciaran una guerra con Chile. Solo obtuvo pasividad, pero le alcanzó para encarar la transformación profunda que habría de eliminar definitivamente los conflictos de la sociedad, cuyas primeras consecuencias contribuyeron por otra vía a la atomización de la sociedad y a la eliminación de cualquier posible respuesta.

Esa transformación fue conducida por Martínez de Hoz, ministro de Economía. Cuando asumió, debía enfrentar una crisis cíclica aguda -inflación desatada, recesión, problemas en la balanza de pagos-, complicada por la crisis política y social y el fuerte desafío de las organizaciones armadas al poder del Estado. La represión inicial, que descabezó la movilización popular, sumada a una política anticrisis clásica permitió superar la coyuntura. Pero esta vez las Fuerzas Armadas y los sectores del establishment que las acompañaban habían decidido ir más lejos. En su diagnóstico, la inestabilidad política y social crónica nacía de la impotencia del poder político ante los grandes grupos corporativos que alternativamente se enfrentaban, generando desorden y caos, o se unían para beneficiarse con las prebendas que arrancaban al Estado. Una solución de largo plazo debía cambiar los datos básicos de la economía y así modificar esa configuración social y política crónicamente inestable. No se trataba de encontrar la fórmula del crecimiento, sino la del orden y de la seguridad. Se buscó solucionar los problemas que la economía ponía a la estabilidad política, si era necesario a costa del propio crecimiento económico.

Segun un balance que progresivamente se imponia, el Estado intervencionista, benefactor y prebendario, era el gran responsable del desorden social; el mercado parecia el instrumento capaz de disciplinar por igual a todos los actores, premiando la eficiencia e impidiendo los malsanos comportamientos corporativos. Al final de la transformacion de condujo Martinez de Hoz, el poder economico se concentro en un conjunto de grupos empresarios, transnacionales y nacionales, que acapararon las prebendas estatales y redujeron los margenes de la puja corporativa. Esta transformacion no fue el producto de la fuerza automatica del Estado: requirio una fuerte intervencion del Estado para reprimir y desarmar a los actores del juego corporativo, para imponer las reglas que facilitarían el crecimiento de los vencedores y para trasladar hacia ellos los recursos del conjunto de la sociedad.

La ejecucion de esa transformacion planteaba un problema politico, la conduccion economica debia durar en el poder un tiempo suficiente como para que los cambios fueran irreversibles. El ministro de Economia y su grupo permanecieron durante cinco años: el efecto se manifesto de inmediato despues de su salida, cuando sus sucesores fracasaron en el intento de cambiar algo del rumbo.

Martinez de Hoz conto inicialmente con fuerte apoyo, casi personal, de los organismos internacionales y de los bancos extranjeros, y del sector mas concentrado del establishment local. La relacion con los militares fue mas compleja, en parte por sus profundas divisiones que se expresaban en apoyos, criticas o bloqueos a su gestion, y en parte por el peso que entre ellos tenian muchas ideas y concepciones tradicionales. Los militares juzgaban que el control de los sindicatos y la fuerte reduccion de los ingresos laborales debian equilibrarse, por razones de seguridad, con el mantenimiento de un nivel elevado de empleo. Tambien defendieron la pervivencia de las empresas estatales. Las relaciones con los empresarios tampoco fueron faciles, debido a la cantidad de intereses sectoriales que debian ser afectados; pero no conformaron un frente unificado, y primo la inflexibilidad del ministro. Su carta de triunfo principal fue haber colocado durante varios años a la economia en una situacion de inestabilidad tal que un cambio de politico garantizaba una catastrofe. Cuando esto dejo de funcionar, la concentracion y el endeudamiento ya habian creado los mecanismos para asegurar la continuidad de sus politicas.

Luego de intervenir la CGT y los principales sindicatos, suprimir las negociaciones colectivas y prohibir las huelgas, se congelaron los salarios, que en 1976 cayeron en terminos reales alrededor del 40%. Con la ayuda suplementaria de los creditos externos, la crisis ciclica se supero sin desocupacion.

Desde mediados de 1977 comenzaron a plantearse grandes reformas. La reforma financiera elimino la regulacion estatal de la tasa de interes y permitio la proliferacion de bancos e instituciones financieras. Las ofertas para los inversores se diversificaron. La competencia entre las instituciones financieras mantuvo elevada la tasa de interes, y con ella la inflacion. El Estado garantizaba no solo los titulos que emitia, sino los depositos a plazo fijo, tomados a tasa libre por entidades privadas, de modo que, ante una eventual quiebra, se devolveria el deposito a los ahorristas.

La segunda gran modificacion se produjo en diciembre de 1978 con la llamada "pauta cambiaria". Se trato de fortalecer la previsibilidad cambiaria, y asi reducir por pasos la inflacion. El gobierno fijo una tabla de devaluacion mensual del peso, gradualmente decreciente hasta llegar en algun momento a cero. Pero la inflacion subsistio, y el peso se revaluo de modo considerable respecto del dolar. La consecuencia del dolar barato y los bajos impuestos fue una inundacion de productos importados a precio infimo, que aceto con dureza a la industria local.

La adopcion de la pauta cambiaria coincidio con una gran afluencia de dinero del exterior, proveniente de los beneficios extraordinarios del petroleo. Hubo mucho dinero en circulacion, se obtuvieron abultados beneficios nominales -la "plata dulce"- y muchos pudieron comprar costosos productos importados o viajar al exterior. Pero la "tablita" -tal el nombre popular de la pauta cambiaria- no redujo ni las tasas de interes ni la inflacion. Mientras se constituia la base de la deuda externa, esta "bicicleta" se agregaba a la "plata dulce" y a los "importados coreanos" para configurar la apariencia de una modificacion sustancial de la economia y de sus reglas, beneficiosas para todos.

Se trataba de un mercado altamente inestable, pues la masa de dinero se encontraba colocada a corto plazo y los capitales podían salir del país sin trabas. El estado financió su déficit operativo y sus obras públicas con endeudamiento externo.

A principios de 1980, mientras la economía real agonizaba, la economía imaginaria del mercado financiero rodaba hacia la voragine. Las altas tasas de intereses eran inconciliables con las tasas de beneficio normales, de modo que ninguna actividad productiva resultaba rentable ni podía competir con la especulación. Muchas empresas tuvieron problemas, aumentaron las quiebras y los acreedores financieros, con infinidad de créditos incobrables, buscaron salir del aprieto ofreciendo tasas más altas para captar más depósitos. En marzo de 1980, finalmente, el Banco Central declaró la quiebra del banco privado más grande y de otros tres más importantes. Para frenar la corrida bancaria, el gobierno asumió sus pasivos, que representaban la quinta parte del sistema financiero.

En marzo de 1981, debía asumir el nuevo presidente, general Roberto Marcelo Viola; Martínez de Hoz dejaría el ministerio, y con él cesaría la vigencia de la “tablita”. A lo largo de 1981, y ya con la nueva conducción económica, el peso fue devaluado en un 400%. La devaluación fue catastrófica para las empresas endeudadas en dólares. El Estado, que ya había absorbido las pérdidas del sistema bancario, concurrió a su exilio en 1982 y se hizo cargo de la deuda externa de las empresas, aumentando su propio endeudamiento.

La suba de las tasas de interés en Estados Unidos indicó la aparición de un fuerte competidor en la captación de fondos financieros. En 1982 México anunció que no podía pagar su deuda externa y declaró una moratoria. Los créditos fáciles para los países latinoamericanos se cortaron.

La idea de que el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad se asociaban con la industria y el mercado interno fue abandonada. A la protección industrial se le achacó su falta de competitividad, y se optó por premiar la eficiencia y la capacidad para competir en el mercado mundial. La industria sufrió la competencia de los artículos importados, el encarecimiento del crédito, la supresión de muchos mecanismos de promoción y la reducción del poder adquisitivo en la población. Los sectores más antiguos e ineficientes, como el textil y el de la confección, fueron barridos por la competencia, pero también resultaron muy golpeados aquellos nuevos, como el metalmeccánico o el electrónico. Por entonces se producía en el mundo un avance tecnológico muy fuerte, de modo que la brecha que separaba a la Argentina de esa vanguardia volvió a ensancharse. En cambio crecieron y se beneficiaron con la reestructuración las grandes empresas elaboradoras de bienes intermedios, como celulosa, siderúrgica, aluminio, petroquímica, petróleo o cemento, y también las automotrices. Para ellas se mantuvieron los antiguos beneficios y promociones, propios del Estado prebendario, y se agregaron otros nuevos, para favorecer exportaciones.

El nuevo perfil exportador de la economía que se insinuaba se notó también en el sector agropecuario. Hacia 1976 culminaba una verdadera revolución productiva, que multiplicó el producto: semillas híbridas, agroquímicos, expansión de la frontera, desarrollo de cultivos oleaginosos y también crecimiento de la industria aceitera. Pero la sobrevaluación del peso se comió los beneficios. Por otra parte, sus ingresos influían menos en la economía. Ya no subsidiaron a la industria manufacturera, a través del Estado, y en cambio se volcaron al sector financiero, local o externo. Luego cuando la debacle cambiaria volvió a colocarlos en buenas condiciones, la caída de los precios internacionales de los cereales prolongó su crisis.

Si bien el sector industrial perdió mucha mano de obra, en el conjunto de la economía la desocupación fue escasa. El gobierno se embarcó en una serie de grandes proyectos, aprovechando los créditos externos baratos: las obras del Mundial de Fútbol, autopistas y caminos, represas hidroeléctricas o centrales atómicas. A partir de 1981 la crisis, la inflación y la recesión hicieron descender dramáticamente tanto la ocupación como el salario real.

Cuando la burbuja financiera se derrumbó, quedó en evidencia que la principal consecuencia de la traumática transformación había sido una fuerte concentración económica. En este caso, al principal papel no correspondió a las empresas extranjeras. Les resultaba difícil manejarse en un medio altamente especulativo, sometido a bruscos cambios en las reglas. Aquí los empresarios locales tenían ventaja. En esos años, junto con algunas

transnacionales, crecieron de modo espectacular unos cuantos grupos locales, directamente ligados a un empresario o a una familia empresarial exitosos, como Macri, Perez Companc, Bulgheroni, Fortbat, o transnacionales con fuerte base local, como Bunge y Born o Techint. Así, el establishment económico adquirió una nueva fisonomía. Sobrevivieron los que capitalizaron sus beneficios comprando empresas en dificultades, con las que constituyeron los conglomerados.

En los años en que Martínez de Hoz condujo la economía, el Estado realizó importantes obras públicas y contrato a empresas de construcción o de ingeniería pertenecientes a estos grupos. Por otra parte, las empresas del Estado adoptaron como estrategia privatizar parte de sus actividades. En torno a esas actividades se construyeron algunas de las más poderosas empresas nuevas. Las empresas contratistas del Estado se beneficiaron primero con las condiciones pactadas y luego con el mecanismo de ajustar los costos al ritmo de la inflación que, dada la magnitud de esta y las dificultades del gobierno para cumplir con sus compromisos, terminaba significando un beneficio mayor aun que el de la obra misma. Otras empresas aprovecharon los regímenes de promoción. Estos, posibilitaban importantes reducciones impositivas, avales para créditos baratos, seguros de cambio para los créditos en dólares, monopolización del mercado interno, decisivo en el caso del papel de diario, o suministro de energía a bajo costo.

En un contexto de estancamiento, estos grupos crecieron a costa de un Estado que había pasado de la promoción general de algunos sectores de la economía a la prebenda individualizada, en el beneficio de grupos que frecuentemente colonizaban sus oficinas. La colusión de intereses fue grande y desmintió el discurso del liberalismo. Los grupos acumularon una fuerza tal que en el futuro resultaría muy difícil revertir las condiciones en que actuaban y, junto con los acreedores extranjeros, se convirtieron en los nuevos tutores del Estado.

La reducción de las funciones del Estado fue uno de los propósitos más firmemente proclamados por Martínez de Hoz. Su propuesta suscitó un fuerte rechazo en buena parte de las Fuerzas Armadas, pero el ministro obtuvo una importante victoria argumentativa cuando logró ensamblar la predica de la lucha antisuversiva con el discurso contra el Estado, e incluso contra el industrialismo.

Entre los militares, había muchos que adherían a las ideas nacionalistas y dirigistas, y otros que aspiraban más simplemente, a sumarse a los beneficiarios del mana estatal. Por diferentes razones, ambos coincidían en el mantenimiento de las empresas públicas y en el desarrollo de los grandes emprendimientos estatales.

En un punto coincidían quienes querían aplicar el liberalismo antiestatista ortodoxo y quienes aspiraban a monopolizar sus beneficios probendatarios: eliminar aquellos dispositivos estatales que limitaban el uso discrecional del Estado por el gobierno. La regulación del crédito y de la tasa de interés, la política arancelaria y el control de cambios, fueron suprimidos en general pero retomados en muchos casos singulares. La llamada “privatización periférica” permitió crecer a su costa a los competidores privados, cuyos directivos eran puestos con frecuencia al frente de ellas. Así se endeudaron y deterioraron las empresas de servicios, hasta entonces relativamente eficientes, mientras al mismo tiempo el Estado se hacía cargo de infinidad de empresas y bancos quebrados por obra de su política económica.

Se trataba de una manera paradójica de achicar el Estado. Los resultados fueron contrarios. El Estado premió a los que sabían obtener de él distintos tipos de prebendas, por mecanismos no desasido diferentes de los que se había criticado. Ni siquiera mejoró la eficiencia del Estado en el campo que le era intrínseco e intransferible: la recaudación y asignación de recursos fiscales. El gasto público creció en forma sostenida, alimentado primero con la emisión y luego con el endeudamiento externo. Los espacios para las negociaciones espurias se multiplicaron debido a que las tres Fuerzas Armadas se repartieron prolijamente la administración del Estado y la ejecución de las obras públicas, multiplicando las demandas de los recursos.

El Estado se vio afectado de forma más profunda aun. El llamado “Proceso de Reorganización Nacional” supuso la coexistencia de un Estado terrorista clandestino, encargado de la represión, y de otro visible, sujeto a normas establecidas por las propias autoridades revolucionarias; pero que sometían sus acciones a una cierta judicialidad.

La primera cuestión oscura era donde residía realmente el poder, pues pese a que la tradición política del país era fuertemente presidencialista, resultó diluida y sometida a permanente escrutinio y limitación por los jefes de las tres armas. El Estatuto del Proceso y las actas institucionales complementarias crearon la Junta Militar, con atribuciones para designar al presidente y controlar una parte importante de sus actos. También se creó la Comisión de Asesoramiento Legislativo, para discutir las leyes; integrada por tres representantes de cada arma, que obedecían órdenes de sus mandos. Cada uno de los cargos ejecutivos, desde gobernadores hasta intendentes, así como el manejo de las empresas del Estado y demás dependencias, fue objeto del reparto entre las fuerzas, y quienes los ocupaba dependían de una doble cadena de mandos: del Estado y de su Arma.

Contaminado por el Estado terrorista clandestino, todo el edificio jurídico de la república resultó así afectado, al punto que prácticamente no hubo límites normativos para el ejercicio del poder, que funcionó como potestad omnimoda del gobernante.

En suma, la Reorganización no se limitó a suprimir los mecanismos democráticos constitucionales o a alterar profundamente las instituciones republicanas. Desde dentro mismo realizó una verdadera revolución contra el Estado, afectando la posibilidad de ejercer incluso las funciones de regulación y control básicas.

La fragmentación del poder, las tendencias centrifugas y la anarquía derivaban en la escrupulosa división del poder entre las tres fuerzas, al punto de no existir una instancia superior a ellas que dirimiera los conflictos. En torno a los generales Videla y Viola se constituyó la facción más fuerte, pero que distaba de ser dominante. Estos jefes respaldaban a Martínez de Hoz pero reconocían la necesidad de encontrar en el futuro alguna salida política.

Otro grupo afirmaba que la dictadura debía continuar y que la represión debía llevarse hasta sus últimas consecuencias. Sus figuras más destacadas eran los generales Menéndez y Manson.

El tercer grupo lo constituyó la Marina de Guerra, finalmente dirigida por su comandante Massera, quien, confiando en sus talentos políticos, se propuso encontrar una salida política que lo llevara a él mismo al poder. Massera jaqueó a Videla, para acotar su poder, y tomó distancia de Martínez de Hoz. Se preocupó por encontrar banderas para lograr alguna adhesión popular al gobierno: el Campeonato Mundial de Fútbol y luego el conflicto con Chile, que preludio la guerra de Malvinas, también promovida por la Armada.

El grupo de Videla y Viola fue avanzando gradualmente en el control del poder, pero en mayo de 1978 Massera reanotó un triunfo cuando logró que se separaran las funciones de presidente de la Nación y de comandante en jefe del Ejército, pese a que Videla fue confirmado como presidente hasta 1981 y Viola lo sucedió como jefe del Ejército. El desplazamiento de Menéndez fue un triunfo importante para Videla, aunque poco después Viola pasó a retiro y fue reemplazado por Galtieri.

En suma, podría decirse que la política de orden empezó fracasando con las propias Fuerzas Armadas, pues la corporación militar se comportó de manera indisciplinada y facciosa, y poco hizo por mantener el orden que ella misma pretendía imponer a la sociedad. Solo hacia fin del período de Videla, estimulados por el descontento que generó la crisis económica, así como por las crecientes dificultades que encontraba el gobierno militar y sus fuertes disensiones intestinas, las voces de protesta, todavía tímidas y confusas, comenzaron a elevarse.

Esta transición del silencio a la palabra varió según los casos. Los empresarios apoyaron el Proceso desde el comienzo, pero a la distancia. Pese a las coincidencias generales había desconfianzas recíprocas: los militares atribuían a los empresarios parte de la responsabilidad del caos social que se habían propuesto modificar, y estos, por su parte, estaban divididos en intereses. Los específicamente beneficiados todavía no constituían un grupo orgánico, institucionalizado y con voz propia. Las voces corporativas criticaban aspectos específicos de las políticas económicas que las afectaban y algunas políticas generales como la elevada inflación, pero más allá de eso carecían de unidad y fuerza para presionar en conjunto. El general Viola, buscando tomar distancia de la política de Martínez de Hoz, convocó específicamente a los voceros de los grandes sectores empresarios y los integró en su gabinete, pero esa participación concluyó con su caída, y desde entonces los numerosos empresarios sacudidos por la crisis fueron integrando con creciente entusiasmo el frente opositor.

Las principales fabricas fueron ocupadas militarmente, hubo “listas negras”, para mantener alejados a los activistas, y el control ideologico para los aspirantes de un empleo. La CGT y la mayoría de los grandes sindicatos fueron intervenidos, se suprimieron el derecho a la huelga y las negociaciones colectivas y los sindicatos fueron separados del manejo de las obras sociales.

El gobierno mantuvo una minima comunicacion con los sindicalistas, casi limitada a la conformacion de la delegacion que anualmente debia concurrir a la asamblea de la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT). Los sindicalistas se agruparon en dos tendencias; los dialoguistas y los combativos. En abril de 1979, los combativos realizaron un paro general de protesta, que concluyo con la prision de la mayoría de los dirigentes. A fines de 1980, los combativos reconstruyeron la CGT y eligieron como secretario a Saul Ubaldini. En 1981 la CGT realizo una nueva huelga general, con consecuencias similares a la de 1979, y a fines de ese año una marcha obrera hacia la iglesia de San Cayetano reclamando “pan, paz y trabajo”. Las huelgas parciales se hicieron mas frecuentes e intensas; el 30 de marzo de 1982 la CGT convoco, por primera vez desde 1975, una movilizacion en la Plaza de Mayo, que el gobierno reprimio con violecia: hubo dos mil detenidos en Buenos Aires y un muerto en Mendoza.

Tambien la iglesia modifico su comportamiento a medida que el regimen empezaba a dar muestras de debilidad. Al comienzo tuvo una actitud complaciente. Esta acepto mansamente los asesinatos de varios religiosos, callo cualquier critica, hizo poco por quienes reclamaron su ayuda, justifico de manera poco velada la llamada “erradicacion de la subversion atea”, y hasta tolero que algunos de sus miembros participaran directamente en ella. En 1979, el Arzobispado de Buenos Aires impulso la Pastoral Social para reconstruir el vinculo entre Iglesia y trabajadores. Las preocupaciones por las cuestiones morales o por la familia se extrendian hacia donde los derechos individuales y la politica: el documento “Iglesia y comunidad nacional” afirmo los principios republicanos, indico la opcion de la iglesia por la democracia, su apartamiento del regimen militar y su vinculacion con los crecientes reclamos de la sociedad.

El mas notable de ellos fue el de los derechos humanos. En medio de lo mas terrible de la represion, un grupo de madres de desaparecidos empezo a reunirse todas las semanas en la Plaza de Mayo. Marchaban con la cabeza cubierta por un pañuelo blanco, reclamando por la aparicion de sus hijos. En forma gradual, las Madres de Plaza de Mayo se convirtieron en la referencia de un movimiento cada vez mas amplio de asociaciones defensoras de los derechos humanos y fueron instalando una discusion publica, fortalecida desde el exterior por la prensa, los gobiernos y las organizaciones civiles. Desde fines de 1981, los militares se vieron obligados a dar alguna respuesta. Aunque en general coincidieron en que la cuestion debia darse por concluida.

Este clima empezo a insuflar algo de vida a los partidos politicos. La veda politica, impuesta en 1976, congelo la actividad partidaria y a la vez prorrogó a las dirigencias que tuvieron una actitud escasamente critica. La prohibicion politica termino de hecho en 1981. Los dispersos grupos de derecha fueron convocados para construir una fuerza politica oficialistas por el propio gobierno, mientras peronistas y radicales entablaban conversaciones con otros partidos menores que culminaron, a mediados de 1981, con la constitucion de la Multipartidaria. Ricardo Balbin, el veterano politico radical que animo este intento, murio en 1981, poniendo mas en evidenica la vacancia de direccion politica. Los partidos se comprometieron a no colaborar con el gobierno en una salida electoral condicionada ni a aceptar una democracia sometida a la tutelar militar. Se reclamaron los unicos depositarios de la legitimidad politica e incorporaron las protestas de empresarios y sindicalistas o las vinculadas con los derechos humanos.

Desde 1980, los dirigentes del Proceso discutian la cuestion de la salida politica. Les preocupaba la crisis economica, el aislamiento, la adversa opinion internacional -en la que pesaban cada vez mas los reclamos por los derechos humanos- Las disidencias se manifestaron publicamente con la designacion de Viola -a la que se opuso la Marina-

Viola procuro aliviar la situacion de los empresarios locales, golpeados por la crisis financiera y a violenta devaluacion de la moneda, y a la vez trato de concertar la politica economica, incorporandolos al gabinete. Tomo contacto con los distintos politicos -los “amigos” del Proceso-, pero no logro organizar ningun apoyo

consistente, ni tampoco atenuar la crisis económica. Lo hostigaron los sectores que habían rodeado a Martínez de Hoz, y distintos grupos militares lo acusaban de la falta de firmeza en la conducción. A fines de 1981, una enfermedad de Viola dio la ocasión para su desplazamiento y reemplazo por el general Galtieri.

Galtieri se manifestó dispuesto a alinear el país con Estados Unidos y a apoyarlo en la guerra encubierta que libraba en América Central. El país contribuyó por entonces con asesores y armamentos y obtuvo de Estados Unidos el levantamiento de las sanciones que la administración de Carter había impuesto al país por las violaciones de los derechos humanos.

Galtieri se lanzó a la política activa e intentó armar un movimiento en el que los “amigos políticos” sustentaran su propio liderazgo. Su ministro de Economía, Roberto Alemann, se rodeó del equipo de Martínez de Hoz y retornó a la senda inicial, definiendo sus prioridades: “la desinflación, la desregulación y la desestatización”. En lo inmediato, la recesión se agudizó, y con ella las protestas de los sindicatos y empresarios; anunció un plan de privatizaciones, particularmente del subsuelo, que suscitó oposición incluso en sectores del gobierno.

Fue en ese contexto cuando se concibió y lanzó el plan de ocupar las islas Malvinas, que aparecía como la solución para muchos problemas del gobierno. La Argentina reclamaba infructuosamente a Inglaterra esas islas desde 1833, cuando fueron ocupadas por los británicos. En 1956, las Naciones Unidas habían dispuesto que ambos países debían negociar sus diferencias. Los británicos hicieron poco para avanzar en ese sentido, mientras que el gobierno argentino se acercó a los habitantes de las islas y les suministró distintos servicios educativos y sanitarios. Desde la perspectiva de los militares, una acción militar para lo que llamaban “recuperar las islas” permitiría unificar a las Fuerzas Armadas tras un objetivo común y ganar, de un golpe, la cuestionada legitimidad ante una sociedad visiblemente disconforme.

Una acción militar tendría una segunda ventaja: encontrar una salida al atolladero que había creado la cuestión con Chile por el canal de Beagle. En 1971, los presidentes Alejandro Lanusse y Salvador Allende habían acordado someter a arbitraje la cuestión de la posesión de tres islotes que dominan el paso por aquel canal, que une los océanos Atlántico y Pacífico. En 1978, ambos países parecían dispuestos a dirimir la cuestión por las armas cuando, casi en el último minuto, decidieron aceptar la mediación del Papa. A fines de 1980, el Vaticano comunicó su propuesta, que en lo sustantivo mantenía lo establecido en el laudo, y el gobierno argentino optó por dilatar la respuesta y retomar la situación de activa hostilidad con Chile.

La agresión a Chile, bloqueada por la mediación papal, fue desplazada hacia Gran Bretaña, el tradicional imperio, que se suponía viejo y achacososo. La idea era sencilla y atractiva. Luego del golpe de mano, que presentaba pocas dificultades, se contaba con el apoyo estadounidense y la reluctante reacción de Gran Bretaña, que finalmente admitiría la ocupación, a cambio de todas las concesiones y compensaciones necesarias. En ninguna de las hipótesis entraba la posibilidad de una guerra.

El 2 de abril de 1982, las Fuerzas Armadas desembarcaron y ocuparon las Malvinas. El hecho suscitó un amplio apoyo: la gente se reunió espontáneamente en la Plaza de Mayo y volvió a hacerlo, en forma multitudinaria, allí y en las capitales provinciales, cuando fue convocada, una semana después, en ocasión de la visita del secretario de Estado estadounidense Alexander Haig. Todas las instituciones de la sociedad manifestaron su adhesión sin reserva. El gobierno había obtenido una cabal victoria política al identificarse con una reivindicación de la sociedad arraigada en un profundo sentimiento, alimentado por una tradición nacionalista y antiimperialista, que resurgió con vigor. La sociedad que había festejado el triunfo argentino en el Campeonato Mundial de Fútbol ahora se alegraba de haber ganado una batalla, y con la misma inconsciencia se disponía a avanzar hacia una guerra. Si triunfaban, los militares habrían saldado sus deudas con la sociedad, al solo precio de conceder una cierta libertad para que se expresaran voces no regimentadas.

La reacción fue sorprendentemente dura en Gran Bretaña, donde la primera ministra Margaret Thatcher se propuso sacar réditos políticos de una victoria militar. Gran Bretaña obtuvo rápidamente la solidaridad de la Comunidad Europea y el apoyo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que declaró a la Argentina nación agresora y exigió el retiro de las tropas. Este poderoso bloque apenas era contrapesado por el latinoamericano -con excepción de Chile-, ampliamente solidario en lo declarativo pero de poco peso militar.

El gobierno estuvo dispuesto a aceptar distintas condiciones, siempre que Gran Bretaña se comprometiera a reconocer, a plazo fijo, la soberanía de Argentina sobre las islas, lo que era inaceptable para los británicos. Solo así la operación podía ser presentada como una victoria ante la sociedad. En los términos que ellos mismos habían planteado, cualquier otro resultado equivalía a una derrota.

El gobierno argentino fue víctima de un aislamiento diplomático creciente, agravado por los antiguos reclamos sobre las violaciones a los derechos humanos, pues en el exterior se argumentó que si triunfaba significaría validar todo su desempeño anterior. Luego de un mes de intentar convencer a la Junta Militar, y en momentos en que se empezaba el ataque británico a las islas, Estados Unidos abandonó su mediación; el Senado votó sanciones económicas a la Argentina y ofreció apoyo a Gran Bretaña.

En los últimos días de abril la Fuerza de Tareas británica recuperó las islas Georgias. El 1 de mayo, comenzaron los ataques aéreos a las Malvinas, y al día siguiente un submarino británico hundió el crucero argentino General Belgrano. En Buenos Aires, se soñaba con una resistencia heroica y con algún cambio en el mundo. En las islas, en cambio, sometidas a un demoledor ataque de artillería y aviones, las dudas fueron troncándose en desmoralización.

Un cambio similar se dio en la opinión pública, demorado en parte por la total manipulación de las informaciones, que llegaban a un público dispuesto a creer que la Argentina estaba ganando la guerra. En los actos de la GCT por el 1° de Mayo, volvieron a alzarse las voces agrarias, mientras que dentro del radicalismo, cuya conducción oficial había apoyado la política de guerra, Raúl Alfonsín, que dirigía el sector opositor, propuso la constitución de un gobierno civil de transición, que encabezaría el expresidente Illia.

El 24 de mayo, los ingleses desembarcaron y establecieron una cabecera de puente en San Carlos. El 29 se libró un combate importante en el Prado del Ganso, donde varios cientos de argentinos se rindieron. El 10 de junio, Galtieri pudo dirigirse por última vez a la gente reunida en la Plaza de Mayo, y dos días después llegó el papa Juan Pablo II, quizá para preparar los ánimos ante la inminente derrota. Antes de que finalizara su breve estadía, comenzó el ataque final al Puerto Argentino, donde se había atrincherado la masa de las tropas. La desbandada fue rápida y la rendición, prácticamente incondicional, se produjo el 14 de junio, 74 días después de iniciado el conflicto, que dejó más de 700 muertos o desaparecidos y casi 1300 heridos. Los gobernantes convocaron al día siguiente al pueblo a la Plaza de Mayo, solo para reprimir en forma extremadamente violenta a aquellos que, convencidos por los medios de difusión de que la victoria estaba cercana, no podían ni entender ni admitir la rendición. Por entonces, los generales exigían a Galtieri su renuncia.

La derrota agudizó la crisis del régimen militar e hizo públicos los conflictos hasta entonces disimulados. Se culpó a la Junta Militar, cuyos miembros fueron luego enjuiciados y condenados. Fue designado presidente el general Bignone.

El gobierno se proponía negociar la salida electoral y asegurar que su retirada no sería un desbande. Se intentó lograr el acuerdo de los partidos para una serie de cuestiones, futuras y pasadas: la política económica, la presencia institucional de las Fuerzas Armadas en el nuevo gobierno y una gran garantía de que no se investigarían ni los actos de corrupción ni las responsabilidades en lo que empezaban a llamar “guerra sucia”. La propuesta de los militares fue rechazada por la opinión pública y por los partidos. El gobierno fijó la fecha de elecciones para fines de 1983. Un documento sobre los desaparecidos declaró que no había sobrevivientes y que todos habían caído combatiendo; una ley estableció una autoamnistía, eximiéndolos de cualquier eventual acusación.

Los militares debían enfrentarse con la evidencia de su fracaso como administradores de un país desquiciado y como conductores de una guerra absurda. Sobre todo, debían enfrentarse con una sociedad que asistía al show del horror y se enteraba de la existencia de vastos enterramientos de personas desconocidas, de centros clandestinos de detención, de denuncias realizadas por exagentes; en suma, de una historia siniestra, de la que hasta entonces pocos habían querido saber.

Las marchas de los jueves, con escasa concurrencia en los años duros de la represión, se convirtieron luego de la guerra de Malvinas en nutridas “marchas por la vida”, otro acierto discursivo que identificó al enemigo con la muerte.

A medida que la represión retrocedía, empezaron a aparecer nuevos protagonistas sociales, junto con otras que habían sobrevivido ocultándose. La crisis económica generó motivos movilizadores. Los grupos culturales, como Teatro Abierto, que desde 1980 mostró la vitalidad de una práctica cultural convertida en acción política sucedánea. Lo mismo ocurrió con los jóvenes que animaban grupos en las parroquias, los que nutrían las multitudinarias peregrinaciones a Luján o los gigantescos recitales de rock nacional, que a su manera también resultaban actos políticos. El activismo renació en las universidades, reclamando contra los cupos de ingreso o el arancelamiento, y en las fábricas, donde empezaron a reconstruirse las comisiones internas y la participación sindical.

La sociedad experimentaba una nueva primavera: el enemigo común, algo menos peligroso pero aun temible, estimulaba la solidaridad y alentaba una organización y una acción de la que se esperaban resultados concretos. Los sindicalistas sacaron a la gente a la calle para reclamar contra la crisis económica y en favor de la democracia.

Luego del doble sacudón de la crisis económica y de la derrota militar, la democracia aparecía como la llave para superar desencuentros y frustraciones. Varias décadas sin una práctica real hacían necesario un nuevo aprendizaje de las reglas del juego, y también de sus valores y principios más generales, de la democracia y también de la república. La afiliación a los partidos políticos -luego de que el gobierno levanto definitivamente la veda- fue tan masiva que uno de cada tres electores pertenecía a uno de ellos.

La afiliación masiva transformó a los partidos políticos. Hubo un amplio deseo de participación y se animaron los comités o las unidades básicas. También se renovaron los cuadros dirigentes, y se incorporaron quienes venían de militancia en organizaciones juveniles o estudiantiles.

Las transformaciones del peronismo fueron notables, pues el viejo movimiento, siempre en tensión con la democracia, empezó a convertirse en un aceptable partido. La cuestión de verticalismo quedó postergada y el partido combinó la organización territorial con la sindical. El candidato a presidente fue Italo Luder, un jurista de prestigio, que no pudo disipar la desconfianza suscitada por el peronismo en sectores importantes de la sociedad.

El radicalismo se renovó por el impulso de Raúl Alfonsín, que en 1972 había creado el Movimiento de Renovación y Cambio para disputarle el liderazgo a Ricardo Balbín. Durante el proceso se distinguió del resto de los políticos, pues crítico a los militares con mucha energía, asumió la defensa de detenidos políticos y el reclamo por los desaparecidos y evitó involucrarse en la euforia de la guerra de Malvinas. Hizo de la democracia su bandera, y la combinó con un conjunto de propuestas de modernización de la sociedad y el Estado, una reivindicación de los aspectos éticos de la política y un discurso ganador, muy distinto del tradicional discurso radical, que atrajeron al partido a una masa de afiliados y simpatizantes.

Radicales y peronistas cosecharon amplios apoyos y dejaron poco espacio para otros partidos. El ingeniero Alsogaray fundó la Unión del Centro Democrático y predicó el liberalismo económico ortodoxo. A la izquierda, el Partido Intransigente logró reunir un amplio y heterogéneo espectro de simpatizantes, que, aunque compartían muchas de sus propuestas, eran reacios al dirigente radical.

Los partidos tuvieron dificultades para dar completa cabida a las múltiples demandas y no llegaron a construir plenamente un espacio de negociación de los intereses. Las organizaciones de derechos humanos fueron cada vez más intransigentes en un reclamo -la aparición con vida y el juicio y el castigo a los responsables- que los partidos intentaban traducir en términos aceptables para el juego político.

Las formas de hacer política del pasado recinete dejaban paso a otras en las que se afirmaba el pluralismo, el respeto de las formas institucionales y una subordinación de la práctica política a la ética. Celebrando la novedad, se valoró y hasta se sobrevaloró la eficacia de este instrumento. Para cuidarlo, nutrirlo y fortalecerlo, se puso sobre todo el acento en el consenso alrededor de las reglas y en la acción conjunta para la defensa del

sistema. Se postergo una dimension esencial de la practica politica: la discusion de programas y opciones, que necesariamete implican conflictos, ganadores y perdedores, y se confio solo en el poder de la civilidad unida. Esta combinacion de la valoracion de la civilidad con un fuerte voluntarismo derivo en un cierto facilismo, en una especie de “democracia boba”, aseptica y conformista.

El peronismo encaro su campaña con mucho del viejo estilo, convicando a la liberacion contra la dependencia, apelo a lo peor de su folclore politico y pago los costos. Raul Alfonsin, recurrio en primer lugar a la Constitucion, cuyo Preambulo era un “rezo laico”. Estigmatizo al regimen militar, aseguro que se haria justicia con los responsables y denunció un espurio pacto de impunidad entre militares y sindicalistas. La mayoria de la sociedad le creyo, y el radicalismo, con mas de la mitad de los votos, supero holgadamente al peronismo.

“El terrorismo de Estado”- Herramientas

El terrorismo es un concepto que hace referencia al uso de la violencia para obligar a un gobierno, a tomar determinadas decisiones. O simplemente a conceder determinados logros politicos, religiosos o sociales al grupo que ejecuta la accion extorsiva.

Cuando ocurre un hecho de estas características afecta emocionalmente a la poblacion. Sobre todo, si produce victimas. En los ultimos aos, la cuestion del terrorismo ha tenido un fuerte impacto en la agenda mundial debido al accionar del fundamentalismo islamico, especialmente con Al Qaeda hace unos años y hoy en dia con el grupo ISIS.

Es importante aclarar que no siempre el uso de la violencia implica un acto terrorista. Cuando se usa el terrorismo como herramienta de accion politica, no se tienen en cuenta las leyes ni los derechos humanos.

El terrorismo busca a traves de la utilizacion del terror coseguir objetivos que por otra vua no seran posibles de alcanzar.

En la Argentina, durante el siglo XX existieron diversos grupos que produjeron actos terroristas. Los grupos anarquistas que predominaban a principios del siglo XX o las guerrillas en la decada de los años setenta.

Se denomina “terrorismo de Estado” a los actos violentos e ilicitos cuya responsabilidad es atribuible a las instituciones del Estado. El terroriste en este caso es el Estado.

Por otra parte, estas acciones son producto de un plan sistematico y planificado para lograr objetivos vinculados con el poder.

Al violar las leyes el Estado contradice su propia existencia. La sociedad le reconoce al Estado el uso monopolico de la violencia legitima como un instrumento y atributo propio de su condicion estatal.

Esto implica que la sociedad reconoce ese poder como legitimo siempre y cuando este regulado por la ley. El ejercicio abusivo del poder puede llevar a que desde el Estado se utilicen distintos tipos de acciones violentas y represivas al margen de lo que establecen las leyes. En muchos casos, ademas, el terrorismo de Estado obstaculiza la actividad judicial para lograr la impunidad ante posibles acciones ilegales.

En muchos otros casos, paradójicamente, los ejemplos de terrorismo de Estado que brinda la historia surgieron como forma de combatir a los grupos terroristas que, supuesta o verdaderamente, amenazaban el predominio del Estado. Esto se observo claramente durante la dictadura iniciada en 1976. A pesar de sus objetivos publicos, finalmente se convirtieron en un peligro para la poblacion civil, mas grave que aquel que pretendia eliminar.

El Estado al realizar acciones que violan la ley, finalmente, utiliza los procedimientos y estrategias de los grupos que combate. Es el caso de las actividades de inteligencia, tratando de obtener informacion de cualquier modo, que termina siendo de un unico modo: la tortura y la coaccion a traves de los metodos mas aberrantes.

El uso de la crueldad y de la violencia desmedida es justificado por el Estado terrorista porque permitiria anticipar acciones terroristas y lograr asi mayores probabilidades de salvar ideas de “posibles victimas civiles”. Oponerse al Estado en este tema equivaldria a la aceptacion terrorista.

Durante los años sesenta y setenta, America Latina fue escenario de muchos ejemplos de terrorismo de Estado. Esto se acentuo a partir de la aplicacion de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional que se impartia en la Escuela de las Americas (escuela del Ejercito de los Estados Unidos). En ella participaron y se entrenaron numerosos militares latinoamericanos que luego se encargaron de implementar la violencia del terrorismo de

Estado en sus respectivos países. La excusa para la violencia ilegal era siempre la misma: erradicar la amenaza comunista.

En el caso de Argentina, la violencia se había instalado en los años setenta con el surgimiento de proyectos revolucionarios que empleaban la lucha armada como estrategia política. Tal fue el caso de los Montoneros y del Ejército Revolucionario del Pueblo. A su vez, desde el Estado se organizó una fuerza paramilitar de derecha llamada Alianza Anticomunista Argentina para enfrentar a las guerrillas de izquierda.

“(…) el golpe halló justificación pública (…) en el clima de guerra civil que tanto las organizaciones guerrilleras como las bandas paramilitares y las propias Fuerzas Armadas y de seguridad ayudaron a instalar en el país desde principios de 1975.” - Novaro

La práctica represiva del Estado se iniciaba con el secuestro de personas, luego se las trasladaba a centros clandestinos de detención en los que se interrogaba bajo la tortura. Al mismo tiempo, existían otras formas represivas como la suspensión de toda la actividad política y sindical, limitaciones a las libertades públicas, persecuciones y restricciones en el campo cultural.

La desaparición forzada de personas y la apropiación y cambio de identidad de niños secuestrados o nacidos en cautiverio, formaron parte de un plan sistemático para acabar con personas que se oponían a la dictadura.

Esta situación quedó demostrada años después con el informe de la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas (CONADEP) y con el posterior juicio a las Juntas militares que acabó con la condena de los responsables máximos de aquellas acciones.

El terrorismo de Estado no fue solo responsabilidad de las FFAA y otros cuerpos de seguridad de un Estado; hubo grupos civiles minoritarios que fueron directamente beneficiados con la imposición a la sociedad de determinado modelo político y económico. Por ello, los militares contaban con un amplio respaldo de sectores importantes del empresariado.

Gran parte de la sociedad toleró -y muchas veces acompañó- estos hechos denigrantes realizados por los gobernantes. Ese consenso era una condición indispensable para conformar un gobierno que pudiera concretar el objetivo de cambiar para siempre a la sociedad argentina.

Las consecuencias del terrorismo de Estado generaron también una fuerte corriente opositora y no solo en los círculos cercanos a las víctimas, sino también en una parte de la opinión pública. Para esto, colaboraron organizaciones fundamentales en la lucha por la vigencia de los derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, los Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y el Movimiento Ecueménico por los Derechos Humanos, todos fundamentales en la lucha por la verdad y por la justicia cuando se inició el proceso de transición a la democracia en 1983.

“Genocidio: Concepto polémico y necesario”- Herramientas

El concepto de genocidio tiene su origen en la propuesta de Raphael Lemkin, un ciudadano polaco de religión judía que en 1944 postuló este término para denominar las matanzas por motivos raciales, nacionales o religiosos. Utilizó el término *genos* (del griego, que significa familia, tribu o raza) y el sufijo *-cidio* (del latín *-cidere*, forma combinatoria de *caedere*, matar).

Otros autores postularon que el concepto debía ser reservado solo para aquellos casos en los que el odio racial o nacional es un componente clave de una práctica sistemática de exterminio de poblaciones. Este sería el caso de la masacre de armenios perpetrada por los turcos durante la Primera Guerra Mundial y del holocausto del pueblo judío por parte de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar dicha guerra, se planteó el problema de cómo juzgar a los líderes nazis por sus prácticas de exterminio. La solución que se reflejó en el Acuerdo o Carta de Londres, fue la de definir como “crímenes contra la humanidad” al:

(…) asesinato, exterminio, esclavitud, deportación y cualquier otro acto inhumano contra la población civil, o persecución por motivos religiosos, raciales o políticos, cuando dichos actos o persecuciones se hacen en conexión con cualquier crimen contra la paz o en cualquier crimen de guerra.

En 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas dictó la resolución 96 sobre el crimen de genocidio que fue la base con la que se estableció la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio.

De esta manera, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) generó una definición aplicable desde un punto de vista jurídico y también político.

Se entenderá por “genocidio” cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal:

- a) Matanza de miembros del grupo.
- b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo.
- c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial.
- d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo.
- e) Traslado por a fuerza de niños del grupo a otro grupo.

En el ámbito de las Ciencias Sociales se utiliza el concepto genocidio para referirse a aquellas prácticas que buscan de forma intencionada la destrucción total o parcial de un grupo humano, sobre la base de razones raciales, nacionales, ideológicas, políticas o sociales, no importando si tales acciones fueran desarrolladas por un Estado o por grupos de personas con posibilidad de hacerlo.

La mayoría de los especialistas que han tratado el concepto de genocidio, toman como punto de partida para su análisis al siglo XX. Sin embargo, pueden rastrearse prácticas de destrucción total o parcial de grupos humanos que respondan a la definición antes planteada desde mucho tiempo atrás.

Así por ejemplo, se ha señalado que tanto los persas como los romanos desarrollaron estas prácticas con los pueblos conquistados cuando estos se oponían a las intenciones de los conquistadores. También, las Cruzadas emprendidas por los reinos cristianos de Europa contra bizantinos, árabes, turcos, judíos y otros pueblos que habitaban el Medio Oriente, pueden ser contempladas como genocidio.

No obstante, la expansión de fronteras internas de los más nuevos países americanos durante el siglo XIX, particularmente en el caso de los Estados Unidos, de Argentina y, en menor medida, de Brasil, conllevó a una práctica sistemática de ocupación de territorio con exterminio de su población originaria. Dicha expansión cobra especial relevancia para el caso argentino por la discusión abierta sobre cómo conceptualizar lo que la historiografía oficial había consagrado como “conquista” o “campana del desierto”, refiriéndose a la expedición comandada por el general Julio A. Roca.

La “conquista” de la India, la “colonización” de Australia o la apertura forzosa de China y de Japón al comercio occidental, fueron casos en los que estuvieron implecadas prácticas genocidas, con un exterminio masivo de poblaciones. Durante el siglo XIX, en particular, esto coincidió con la expansión y consolidación del Imperio Británico como principal potencia mundial, con presencia en todos los continentes.

También se ha debatido acerca del uso del concepto genocidio para expresar lo sucedido en las matanzas durante la guerra civil española y la continuidad de las mismas una vez derrotada la República, por parte de la dictadura franquista.

Respecto a las dictaduras militares latinoamericanas entre las décadas de los años 1960 y 1980 del pasado siglo XX. Particularmente, en Guatemala y en la Argentina se desarrollaron procesos de juicio a los responsables de las matanzas sucedidas durante las respectivas dictaduras militares.

Sin embargo, en otros casos, como Brasil, Bolivia, Chile y Uruguay, entre los más notorios, las leyes de amnistía y las condiciones políticas y sociales no permitieron que hubiera procesos judiciales contra los responsables de prácticas similares en esos países.

De todas formas, dichas prácticas de terrorismo de Estado han sido caracterizadas como genocidios, en tanto se propusieron la destrucción total o parcial de un determinado grupo humano en función de su pertenencia política o creencias ideológicas.

Autores como Stephen Katz, afirman que solo el caso del holocausto judío puede considerarse propiamente genocidio, dado el carácter intencional, planificado y basado claramente en el odio racial del exterminio que buscaba ser absoluto, aunque no lo haya logrado.

El primer caso claro en el que se puede pensar la aplicación del concepto genocidio, en lo que es hoy territorio argentino, es el pueblo de los Quilmes, en los Valles Calchaquies del Noroeste. Estos pueblos diaguitas resistieron la conquista española todo lo que pudieron, nunca se sometieron por completo y participación de las llamadas “guerras calchaquies”, que culminaron con una gran rebelión a mediados del siglo XVII. Al ser derrotados, fue asesinada buena parte de las mujeres y de los niños, y los escasos mil doscientos sobrevivientes fueron obligados a trasladarse a Buenos Aires.

Fue el ya independiente Estado argentino el mayor responsable de una práctica sistemática de genocidio contra las poblaciones originarias en la Patagonia y en el Chaco durante la llamada “conquista del desierto” hacia fines del siglo XIX.

Los sobrevivientes fueron reducidos a la servidumbre, a pesar de que ya la Asamblea del año XIII había prohibido tanto la esclavitud de los niños hijos de esclavos como la introducción de nuevos, lo que había sido ratificado y ampliado por la Constitución nacional sancionada en 1853-1860.

Pasada la segunda mitad del siglo XX, el caso más notorio de genocidio es el perpetrado por la dictadura del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, que buscaba parecerse al Estado oligárquico en la Argentina: el momento culminante del Proceso de Organización Nacional, nombre con el que se reconoce la historia argentina al período que va desde 1852 a la década de 1880, con la mencionada “Conquista del desierto”.

Del mismo modo, la dictadura cívico-militar iniciada en 1976 pensaba que era necesario reconstruir el orden logrado en aquel proceso de organización del siglo anterior. Esto implicaba eliminar a quienes se opusieran a sus ideas o pudieran reconstruir la capacidad de acción política y sindical de la clase trabajadora y de los jóvenes, principales blancos de la acción de terrorismo de Estado desatado en ese momento.

El genocidio es un concepto que sirve para caracterizar situaciones en las que se pone en riesgo la continuidad vital de grupos sociales que tienen características comunes. Estas últimas pueden ser étnicas, religiosas, nacionales, políticas o ideológicas. Las formas de poner en riesgo a esos grupos sociales pueden ser diversas: a través de prácticas que buscan su aniquilación total o su neutralización y desaparición como factor relevante en el lugar en que lo habían sido hasta ese momento.

Esto puede suceder tanto en épocas de guerra como en momentos de “aparente” paz, lo que implica que el conflicto no es percibido como tal.

Por eso, además de la definición jurídica de “genocidio” y de “crímenes de lesa humanidad”, es importante la visibilización de estas prácticas a través de la memoria y la toma de conciencia sobre estos hechos, lo que permite el repudio generalizado y limita las posibilidades de presentarlo como si se tratara de “operaciones neutras” o de eliminación de peligrosos enemigos.

“La transición a la democracia”- Herramientas

La transición es un lapso de tiempo que comienza cuando un régimen no democrático de un país empieza a retirarse. Termina cuando un régimen democrático se impone ya sin riesgo de ser derrocado. Es el intervalo entre un régimen político y otro.

Un ejemplo en Argentina es el período que se abre con la última dictadura luego de la derrota en la guerra de Malvinas en 1982. La derrota en esa guerra deja al gobierno militar sin ningún apoyo y con el repudio total de los ciudadanos. En ese contexto los militares deben convocar a elecciones para volver a un régimen democrático. El fin de la guerra es, entonces, el momento de inicio de la transición entre ambos regímenes. Ese período de transición finaliza cuando el gobierno de Menem derrotó a los militares “carapintada”. Esa victoria del gobierno democrático sobre los militares golpistas dio a la democracia un impulso definitivo.

Un cambio de régimen político implica el cambio de reglas que regulan el acceso al poder y, por ello mismo, también un cambio en el grupo que tomará el control de Estado.

Una democracia es un sistema de reglas en el que los ciudadanos se expresan libremente y eligen sus gobernantes. Esas reglas incluyen la libertad política para asociarse en partidos o asociaciones civiles, la libertad de expresión de opiniones, la posibilidad de elegir y de ser elegido en el ejercicio de elecciones limpias y competitivas como algunas de sus características principales.

Como se desarrolla con más profundidad en el texto de Beatle, la democracia se define como una poliarquía que no incluye todo lo que una democracia sustantiva podría ser, sino que se limita a todo aquello que no puede dejar de tener.

La transición entre regímenes es un período de tiempo muy complejo. En ese lapso de tiempo, los actores políticos conviven y compiten a la vez. Uno de esos actores en una transición es, en primer lugar, la “élite política”. Esa elite está conformada por los dirigentes políticos que fueron expulsados del poder, más o menos violentamente, por los militares y sus aliados en los golpes de Estado.

En el primer momento de la transición, esa elite política comienza una especie de “conspiración” contra el régimen autoritario. Esto ocurre cuando las dictaduras van perdiendo legitimidad por algún motivo. La transición a un régimen democrático necesita que el gobierno autoritario esté debilitado. Los miembros de esa elite empiezan a reunirse y, con sus diferencias, llegan a algunos acuerdos. Aprovechan que el gobierno no democrático está débil. Estos acuerdos de la elite opositora son muy generales, no tiene que ver con programas de gobierno muy detallados, sino con la intención de expulsar cuanto antes al gobierno no democrático. Los pactos de las elites apuntan, sobre todo, a lograr un llamado a elecciones en las que los partidos se puedan presentar libremente.

En segundo lugar, la “sociedad civil” es otro actor clave en una transición. Esta, mediante sus actos (como movilizaciones o pidiendo apoyo internacional), suele presionar en favor de la democracia. Los sindicatos, las organizaciones de derechos humanos y los estudiantes universitarios son algunos de los actores que quedan incluidos en este grupo.

La participación activa de la sociedad civil comienza a ser posible porque la transición comienza cuando la dictadura está débil y su final se percibe cercano. La debilidad de la represión estatal estimula un crecimiento de participación de la sociedad civil ya que implica correr menos riesgos.

El aumento de la participación social y la movilización callejera tiene dos funciones. La primera es apoyar a la elite política para que logre la vuelta a un sistema democrático y, al mismo tiempo, empujar fuera del sistema a los sectores nostálgicos que quieren volver al régimen autoritario. La segunda función es ampliar la agenda pública de temas que luego los partidos deben canalizar. Es decir, influir en los temas que se discuten en una sociedad, tanto en los medios como en la vida cotidiana de las personas.

La sociedad movilizada puede imponer determinados temas en las agendas públicas de discusión de una sociedad. Un ejemplo de esto son las demandas de la sociedad argentina con respecto a la cuestión de las violaciones a los derechos humanos de la dictadura.

En tercer lugar, otros actores que se pueden distinguir en una transición de un régimen no democrático a otro democrático son los sectores “blandos” del régimen autoritario. Bajo este nombre se agrupa a dirigentes que apoyaron inicialmente la dictadura y que, como se está terminando, se inclinan ahora por una salida democrática.

Estos grupos “blandos” participan de esa conspiración a favor del llamado a elecciones y comienzan a actuar en forma conjunta con sectores de la elite política. En algunos casos, buscan antener su influencia, aunque cambie el régimen político. En otros casos, buscaban negociar para evitar futuras investigaciones judiciales o porque creen que es lo correcto.

En cuarto lugar, existen los que podrán llamarse “nostálgicos del régimen autoritario”. Estos son grupos que durante la transición hasta las elecciones, y también luego de asumido el gobierno democrático, pueden conspirar contra la consolidación del mismo.

Los grupos nostálgicos están dispuestos a hacer todo lo posible para volver al régimen autoritario donde tenían poder e influencia, y con el cual coincidían ideológicamente.

Al existir un grupo que quiere mantener el régimen autoritario, la transición es un momento complejo. Es importante que los sectores prodemocráticos puedan aislar a los grupos que desean la vuelta de la dictadura y limitarles el margen de maniobra. Para lograr ello y evitar esas regresiones autoritarias, la élite que busca la democracia debe aliarse aunque pertenezca a partidos diferentes.

Los sectores democráticos no deben competir entre ellos descaradamente. La manera en que los políticos pueden bloquear intentos de retroceder a una dictadura, es por medio de pactos y acuerdos de gobernabilidad.

Los “actores internacionales” son el quinto actor. Se trata de una serie de organismos que presionan desde afuera de las fronteras del país con el objetivo de lograr la efectiva instalación de la democracia.

También componen este grupo los organismos supranacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la misma Organización de las Naciones Unidas o la Organización de los Estados Americanos.

Las élites toman muchas decisiones. Algunas de ellas son adoptadas pensando en el bien común y otras tratando de sacar el máximo beneficio personal o grupal. En ese periodo de transición es importante distinguir cuando es el momento en que se deben moderar ambiciones y cuando jugarse al beneficio personal. La activa acción de los nostálgicos del régimen autoritario anterior obliga a que los políticos de diversos partidos tengan que acordar reglas entre sí para controlar la lucha por el poder.

Para acordar estas reglas, los miembros de una élite deben alcanzar pactos que den formas institucionales a los acuerdos. Estos pactos pueden ser secretos o públicos y los políticos pueden acordar que no habrá proscripciones, que día serán las elecciones o cuál será el sistema electoral, entre otras posibilidades.

Quiénes definen las reglas son los miembros de la élite política que tiene como objetivo al alcanzar un sistema en el que sea posible la alternancia en el poder.

Los pactos entre los dirigentes de la élite de distintos partidos son importantes por dos motivos. El primero de esos motivos es porque se constituyen en la garantía de que los sectores nostálgicos del régimen autoritario no tendrán margen de maniobra para intentar otro golpe de Estado. El segundo motivo es porque la alianza de la élite forma una red de contención de las demandas de una sociedad que sale a la luz después de años de represión y, por lo tanto, está movilizadísima más que lo habitual.

Los pactos y la necesidad de moderar las demandas y expectativas de la sociedad, y a la vez contener posibles golpes de Estado, son las claves para que una transición sea exitosa y ordenada. Este modelo de pactos fue tomado en su mayor parte de la transición española.

El periodo correspondiente a la transición española comenzó con la muerte de su dictador, el general Francisco Franco. Sin embargo, dos años antes, la posibilidad de un reemplazo del dictador se había llenado de incertidumbre con el asesinato del sucesor designado por Franco, el almirante Luis Carrero Blanco. Los planes se cambiaron sobre la marcha y el dictador Franco designó como rey y nuevo sucesor a Juan Carlos I.

Dos días después de la muerte de Franco, se inicia la transición a la democracia con el nombramiento del rey Juan Carlos I. Esta transición ocurrió de manera gradual y consensuada.

Muchos de sus dirigentes tomaron opciones arriesgadas, incluso para sus propios intereses. El más importante fue el rey Juan Carlos I, que llegó al poder por la designación de Franco pero después optó por abrir paso al régimen democrático.

Otro protagonista de importancia fue Adolfo Suárez. Suárez, un político de centro-derecha, decidió la legalización del Partido Comunista a cambio de que este aceptara la monarquía constitucional. Santiago Carrillo (presidente del Partido Comunista Español) aceptó el trato y además rompió relaciones con la Unión Soviética, que se oponía a negociar. Estos actores sabían que para superar la dictadura debían ceder y aceptar algunas demandas de los otros.

Por último, Felipe González (Partido Socialista Obrero Español) se apoyó en otros gobiernos europeos socialistas y así fortaleció su imagen dentro de España. Su estrategia internacional fue bloquear el ingreso de España a la Comunidad Europea hasta que no hubiera terminado la democratización. Eso estimuló a muchos empresarios a apoyar la democracia, ya que era la condición para ingresar al poderoso club de países europeos.

Los políticos españoles tomaron decisiones difíciles, hicieron cálculos y apostaron por confiar entre sí. El caso español fue un éxito en los acuerdos políticos que logró la élite para finalizar exitosamente una transición.

En 1982 Argentina perdió la Guerra de Malvinas. Por ese hecho el gobierno militar presidido por el general Leopoldo Galtieri, perdió toda la legitimidad ante la sociedad. La sociedad y la élite política le exigían su renuncia y que se convocara a elecciones. Finalmente, Galtieri debió renunciar y lo reemplazó Bignone, quien convocó inmediatamente a elecciones.

Pero el declive del gobierno militar había comenzado unos años antes, en 1979, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos visitó el país y denunció las violaciones de los derechos humanos. Fue la primera vez que el gobierno militar se vio obligado a reconocer la existencia de desaparecidos.

A diferencia del dictador español Franco, que había llegado hasta el último día de su vida manteniendo el poder, la dictadura argentina se derrumbó en 1982 sin plan alternativo más que irse rápidamente y dejar el problema a los civiles.

Los políticos argentinos estaban en la puerta de una gran posibilidad pero, a diferencia de sus pares españoles, no buscaron una salida pactada. Solo acordaron presionar por elecciones inmediatas en las que se competirían descarnadamente sin acuerdos mínimos para esa lucha por la presidencia.

Algunos de ellos buscaron apoyarse en lo que quedaba del poder militar para que los ayudara en la lucha contra sus adversarios de la élite política. Los partidos no entablaron diálogos entre sí para enfrentar conjuntamente problemas que enfrentarían siendo gobierno.

La inconciencia y la falta de lealtad entre los partidos y dirigentes políticos argentinos fue una marca que quedó en el sistema político del país hasta nuestros días.

En 1983, se celebraron las primeras elecciones y ganó el radical Raúl Alfonsín, el candidato que más criticaba al régimen saliente. Alfonsín no había apoyado la guerra de Malvinas y prometía juzgar a los militares culpables de violar los derechos humanos.

Pero por entonces, en aquellos años apenas recuperada la democracia, los peligros de un nuevo golpe fueron visibles todo el mandato del dirigente radical.

La ausencia de pactos entre la élite política, hizo que no hubiera acuerdos sobre el modelo económico a seguir. Tampoco hubo acuerdo sobre qué hacer con los militares.

El gobierno radical enjuició y condenó a las cúpulas de los militares responsables del golpe y de las desapariciones desde 1976. Este hecho hizo que los sectores nostálgicos del régimen militar se mantuvieran alerta y mostraran constantemente su capacidad de daño.

Se produjeron así tres levantamientos (rebeliones) militares durante los años de Alfonsín, y un cuarto en el mandato de su sucesor, Carlos Menem. Este último resolvió el asunto de raíz, reprimiendo a los militares rebeldes y concediendo indultos que dejaron a los militares juzgados en libertad. Desde entonces, se consolidó la democracia política y finalizó una transición ya que los militares nunca volvieron a ser una amenaza.

UNIDAD 6

“El impulso y su freno, 1983-1989”- Breve historia contemporánea de la Argentina

Raúl Alfonsín asumió el 10 de diciembre de 1983 y convocó a una concentración en la Plaza de Mayo; para marcar las continuidades y las rupturas con la tradición política anterior, desechó los “históricos balcones” de la Casa Rosada y eligió los del Cabildo. La multitud que se volcó a las calles sentía que la civilidad había alcanzado el poder. Pronto se puso de relieve no solo la capacidad de resistencia de los enemigos juzgados vencidos, sino la dificultad para satisfacer el conjunto de demandas de todo tipo que la sociedad había venido acumulando y que esperaba ver resueltas de inmediato.

Los problemas subsistían, sobre todo los económicos. La economía se encontraba desde 1981 en estado de desgobierno y casi de caos: la inflación desatada, deuda externa multiplicada y con fuertes vencimientos inmediatos, y un Estado careta de recursos, sin posibilidad de atender a los variados reclamos de la sociedad,

desde la educación o la salud hasta los de carácter salarial de sus propios empleados, y aun con una fuerte limitación en su capacidad para dirigir la crisis.

El adversario político principal del radicalismo gobernante, el peronismo, vivía una fuerte crisis interna, agudizada luego de lo que fue su primera derrota en una elección presidencial. Mientras el sindicalismo peronista se separaba de la conducción partidaria y ensayaba su propia estrategia para enfrentar los embates del gobierno, el peronismo político buscó sin éxito definir su perfil, atacándolo desde la derecha o desde la izquierda, o desde ambos lados a la vez.

El poder que administraba el presidente Alfonsín era, a la vez, grande y escaso. Tenía mayoría en la Cámara de Diputados, pero había perdido en el interior tradicional y no controlaba la mayoría del Senado. La UCR constituía una fuerza no demasiado homogénea, donde se discutieron y hasta se obstaculizaron muchas de las iniciativas del presidente, quien refirió rodearse de un grupo de intelectuales y técnicos recientemente acercados a la vida política. Fuerte en la escena política, el radicalismo no tenía, en cambio, muchos apoyos consistentes en el ámbito de los poderes corporativos, un territorio donde sus adversarios peronistas se movían en cambio con toda fluidez. El estado carecía de eficiencia y aun de credibilidad para la sociedad.

Pero cuando asumió el gobierno, el presidente Alfonsín tenía detrás de su una enorme fuerza, cuya capacidad era aun una incógnita: la civilidad, identificada toda ella, más allá de sus opciones políticas, con la propuesta de construir un Estado de derecho. Se trataba de una identidad política fundada en valores éticos, que subsumía los intereses específicos de sus integrantes, en muchos casos representados precisamente por aquellas corporaciones, pero que en el entusiasmo de la recuperación democrática quedaban postergados. Con estos respaldos, en cierto sentido fuertes y otros débiles, el presidente debía elegir entre gobernar activamente, tensando al máximo el polo de la civilidad, lo que implicaba confrontar con intereses establecidos y aun introducir fisuras en su frente de apoyo, o privilegiar las soluciones consensuadas, los acuerdos con los poderes establecidos, lo que implicaba postergar los problemas que requerían definiciones claras. El gobierno eligió en general la primera línea, pero debió aceptar la segunda cuando algunos fuertes golpes le demostraron los límites de su poder.

En el diagnóstico de la crisis, los problemas económicos parecían por entonces menos significativos que los políticos: lo fundamental era eliminar el autoritarismo y encontrar los modos auténticos de representación de la voluntad ciudadana. El gobierno atribuyó una gran importancia, simbólica y real, a la política cultural y educativa, destinada en el largo plazo a remover el autoritarismo que anidaba en las instituciones.

En este terreno se avanzó inicialmente con facilidad: se desarrolló un programa de alfabetización masiva, se atacaron los mecanismos represivos que anidaban en el sistema escolar y se abrieron los canales para discutir contenidos y formas. En el campo de la cultura y de los medios de comunicación manejados por el Estado, la libertad de expresión, ampliamente ejercida, permitió un desarrollo plural de la opinión y un cierto “destape”, para algunos irritante, en las formas y en los temas. En la universidad y en el sistema científico del Estado volvieron los mejores intelectuales e investigadores, cuya marginación había comenzado en 1966. Estas instituciones, que debieron revolver el problema planteado por un masivo deseo de los jóvenes de ingresar a ellas, se reconstruyeron sobre la base de la excelencia académica y el pluralismo, y en algunos casos alcanzaron niveles de calidad similares a los de su época dorada, a principios de la década de 1960.

Los intelectuales se incorporaron a la política, y la política se intelectualizó. El punto culminante de esta modernización cultural fue la aprobación de la ley que autorizaba el divorcio vincular y posteriormente la referida a la patria potestad compartida, que avanzaba en el proyecto de modernización de las relaciones familiares. Los sectores más tradicionales de la Iglesia católica intentaron oponerse, con los mecanismos habituales de la presión y con manifestaciones en las que hasta la Virgen de Luján fue sacada a la calle. Fracasaron, por el alto consenso existente alrededor de la nueva norma.

La Iglesia, que en 1981 había definido por la democracia, fue evolucionando hacia una creciente hostilidad radical, irritada por su escasa injerencia en el área de la enseñanza privada, la sanción de la ley del divorcio y el tono general laico del discurso cultural que circulaba por las instituciones y los medios del Estado. Enfrentado

de manera creciente con el gobierno radical, este sector de la Iglesia, que paulatinamente empezaba a dominar en ella, asumió el papel de censor social, con un discurso de combate. La democracia -decían- resultaba ser el compendio de los males del siglo: la droga, el terrorismo, la pornografía o el aborto.

La gran popularidad alcanzada por el presidente en distintos lugares del mundo, fue utilizada para afianzar y fortalecer las instituciones democráticas locales, todavía precarias. Con esos criterios se encararon las principales cuestiones pendientes, con Chile por el Beagle y con Gran Bretaña por las Malvinas. En el primer caso, el laudo papal, que los militares habían considerado inaceptable fue asumido como la única solución posible para el gobierno democrático, que necesitaba reafirmar los valores de la paz y eliminar un conflicto capaz de mantener vivo el militarismo. Se convocó a un referéndum popular no vinculante, que corroboró el amplio consenso existente para esa solución pacífica e inmediata. Aun así, la aprobación por el Senado se logró por el mínimo margen de un voto. En el caso de las Malvinas también se recuperó terreno: las votaciones en las Naciones Unidas, instando a las partes a la negociación, fueron cada vez más favorables, incluyeron a las principales potencias occidentales y aislaron al gobierno británico. Sin embargo, la expectativa de que ello sirviera para convencerlo de la conveniencia de iniciar una negociación que incluyera de alguna manera el tema de la soberanía resultó totalmente defraudada.

Asociada con otros países que acababan de retornar a la democracia -Uruguay, Brasil, Perú-, la Argentina se propuso mediar en el conflicto en Centroamérica, y sobre en la cuestión de Nicaragua. En discrepancia con Estados Unidos, pero aprovechando su buena voluntad hacia las democracias restauradas, logró que al final se alcanzara una solución relativamente equitativa. Actuando con independencia, dialogando con los países no alineados, reivindicando los principios pero absteniéndose de los enfrentamientos más duros, el gobierno argentino mantuvo una buena relación con el estadounidense, que respaldó con firmeza las instituciones democráticas, cortó con toda vinculación con militares nostálgicos y apoyó luego los diversos intentos de estabilización de la economía.

En el terreno cultural y en el de las relaciones exteriores, el gobierno radical pudo avanzar con relativa facilidad, pero el camino se hizo más empinado cuando afrontó los problemas de las dos grandes corporaciones cuyo pacto había denunciado en la campaña electoral: la militar y la sindical. Pronto quedó claro que el poder del gobierno era insuficiente para forzar a ambas a aceptar sus reglas.

El grueso de la sociedad se enteró de aquello que hasta entonces había preferido ignorar: las atrocidades de la represión, puestas en evidencia por un alud de denuncias judiciales, por los medios de comunicación y por el cuidadoso informe realizado por la CONADEP. Su texto, difundido masivamente con el título *Nunca Más*, resultó incontrovertible.

Pronto, la solidaridad corporativa de los militares se reconstruyó en torno de lo que reivindicaban como su éxito: la victoria en la “guerra contra la subversión”. Recordaron que su acción contó con la complacencia generalizada, incluso de los políticos luego sumados al coro de los detractores.

Alfonsín, compartía los reclamos generalizados de justicia, pero se preocupaba también por encontrar la manera de subordinar a las Fuerzas Armadas al poder civil. Proponía algunas distinciones: separar el juicio a los culpables del juzgamiento de la institución y poner límite a aquel juicio, deslindando responsabilidades y distinguiendo entre quienes dieron las órdenes que condujeron a la masacre, quienes se limitaron a cumplirlas y quienes se excedieron, cometiendo delitos aberrantes. Se trataba de concentrar el castigo en las cúpulas y aplicar al resto el criterio de la obediencia debida. El gobierno confiaba en que las propias fuerzas armadas se comprometieran con esta propuesta, que asumieran la crítica de su propia acción y procedieran a su depuración. Para ello, se procedió a reformar el Código de Justicia Militar, estableciendo una primera instancia castrense y otra civil, y se dispuso el enjuiciamiento de las tres primeras Juntas Militares a las que se sumó la cúpula de las organizaciones armadas Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros.

El primer contratiempo sobrevino cuando se hizo evidente que los militares se negaban a revisar su acción y a juzgar a sus jefes. El Ejecutivo trasladó las causas judiciales a la Cámara Federal de la Capital. El juicio terminó de revelar las atrocidades de la represión, pero mostró una cierta pérdida de militancia de la civilidad,

mientras las organizaciones defensoras de los derechos humanos hacían oír una voz cada vez más dura e intransigente. Comenzaron a escucharse otras voces que defendieron la acción de los militares y reclamaron su amnistía. A fin de 1985 se conoció el fallo de la Cámara Penal, que condenó a los excomandantes, negó que hubiera habido guerra alguna que justificara su acción, distinguió entre las responsabilidades de cada uno de ellos y dispuso continuar la acción penal contra los demás responsables de las operaciones. La justicia había certificado la aberrante conducta de los jefes del Proceso, había descalificado cualquier justificación y los militares habían quedado sometidos a la ley civil.

El gobierno, por su parte, inició un largo y desgastante intento de acotar y poner límites a la acción judicial, para así contener ese clima de fronda que fermentaba en los cuarteles. Se trataba de una decisión política, materializada sucesivamente en las leyes llamadas de Punto Final y de Obediencia Debida. La primera, sancionada a fines de 1985, ponía un límite de dos meses a las citaciones judiciales, pasado el cual ya no habría otras nuevas.

En ese contexto, se llegó al episodio de Semana Santa de 1987. Un grupo de oficiales se acuarteló en Campo de Mayo, exigiendo una solución política a la cuestión de las citaciones y, en general, una reconsideración de la conducta del Ejército, a su juicio injustamente condenado.

Frente a ellos, la reacción de la sociedad civil fue unánime y masiva. Todos los partidos políticos y todas las organizaciones de la sociedad manifestaron activamente su apoyo al orden institucional, firmaron un Acta de Compromiso Democrático y rodearon al gobierno. La civilidad se movilizó, llenó las plazas del país y se mantuvo en vigilia durante cuatro días que duró el episodio.

Se llegó a un extraño acuerdo. El gobierno sostuvo que haría lo que ya había decidido hacer -lo que luego sería la ley de obediencia debida, que exculpaba masivamente a los subordinados- y los amotinados no impusieron ninguna condición y aceptaron la responsabilidad de su acción.

Comparativamente, el combate con la corporación sindical, que tuvo resultados similares. El poder de los sindicalistas se hallaba debilitado por la derrota electoral del peronismo y en general por el repudio de la sociedad a las viejas prácticas de la corporación. Su situación era institucionalmente precaria: buena parte de la legislación que normaba la acción gremial había sido barrida por el régimen militar; muchos sindicatos solo tenían títulos provisionales, o mandatos prorrogados desde 1975.

El gobierno se propuso aprovechar esta debilidad relativa. Se lanzó a democratizar los sindicatos. El ministro Antonio Mucci proyectó una ley de normalización institucional de los sindicatos que incluía el voto secreto, directo y obligatorio, la representación de las minorías, la limitación de la reelección y, sobre todo, la fiscalización de los comicios por el Estado. En marzo de 1984 la ley fue aprobada en la Cámara de Diputados, pero el Senado la rechazó. De inmediato el gobierno puso a funcionarios más flexibles al frente de la negociación con los gremialistas y acordó con ellos nuevas normas electorales.

El impulso civil y democrático había experimentado un temprano y fuerte contraste entre el poder sindical reconstruido, que apoyándose en las crecientes dificultades económicas se enfrentó sistemáticamente con el gobierno. Entre 1984 y 1988 la CGT organizó trece paros generales contra el gobierno constitucional. Los sindicalistas lograron expresar de manera unificada el descontento social.

La CGT se rehusó a participar en las instancias de concertación que abrió el gobierno, pero lo hizo con el estilo que había desplegado exitosamente entre 1955 y 1973: negar y golpear, conversar y abandonar la negociación con un “portazo”, lo cual permitió unir y galvanizar las fuerzas propias.

El gobierno, que abrió permanentemente los espacios para el diálogo y la concertación, pudo resistir bien el fuerte embate sindical, en tanto contó con el apoyo consistente de la civilidad y la escasa presión de otras fuerzas corporativas. A principios de 1987 la apertura de distintos frentes de oposición impusieron al gobierno una maniobra audaz: concertar con un grupo importante de sindicatos y nombrar a uno de sus dirigentes en el cargo de ministro de Trabajo. A cambio de esas importantes concesiones, el gobierno obtenía poco: una relativa tregua social. Luego de la victoria del peronismo en la elección de septiembre de 1987, los sindicalistas abandonaron el gobierno.

La cuestión económica era extremadamente grave y condicionó las políticas del gobierno. La inflación, se había acelerado desde mediados de 1982. Junto con el déficit fiscal y la deuda externa, constituía la parte más visible del problema. Se prolongaba en una economía estancada desde principios de la década, cerrada e ineficiente y muy vulnerable en lo externo.

El flujo de capitales se había cortado desde 1981, pero la deuda externa siguió creciendo por la elevación de los intereses. El pago de los servicios era un componente muy importante del déficit social. Los críticos liberales culpaban a la emisión monetaria y a los gastos estatales excesivos, particularmente en el empleo. También apuntaban a los gastos sociales. Otros comenzaban a señalar a las subvenciones de todo tipo otorgadas a distintos sectores empresarios, a veces como parte de políticas generales de promoción y otras como resultado de eficaces presiones de los interesados.

El estado tenía poco crédito externo, y el interno escaseaba porque todo el mundo transformaba sus ahorros en dólares. Tampoco había grandes masas de recursos acumulados de los que apropiarse. El Estado solo podía del paso emitiendo dinero, lo que producía más inflación, distorsionaba la economía, afectaba la recaudación fiscal y, finalmente, la propia capacidad del Estado, ya menguada por el deterioro de su burocracia y de sus agencias. Las soluciones de fondo fueron postergadas por el gobierno de Alfonsín. El gobierno evitó tomar decisiones que dividieran el campo de la civilidad. Durante el primer gobierno radical, la política económica del ministro Bernardo Grinspun se ajustó a las formas dirigistas y redistributivas clásicas. La mejora en la remuneración de los trabajadores, junto con créditos ágiles a los empresarios medios, sirvió para la reactivación del mercado interno y la movilización de la capacidad ociosa del aparato productivo. La política incluía el control estatal del crédito, el mercado de cambios y los precios, y se completaba con importantes medidas de acción social, como el Programa Alimentario Nacional (PAN), que proveyó de las necesidades mínimas a los sectores más pobres, afectados por la recesión y el desempleo. Con todo ello se apuntaba a mejorar la situación de los sectores medios y populares y a satisfacer las demandas de la justicia y equidad social, que habían sido banderas en la campaña electoral.

Los empresarios cuestionaron en general el gasto y la intervención estatal. La CGT se movilizó tanto por razones sindicales como políticas. Aunque sus acuerdos eran mínimos, coincidieron en hacer fracasar la política de concertación sectorial a la que había apostado Grinspun y su equipo. Todo ponía de manifiesto la insuficiencia de una política que no tomaba en cuenta la radical transformación de las condiciones de la economía luego de 1975. Con la deuda externa se osciló entre dos caminos. Se trató de lograr la buena voluntad de los acreedores y también se los amenazó con la construcción de un “club de deudores” latinoamericano, que repudiara la deuda en conjunto. Ambos resultados igualmente inconducentes.

A principios de 1985, cuando la inflación amenazaba desbordar en una hiperinflación, la conflictividad social se agudizaba y los acreedores externos hacían sentir en forma energética su desconformidad, el presidente Alfonsín reemplazó a su ministro de Economía por Juan Sourrouille. Por esos meses se asumió otro elemento conflictivo: la agitación militar, en vísperas del inicio del juicio a las Juntas. A fines de abril se denunció un posible intento de golpe de Estado contra la frágil democracia: la civilidad, convocada a la Plaza de Mayo para defender al gobierno, recibió el sorpresivo anuncio del inicio de una “economía de guerra”. El 14 de junio de 1985, Sourrouille anunció el nuevo plan económico, bautizado como Plan Austral.

Su objetivo era superar la coyuntura adversa y estabilizar la economía en el corto plazo a través de un fuerte shock, de modo de crear las condiciones para poder proyectar transformaciones más profundas. Lo primero era detener la inflación, reduciendo las expectativas inflacionarias que la impulsaban. Se congelaron simultáneamente los precios, salarios y tarifas de servicios públicos, se regularon los cambios y las tasas de interés, se suprimió la emisión monetaria para equilibrar el déficit fiscal y se eliminaron los mecanismos de indexación desarrollados durante la etapa de la alta inflación y responsables de su mantenimiento inercial. Como símbolo de inicio de una nueva etapa, se cambió la moneda y el peso argentino fue reemplazado por el austral.

No hubo caída de la actividad ni desocupación, que con frecuencia acompañaban los planes de estabilización, pero tampoco se afectó a los sectores empresariales. Los salarios de los empleados estatales fueron congelados más estrictamente que los del sector privado, pero no hubo despidos; la recaudación mejoró, por la fuerte reducción de la inflación, sumado a algunos impuestos excepcionales, aunque no hubo drásticas reducciones en los gastos del Estado. El gobierno mantuvo todos los mecanismos de promoción y agregó otros nuevos, para estimular las exportaciones industriales, cuyo incremento debería ayudar a mejorar el balance de pagos. Se trataba del “plan de todos”: entre todos, con solidaridad y sin dolor, se podían solucionar los problemas más complejos. El gobierno obtuvo su premio en las elecciones parciales de noviembre de 1985. Logró un claro éxito electoral que significaba el apoyo general de la ciudadanía a la política económica.

La placidez duró poco. Ya desde fines de 1985, se advirtió la vuelta incipiente de la inflación. Influyó el derrumbe de los precios mundiales de los cereales, que obligó al Estado a eliminar una fuente de ingresos, pues los productores rurales estaban al borde de la ruina. Tampoco hubo inversiones significativas de los grandes empresarios, que aceptaron los beneficios recibidos sin dar mucho a cambio. Renacieron las pujas sectoriales, que realimentaron la inflación: la CGT y los empresarios, ambos coincidían en un reclamo común contra el Estado. El plan, eficaz para la estabilización rápida, no preveía cambiar las condiciones de fondo.

Desde fines de 1986 el gobierno comenzó a considerar la posibilidad de reformas mayores. Los distintos regímenes de promoción, basados originariamente en criterios de interés general, se fueron convirtiendo en prebendas que favorecían a grupos con capacidad para presionar al gobierno y hasta de dirigir sus decisiones. Las empresas del Estado sumaban otro elemento en la conformación del considerable déficit fiscal: el sobreempleo, fruto de su larga relación de colusión con los sindicatos.

Hubo un proyecto para unificar y disciplinar su manejo financiero, y otro para incorporar empresas extranjeras al manejo de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y de Aerolíneas Argentinas. Se intentó reactivar la inversión extranjera, especialmente en el área petrolera y también se esbozaron planes de reforma fiscal más profunda y desregulación de la economía. A medida que se hacía más clara la necesidad de encarar soluciones de fondo, el gobierno radical descubría que sus bases de apoyo eran más tenues.

Los proyectos reformistas estaban en sintonía con los reclamos del FMI y también con el ánimo crecientemente liberal de los empresarios. A principios de 1987, el gobierno decidió incorporar a hombres de los sindicatos más importantes y de los grandes empresarios.

En lo inmediato, se consiguieron éxitos políticos importantes. Hubo una tregua social, y cuando en abril de 1987 los militares desafiaron al poder civil, por primera vez desde 1930 no encontraron ningún apoyo en la sociedad.

En septiembre de 1987, luego de la derrota electoral, la posición del gobierno se debilitó aceleradamente. En noviembre, los gremialistas se alejaron del gabinete. El peronismo se negó a respaldar reformas cuyo costo social era evidente. De ese modo, la proyectada reconciliación con las corporaciones, que supuso un fuerte deterioro de la imagen del gobierno radical ante la ciudadanía, tampoco rindió los frutos esperados en el terreno económico, donde la inestabilidad y la sensación de falta de gobernabilidad fueron crecientes.

Inicialmente el gobierno radical solo había sido tolerado por las grandes corporaciones, de modo que debía respaldarse en su poder institucional. Pero allí también su apoyo era limitado. Debido a que no hubo acuerdos previos sobre cómo se conduciría el proceso político, fue más difícil aun llegar a ellos cuando cada partido procuró desempeñar con eficacia sus respectivos papeles de oficialismo y oposición.

Los grandes apoyos del gobierno se encontraban en el radicalismo y en el amplio conjunto de la actividad que directa o indirectamente lo había respaldado. La UCR había sido tradicionalmente el gran partido de la ciudadanía, y el que contaba con mayores antecedentes y capacidades para organizarla. En realidad, se trataba de un partido complejo y fragmentario, en el que coexistían variadas tendencias y donde se representaban múltiples intereses.

Desde 1983 Raúl Alfonsín estableció un fuerte liderazgo partidario, capitalizando el apoyo que había ganado en la ciudadanía. Más notable fue la acción de un grupo de dirigentes jóvenes, provenientes en su mayoría de la

militancia universitaria, que integro la Junta Coordinadora Nacional, la "Coordinadora". El grupo conservaba rasgos de la etapa anterior a 1975: confluencia de tradiciones socialistas y antiimperialistas, sentido de la militancia organica y de la disciplina partidaria, fue en la movilizacion de las masas. La Coordinadora gano mucho poder y suscitó resistencias internas, en un contexto de disputa partidaria en el que la unidad, difícil y precaria, solo podía mantenerse gracias a la conducción, fuerte y en cierto modo caudillesca, de quien era a la vez presidente de la Nación y del partido.

El pacto entre Alfonsín y la civilidad se selló en la campaña electoral de 1983, con los actos masivos y con la fe común en la democracia como panacea. Alfonsín siguió utilizando esa movilización, trabajó intensamente en su educación, en la constitución de la civilidad como actor político maduro y consciente. Para la movilización callejera, la Coordinadora era insustituible, pero para esta otra labor necesitó el apoyo de un conjunto de intelectuales. Estos le suministraron los insumos de ideas, reelaboradas y volcadas con singular pericia por un dirigente que estaba convencido de que el único gobierno legítimo era el que se basaba en el convencimiento de la sociedad por medio de argumentos racionales.

Desde el Plan Austral, y sobre todo luego del triunfo electoral de noviembre de 1985, su discurso se orientó hacia los temas del pacto democrático, la participación y la concreción, y hacia la nueva meta de modernización, un concepto que incluía desde las estructuras institucionales hasta los mecanismos de la economía, en los que las cuestiones de la reforma del Estado, la apertura y la desregulación aparecían formulados en el contexto de la democracia, la equidad y la ética de la solidaridad. Tales temas se manifestaron en una serie de reformas concretas: la reforma del Estado, el traslado de la Capital al sur o la reforma constitucional, no concretadas pero con las que logró mantener la iniciativa de la discusión pública. En todos ellos subyacía una inquietud común: la convergencia de distintas tradiciones políticas detrás de un único proyecto democrático y modernizador. También una tentación: la articulación de esas tradiciones en un movimiento político que las sintetizara y que comenzó a denominarse el tercer movimiento histórico.

Este planteo, hizo rechazar la estructura del partido gobernante. Pero sobre todo, la apelación a la movilización de la civilidad suscitó dudas sobre su relación armónica con el proceso de institucionalización democrática. Dado el equilibrio de fuerzas y el reparto de posiciones institucionales, el gobierno a menudo debió elegir entre atenerse estrictamente a las normas republicanas y aceptar una concertación que lo alejara de sus objetivos programáticos, o combinar aquel apoyo con el amplio margen de autoridad presidencial que las normas y los antecedentes acordaban, y así presionar al Congreso desde la calle, pasarlo por alto, orientar quizás a la Justicia. En varios casos, el gobierno de Alfonsín avanzó por este camino, pero sus sólidas convicciones éticas lo frenaron pronto. Las frágiles bases de su poder recidían en la coherencia y la tensión de esa civilidad que lo había consagrado presidente.

Un heterogéneo conjunto de fuerzas provenientes de la izquierda y de la experiencia de 1973 se nucleó en torno del Partido Intransigente. Inicialmente esta fuerza aspiró a capitalizar la prevista disgregación del peronismo, pero luego se dedicó a señalar la infidelidad del gobierno al programa primigenio y a radicalizar las consignas de los derechos humanos. No lograron, sin embargo, constituir un polo alternativo: el PI se disgregó y fue absorbido por el peronismo renovado.

A la derecha, creció la Unión del Centro Democrático. Esas ideas, en el contexto de la crisis del bloque soviético y del Estado de bienestar, fueron traducidas aquí de una manera novedosa y atractiva por un partido que encontró en el contexto de la democracia la fórmula de la popularidad, particularmente entre los jóvenes. Su éxito electoral fue relativo, aunque pudo aspirar a convertirse en la tercera fuerza, que arbitraria entre radicales y peronistas. Mucho más rotundo fue su éxito ideológico.

Al competir con la fuerza gobernante en el terreno de la opinión pública, los partidos y las instituciones, izquierdas y derechas contribuyeron a reforzar la institucionalidad. Inmediatamente después de las elecciones de 1983, y en medio de un gran desconcierto de profundas divisiones, predominaron quienes quisieron combatir al gobierno desde las viejas posiciones nacionalistas de derecha, y alteraron el acuerdo de políticos y sindicalistas peronistas con los militares y con quienes se habían convertido en sus voceros. En ese contexto, se

opusieron al acuerdo con Chile y fueron categóricamente derrotados en el plebiscito. De manera progresiva fue articulándose dentro del peronismo una corriente opuesta que combatió duramente con la conducción oficial, hasta que a fines del año 1985 conquistó la preeminencia en el partido. El peronismo renovador se proponía adecuar el peronismo al nuevo contexto democrático. Cuando se produjo la crisis militar de Semana Santa de 1987, los dirigentes renovadores manifestaron una solidaridad total con la institucionalidad democrática y respaldaron sin condiciones al gobierno.

El año 1987 fue decisivo para el gobierno de Alfonsín. El episodio de Semana Santa representó la culminación de la participación de la civilidad. Concluyó definitivamente la ilusión del poder ilimitado de la democracia. Alfonsín perdió la exclusividad del liderazgo sobre la civilidad. Si bien los competidores de derecha e izquierda cosecharon algo, las mayores ganancias fueron para el peronismo renovador. En un clima de deterioro económico agudizado y de inflación creciente, las elecciones de septiembre de 1987 les dieron un triunfo si no categórico, importante en términos de poder: el radicalismo perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y el control de todas las gobernaciones, con excepción de las de Córdoba y Río Negro, junto con la Capital Federal, en los que logró triunfar.

El gobierno sintió fuertemente el impacto de una derrota que cuestionaba su legitimación y su capacidad de gobernar. El plan económico lanzado en julio y completado en octubre le dio un momentáneo respiro, sobre todo porque la oposición peronista aceptó compartir la responsabilidad en la aprobación de los nuevos impuestos necesarios para equilibrar las cuentas del Estado. En el propio partido, alcanzaron sus voces los disconformes con la conducción de Alfonsín, quien rápidamente propuso como candidato presidencial para 1989 al gobernador de Córdoba, Eduardo Angeloz.

La cuestión militar, tuvo dos nuevos episodios. En enero de 1988, el teniente coronel Aldo Rico, huyó de su prisión y volvió a sublevarse en un lejano regimiento en el nordeste. Rico fue perseguido por el Ejército, y luego de un breve combate, se rindió y fue encarcelado en un establecimiento penal.

A fines de 1988, hubo una nueva sublevación, encabezada por el coronel Mohamed Ali Seineldin. Se sublevó en un regimiento próximo a la Capital y reclamó una amplia amnistía, una reivindicación de la institución y una renovación de los mandos, pues simultáneamente se dirimiera una cuestión interna. El resultado final fue incierto. Desde el punto de vista del gobierno, quedaba claro que no acertaba a conformar ni a la civilidad ni a los oficiales. En definitiva, el proyecto de reconciliar a la sociedad con las Fuerzas Armadas había fracasado.

En enero de 1989 un grupo terrorista asaltó el cuartel de La Tablada en el Gran Buenos Aires, y el ejército encontró la ocasión para realizar una aplastante demostración de fuerza, que culminó con el aniquilamiento de los asaltantes. El reconocimiento que recogió por la acción fue el primer indicio del cambio de prioridades y valores en la opinión pública. Podía anticiparse que finalmente la cuestión militar abierta llevaría a la reivindicación de los militares, el olvido de los crímenes de la “guerra sucia” y el entierro de las ilusiones de la civilidad.

Carlos Menem, con un heterogéneo apoyo, explotando su figura de caudillo tradicional para diferenciarse de sus rivales modernizadores, y sin necesidad de precisar una propuesta o programa, ganó la elección interna y en julio de 1988 quedó consagrado candidato a presidente. En los meses siguientes extendió y perfeccionó su fórmula. Pero en público apeló al vasto mundo de los “humildes”, a quienes se dirigió con un mensaje de estilo mesiánico, con un despliegue escenográfico que realzaba su figura de santón, en el que la “revolución productiva” y el “salariazó” preanunciaban la entrada en la tierra de promisión. En suma, nadie podía asegurar que haría exactamente el candidato peronista en caso de resultar triunfante, pero estaba claro que sería pragmático y poco apegado a compromisos programáticos.

Eduardo Angeloz, su competidor, trató de capitalizar el temor que suscitaba el populismo de Menem y también intentó captar al electorado que criticaba las facetas más progresistas de Alfonsín.

En agosto de 1988 el gobierno lanzó un nuevo plan económico, que denominó “primavera”, con el propósito de llegar a las elecciones con la inflación controlada, pero sin realizar ajustes que pudieran enajenar la voluntad de la población. Al congelamiento de precios, salarios y tarifas se agregó la declarada intención de reducir

drasticamente el deficit estatal, condicion para lograr el indispensable apoyo de los acreedores externos, mucho mas remisos que antes. El plan marchó de entrada con dificultades: la predisposicion de los distintos actores a mantener el congelamiento fue escasa; los cortes en los gastos fiscales fueron resistidos, sobre todo por los aguerridos sindicatos estatales; la negociacion con las entidades financieras externas marchó muy lentamente, y los fondos prometidos llegaron con cuentagotas.

Se trataba en suma, de una situacion explosiva, que reposaba exclusivamente sobre la confianza existente en la capacidad del gobierno para mantener la paridad cambiaria. El 6 de febrero de 1989, el gobierno anuncio la devaluacion del austral e inicio un periodo en que el dolar y los precios subieron vertiginosamente y la economia entro en descontrol. Luego de largos periodos de alta inflacion, habia llegado la hiperinflacion, que destruyo el valor del salario y de la moneda misma y afecto la produccion y la circulacion de bienes.

En ese clima se voto el 14 de mayo de 1989. El PJ obtuvo un rotundo triunfo y Carlos Menem quedo consagrado presidente. La fecha prevista para el traspaso era el 10 de diciembre, pero pronto fue evidente que el gobierno saliente no estaba en condiciones de gobernar hasta esa fecha. A fines de mayo la hiperinflacion tuvo sus primeros efectos dramaticos: asaltos y saqueos a supermercados, duramente reprimidos. Poco despues, Alfonsín renuncio, para anticipar el traspaso del gobierno, que se concreto seis meses antes del plazo constitucional.

“La gran transformacion, 1989-1999”- Breve historia contemporanea de la Argentina

El 9 de julio de 1989, el presidente Alfonsín entrego el mando al electo Carlos Saul Menem. Se trataba de la primera sucesion constitucional desde 1928. Comenzo un nuevo ciclo de sucesivos gobiernos peronistas. Menem asumió en medios de la crisis hiperinflacionaria e inicio un vasto conjunto de reformas economicas y estatales, cuyas consecuencias se fueron manifestando gradualmente.

Mientras todo el mundo convertia sus australes en dolares, grupos de personas desesperadas asaltaron tiendas y supermercados, y la represion dejo varios muertos. Para Menem, ademas, estaba en cuestion el poder que habia generado en las urnas y que debia legitimar con una gestion eficaz.

Lo nuevo no era la crisis, sino su violencia y especularidad. Para enfrentarla, existia una receta generica, elaborada en el mundo. Reelaborada para America Latina en el llamado “Consenso de Washintong”, transmitida por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y difundida por economistas y periodistas. Los gastos del Estado Benefactor eran excesivos. La pertinaz inflacion habia desembocado finalmente en el colapso fiscal. La solucion consistia en una drastica reforma y un ajuste del Estado, que a la vez suprimiera el deficit fiscal y liberara a la economia de una tutela asfixiante.

Menem percibio el riesgo de la hiperinflacion y tambien la oportunidad: habia tanta necesidad social de orden publico y estabilidad que las reformas, hasta entonces rechazadas, resultarian tolerables, y ademas le permitirian reunir el apoyo necesario para consolidar su poder. Debia ganar la confianza del establishment economico, pero no lo ayudaban ni sus antecedentes ni tampoco su campaña electoral. Pero con su notable audacia dio un giro copernicano, anuncio la necesidad de una “cirugia mayor sin anestecia”, abjuro del “estatismo”, alabo la “apertura”, proclamo la necesidad y la bondad de las privatizaciones y se burlo de quienes se habian “quedado en el 45”, y confio el Ministerio de Economia a un alto directivo del grupo Bunge y Born, de quien se decia que traia un plan economico salvador.

El Congreso sanciono dos grandes leyes, que daban al Ejecutivo amplias prerrogativas. La ley de emergencia economica suspendio todo tipo de subsidios, privilegios y regimenes de promocion, y autorizo el despido de empleados estatales. La de reforma del Estado declaro la necesidad de privatizar una extensa lista de empresas estatales. El gobierno se concentro en la rapida privatizacion de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y de Aerolineas Argentinas. Asi, se convoco a grupos mixtos, integrados por empresarios locales, operadores internacionales expertos y banqueros que aportaban titulos de la deuda externa; estos fueron aceptados a su valor nominal. Se aseguro a las nuevas empresas un sustancial aumento de las tarifas, escasas regulaciones y una situacion casi monopolica. En poco mas de un año se habian privatizado la red vial, los canales de television,

buena parte de los ferrocarriles y de las áreas petroleras de YPF. También se proclamó la apertura económica, atenuada por las urgencias fiscales.

Pese a la mejora en los ingresos, sobre todo por los fondos de las privatizaciones, no se alcanzó el equilibrio fiscal y la inflación se mantuvo alta. A fines de 1989 se produjo una segunda hiperinflación, con saqueos y pánico. El nuevo ministro de Economía, Antonio Erman González, con el Plan Bonex se apropió de los depósitos a plazo fijo de los ahorristas, que cambió por bonos en dólares a largo plazo. A eso agregó una fuerte restricción de los pagos estatales y de la circulación monetaria. La inflación se redujo, pero a costa de una fortísima recesión que había deprimido los ingresos fiscales. Para solucionarlo se apeló de nuevo a la emisión, y la inflación volvió a desatarse. A fines de 1990, con la economía otra vez en estado crítico, estalló el escándalo de Swiftgate.

El embajador estadounidense denunció que el frigorífico Swift era presionado por miembros del círculo presidencial que reclamaban coimas para permitir la sanción de determinados decretos.

A principios de 1991, el entonces canciller Domingo Cavallo se encargó del Ministerio de Economía. Encaró el problema de la inflación mediante la trascendente ley de convertibilidad. Se estableció una paridad cambiaria fija; emblemáticamente, un dólar equivaldría a un nuevo “peso”, y se prohibió al Poder Ejecutivo emitir moneda por encima de las reservas, de modo de garantizar esa paridad. Los resultados inmediatos fueron muy exitosos: cayó la inflación y también la fuga de divisas, volvieron los capitales emigrados, bajaron las tasas de interés, hubo una rápida reactivación económica y mejoró la recaudación fiscal.

La convertibilidad fue reforzada por otras dos disposiciones. La reducción general de aranceles concretó la tantas veces anunciada apertura económica. Se elevaron los impuestos más fáciles de cobrar -al valor agregado y a las ganancias-, a costa de mejorar el ahorro y la inversión o considerar algún criterio de equidad social.

Con las cuentas fiscales mejoradas y con suficientes pruebas sobre la seriedad del rumbo adoptado, el gobierno pudo renegociar su deuda externa, en el marco del Plan Brandy, acordando un plan de pagos razonable. La Argentina volvió a ser confiable para los inversores globales, en momentos en que una masa de dólares circulaba por el mundo a la búsqueda de “mercados emergentes” más rendidores que los metropolitanos. Entre 1991 y 1994, entró al país una cantidad considerable de dólares, con los que el Estado cumplió sus compromisos y saldó su déficit, y las empresas se reequiparon. La estabilidad lograda con la convertibilidad potenció el primer proyecto reformista, retomado por el ministro Cavallo. Este incorporó a un grupo numeroso de economistas y técnicos de alta capacidad profesional, lo dirigió de manera coherente y disciplinada y lo proyectó a diversas áreas del gobierno, logrando que estas se alinearan con su proyecto. Fue decisivo el apoyo del presidente Menem. Durante cuatro años, ambos se potenciaron mutuamente.

Para achicar el déficit fiscal, el Estado nacional transfirió a las provincias la mayoría de los servicios de salud y educativos, aunque sin incluir los recursos presupuestarios correspondientes. Continuó con la venta de empresas del Estado, pero la privatización de las de electricidad, gas y agua incluyó garantías de competencia, mecanismos estatales de regulación y control y la venta de acciones particulares, incluso se previó la participación de los sindicatos en alguna de las nuevas empresas. YPF fue privatizada por etapas. Primero se la fraccionó, se vendieron las refinerías y se entregó a los contratistas las áreas con reservas comprobadas de petróleo. Luego se vendieron las acciones; diversas agencias del Estado conservaron una cantidad importante, y los trabajadores otra parte. Con los ingresos se saldaron deudas con los jubilados, lo que sirvió para atenuar las opiniones adversas.

Se encaró la privatización del régimen previsional, lo que implicaba un problema fiscal inmediato, al perderse los aportes de los trabajadores; pero se esperaba un beneficio en el mediano plazo, cuando estas nuevas empresas privadas de jubilación movilizaran una considerable masa de ahorro interno. Con las provincias se firmó un Pacto Fiscal, para que acompañaran la política de reducción de gastos, pero se tuvo una amplia tolerancia con el empleo de recursos fiscales para paliar los efectos del ajuste.

El Producto Bruto creció en forma sostenida, a tasas más respetables, la inflación cayó drásticamente, creció la actividad económica y el Estado mejoró su recaudación y hasta gozó de un par de años sin superávit fiscal, en

buena medida debido a los ingresos por la privatización de las empresas. El consumo se expandió, con créditos pactados en dólares; muchas personas viajaron al exterior y otras compraron artículos importados, abarrotados por la baja de aranceles.

Cada privatización estuvo acompañada de una elevada cantidad de despidos. Los efectos se disimularon al principio, por las importantes indemnizaciones pagadas, pero explotaron a partir de 1995. Cerraron muchas empresas privadas, que sufrieron la competencia de los productos importados; sobrevivieron las que tecnificaron, incorporaron nuevas maquinarias y redujeron su personal.

En estos años el Estado desplegó una importante actividad, dirigida a aliviar los costos de la transición a algunos sectores o empresarios seleccionados y a paliar las consecuencias sociales más duras. La Secretaría de Desarrollo Social puso en marcha distintos planes destinados a lo que se llamó la reconversión de los desocupados, pero fue una acción esporádica e ineficiente. Más consistente fue el apoyo a los grandes empresarios.

La sobrevaluación del peso, consecuencia de la convertibilidad, afectó a los empresarios. La solución tradicional -una devaluación que hiciera más competitiva la producción local- era imposible, y la convertibilidad se iba convirtiendo en un lecho de Procusto. Eran indispensables nuevos préstamos. Pero al apelar a este curso, cualquier oscilación global produciría una cascada de efectos locales desastrosos: por la convertibilidad, la economía argentina se había tornado extremadamente vulnerable.

Esa vulnerabilidad se manifestó a principios de 1995 por el “efecto Tequila”: una devaluación en México produjo una corrida mundial de inversores que abandonaron los mercados emergentes. En Argentina hubo un retiro masivo de fondos externos, se precipitó el déficit fiscal y la recesión, y la desocupación trepó al 18%. El gobierno actuó rápida y eficientemente: hubo una poda presupuestaria, reducción de sueldos estatales, fuerte aumento de impuestos y un consistente apoyo del FMI y del Banco Mundial. En lo inmediato, la “crisis del Tequila” fue superada. Pese a la corrida, el sistema bancario pudo salvarlo. Muchos de los dólares fugados retornaron. El Producto Bruto, que cayó el 4% en 1995, se recuperó en 1996 y avanzó con fuerza en 1997, creciendo por encima del 8%. Pero la desocupación no cedió, y se mantuvo apenas por debajo del 15%.

Por su eficacia, el gobierno fue premiado electoralmente en 1995 y Menem fue reelecto con amplitud. Pero quedó claro que la estabilidad económica dependía de la convertibilidad. La economía argentina dependía del flujo de capitales externos y de las volátiles decisiones de los inversores.

La restricción del flujo de inversiones significó recesión, penuria fiscal y mayores dosis de ajuste. Los acreedores reclamaron ajuste en las cuentas fiscales. En ese punto el gobierno abandonó el diseño de largo plazo y se limitó a capear la situación, día a día. Quien primero sintió el impacto fue Cavallo. El ministro salió con éxito de la crisis 1995. Inició una nueva serie de privatizaciones, declaró la emergencia previsional y restringió los fondos transferidos a los gobiernos provinciales; muchos no pudieron los sueldos de los empleados, y finalmente se vieron obligados a realizar su propio y doloroso ajuste. Los políticos se hicieron eco del fuerte malestar social, recordaron sus viejos discursos y desde el Congreso centraron sus baterías en el ministro. Cavallo se enfrentó también con los allegados que rodeaban a Menem, y desde la llamada “carpa chica” gestionaban negocios poco claros y muy rentadores. Con la ley de patentes medicinales, Cavallo chocó con los senadores, encabezados por Menem. Con la privatización del Correo, chocó con el empresario postal Alfredo Yabrán. La relación con Menem se rompió, y en julio de 1996 Cavallo fue reemplazado por Roque Fernández, un economista ortodoxo que presidía el Banco Central.

Fernández se preocupó principalmente del ajuste de las cuentas fiscales. Elevó los impuestos, redujo el número de empleados públicos y recortó el presupuesto. Impulsó las privatizaciones pendientes: el Correo, los aeropuertos, el Banco Hipotecario Nacional, y vendió las acciones de YPF en poder del Estado. El sector político del gobierno, preocupado por las futuras elecciones presidenciales, puso obstáculos. Así fracasó en el Congreso el proyecto sobre la flexibilización laboral, una cuestión tan emblemática para los empresarios y para el FMI como para los sindicalistas. Fernández siguió defendiendo la ortodoxia presupuestaria: se opuso a una ley sobre mejoramiento salarial para los docentes y rechazó un ambicioso proyecto de construcción de 10 mil

km de autopistas, que hubiera significado un rapido descenso de la desocupacion, pero tambien un buen aumento del deficit.

Luego de electo, Menem procedio a ampliar los margenes de poder del poder Ejecutivo. Las leyes de emergencia y de reforma le dieron importantes atribuciones, que manejo discrecionalmente. Con ampliacion de la Corte Suprema, se aseguro la mayoria; la Corte fallo a favor del Ejecutivo en cada situacion discutida, y hasta avanzo por sobre jueces y Camaras. Para eliminar controles y restricciones, removio a casi todos los miembros del Tribunal de Cuentas y al fiscal general. Mas tarde, cuando el Congreso empezo a cuestionar algunas de sus iniciativas, Menem recurrio a los vetos parciales de las leyes y a los Decretos de Necesidad y Urgencia.

A eso le sumo un estilo de gobierno singular. Se concentro en la politica pero no se ocupo mucho de las cuestiones de asministracion o gestion. Despues de separarse de su esposa, a la que debio desalojar de la quinta de Olivos, transformo esta residencia en una suerte de corte, rodeado de un circulo intimo, con el que tambien recorrio el mundo a bordo de un nuevo y lujoso avion presidencial. "El jefe", como empezo a llamarse, concedia a sus fieles proteccion e impunidad, y distribuia con generosidad los frutos de un trafico de influencias practicado sin disimulo.

Los politicos se quejaron de los costos sociales y politicos de la gran transformacion y tambien del recorte de los recursos que ellos manejaban discrecionalmente. Preocupado por los inversores externos, Cavallo trato de corregir las formas mas groseras de la corrupcion y de los escandalos.

El talento de Menem se manifesto, sobre todo, en su capacidad para hacer que el peronismo aceptara las reformas, que suponian un giro radical en sus tradiciones. No necesito ni la Plaza ni el balcon para comunicarse facilmente con la gente, mas alla de sus identidades politicas. Por ejemplo, jugaba al futbol o al basquet, o visitaba los programas de television populares opinando sobre los temas mas diversos y agregando aqui y alla su coletilla politica. Atento a los humores y a las demandas de la sociedad, percibidas a traves de la prensa o de las encuestas de opinion, daba una respuesta rapida, que no requeria de mucha deliberacion. Demostro que, para gobernar, en ultima instancia, podria prescindir del peronismo y sus cuadros.

Los recursos del Estado prebendario fueron ampliamente usados para construir la jefatura. El movimiento "renovador" se disolvio, y muchos de sus dirigentes se incorporaron a la caravana menemista. En la provincia de Buenos Aires, Cafiero fue reemplazado por el vicepresidente Duhalde. Ayudado por el ya mencionado Fondo de Reparacion Historica, Duhalde contruyo en la provincia un solido aparato politico y se perfilo como candidato a la sucesion presidencial.

Fuera del peronismo, la oposicion politica fue minima. La UCR no pudo remontar el descredito de 1989, y en las elecciones de 1991 solo gano en la Capital Federal, Cordoba, Rio Negro, Chubut y Catamarca. Los radicales no sabian como enfrentar a Menem, que llevaba adelante de manera brutal pero exitosa la politica reformista que Alfonsin intento encarar en 1987; las diferencias de su ejecucion, aunque eran importantes, no alcanzaban para sustentar un argumento opositor.

En 1990 Menem clausuro el flanco militar y cerro, de un modo inesperado, el proceso iniciado en 1983. La cuestion militar tenia dos aspectos: el castigo a los responsables del terrorismo de Estado y el sostenido reclamo de los "carapintadas", que apuntaba a la remocion de la conduccion del Ejercito. Antes de llegar al gobierno, Menem habia establecido solidos contactos con ellos. A fines de 1989 los indulto, junto con militares procesados, jefes guerrilleros y responsables de la guerra de Malvinas, dentro de su politica mas general de reconciliaron. Poco antes de este segundo indulto, se habian sublevado nuevamente, reclamando el cumplimiento de una promesa de Menem: remover el alto mando militar y entregarles la conduccion del Ejercito. Menem ordeno una represion en regla y los mandos militares acataron la orden.

Poco despues asumió la jefatura del Ejercito el general Martin Balza, que logro mantener la disciplina y la subordinacion del Ejercito al poder civil. El presupuesto militar fue drasticamente reducido. En 1944 murio en Zapala el conscripto Omar Carrasco, victima de los malos tratos; el escandalo, cuando Menem preparaba su

reeleccion, culmino en la supresion del servicio militar obligatorio y su reemplazo por un sistema voluntario profesional.

En 1955, Balza realizo una critica de la accion del Ejercito y afirmo que la “obediencia debida” no justificaba los actos aberrantes cometidos. Coincidió con la confesion de un oficial de Marina, quien declaro haber participado en los llamados “vuelos de muerte”.

Menem encontro apoyo en la Iglesia, en el cardenal Antonio Quarrancino. Un grupo de obispos, que crecio a medida que se agudizaban los efectos sociales del ajuste y la reforma, comenzo a reclamar politicas compensatorias. Quarracino moderó este coro de disconformes, y evito pronunciamientos masivos de la Conferencia Episcopal.

Otro apoyo importante lo obtuvo de los presidentes estadounidenses de entonces. Menem establecio excelentes vinculos personales con George Bush, los recreo rapidamente con Bill Clinton. Argentina abandono el Movimiento de Paisés no Alineados, se clausuro el Proyecto Condor de construccion de misiles, se respaldaron todas las posiciones internacionales de Estados Unidos y se lo acompañó en sus empresas militares. Involucrarse en las cuestiones de Medio Oriente tuvo un precio: dos terribles atentados con explosivos, uno en la embajada de Israel y otro en la Asociacion Mutual Israelita Argentina (AMIA), sede de las instituciones asistenciales judias, probablemente hayan sido consecuencias derivadas de aquellas acciones.

Pese a la dureza del ajuste, el gobierno enfrento inicialmente escasa oposicion a las reformas. Hubo algunos incipientes movimientos de resistencia: los trabajadores de empresas privatizadas, empleados de estados provinciales, con problemas para cobrar sus sueltos, jubilados y docentes. La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y luego el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) encabezado por Hugo Moyano, lograron coordinar sus propuestas en la Marcha Federal de julio de 1993, y un posterior paro general al que no adhirió la CGT.

Desde 1991, Menem comenzo a plantear la cuestion de su reeleccion, lanzando la consigna “Menem 95”. Se poyo en el precedente de un proyecto de Alfonsín para modernizar el texto constitucional. Trabajo con notable empeño en su reeleccion, supero todo tipo de dificultades, politicas y personales y finalmente lo logro. El peronismo encontro reticencias entre quienes aspiraban a sucederlo, y el establishment economico temio por los posibles conflictos aparejados. El problema principal estaba en el Congreso: la reforma constitucional debia ser habilitada en ambas Camaras, por dos tercios de votos. En 1993, Menem logro la aprobacion del Senado, y convoco a una consulta popular para presionar a los diputados de la oposicion. Sorpresivamente, en noviembre de 1993, Menem y Alfonsín acordaron en secreto -el llamado “Pacto de Olivos”- las condiciones para la reforma constitucional, que habria de contener la clausula de reeleccion y una serie de modificaciones impulsadas por la UCR para modernizar el texto y reducir el margen de discrecionalidad presidencial: eleccion directa, con balotaje, reduccion del mandato a cuatro años, con la posibilidad de una reeleccion consecutiva, creacion del cargo de jefe de Gabinete, designacion de los senadores por voto directo, eleccion directa del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, creacion del Consejo de la Magistratura y reglamentacion de los Decretos de Necesidad y Urgencia.

En las elecciones para convencionales de abril de 1994 el justicialismo perdio votos y la UCR sufrio un fuerte drenaje en beneficio del Frente Grande, opuesto a la reforma. Era una fuerza politica nueva, que reunio a los peronistas disidentes, grupos de socialistas y democristianos, y militantes de organizaciones de derechos humanos.

A principios de 1995, la ya mencionada “crisis del Tequila” dio nueva fuerza a la campaña reeleccionista, pues Menem paso a encarnar en la opinion el orden y la estabilidad, amenazados por la crisis. El triunfo de Menem fue muy claro: logro practicamente el 50% de los votos. El poder del jefe llego allí al cenit.

Al finalizar la decada de los noventa, estaba claro que Argentina era un país nuevo, en cualquiera de sus dimensiones. Las politicas del gobierno menemista, no siempre coherentes, contribuyeron a esa transformacion, pero no fueron el unico factor. El cambio estaba en marcha desde mediados de los años setenta. Menem le dio

un fuerte impulso al cambio y creo un modelo de gestión pública, social y económica que se mantuvo en la década siguiente.

En la economía, los cambios fueron consecuencia de las reformas del gobierno de Menem, y también del cese de la inflación, que había acompañado a los argentinos desde mediados de siglo. El Estado redujo la asistencia estatal a muchos sectores a través de promociones o subsidios, hubo una apertura de la economía a los capitales y a los bienes importados, y, como alternativa, se promovieron las exportaciones. Las consecuencias fueron variadas.

El golpe más fuerte lo recibió el tradicional sector industrial volcado al mercado interno. Una parte importante de las empresas debió cerrar y solo sobrevivieron las que pudieron convertir sus procesos de producción y adecuarse a los nuevos estándares mundiales. Algunas se convirtieron en importadoras; muchas se vendieron a empresas extranjeras. Estas empresas ocupaban tradicionalmente a muchos trabajadores, de modo que los cierres y la tecnificación produjeron una considerable reducción en el nivel y la ocupación, lo que, sumado a los despidos en las empresas estatales privatizadas, conformó un importante primer gran contingente de desocupados.

Hubo también ganadores. Los grandes grupos nacionales, contratistas del Estado, se asociaron con los consorcios internacionales para adquirir las empresas del Estado. Las automotrices, encontraron su solución integrando su producción con plantas brasileñas al amparo del Mercosur. El gobierno alentó en especial las exportaciones mediante subsidios destinados a los grupos fabricantes de celulosa, aluminio o acero, los productores de aceite o golosinas y las empresas petroleras.

Más significativa aún fue la transformación del mundo agrario. Los precios internacionales mejoraron desde 1966, y alentaron la profundización de los cambios productivos, ya iniciados en la década de 1970, sin que la caída fuerte de los precios desde 1999 produjera un retroceso. El motor estuvo en los cereales y las oleaginosas, y fue el resultado de una combinación virtuosa de nuevos procedimientos tecnológicos y formas de organizar la producción. Se incorporaron masivamente fertilizantes y herbicidas, lo que contribuyó a aumentar la productividad, junto con el empleo de maquinarias de mayor envergadura y velocidad. Por otra parte, se generalizaron los puentes de siembra, que permitieron combinar de manera efectiva distintos factores de la producción. La frontera agraria comenzó a expandirse, superando los tradicionales límites de la pampa húmeda. La soja, las oleaginosas, los aceites y los cereales incrementaron significativamente las exportaciones del sector. La eficiencia de este reducido sector industrial y agrario no mejoró la demanda del empleo ni derramó sus beneficios al resto de la sociedad. Los empresarios tampoco abandonaron sus antiguas prácticas prebendarias. El Estado renunció a la posibilidad de regular a los actores económicos. A esto se sumó la continua corrosión del instrumento estatal. La reforma en curso no mejoró su eficiencia, salvo quizá en lo fiscal, ni tampoco mejoraron los instrumentos estatales de control del gobierno. El Estado fue desentendiéndose de sus funciones sociales. Para achicar su déficit, transfirió su responsabilidad a los estados provinciales, y hubo un deterioro en la calidad de los servicios. Abandonó los principios de universalidad y asumió solamente la parte destinada a los pobres o indigentes, aunque de manera focalizada. El discurso neoliberal, al que se apeló, impuso en la opinión sus propuestas y su agenda de problemas. Todo el debate público se redujo a la economía, y sobre todo a la “estabilidad”.

La ejecución del Plan Alimentario Nacional (PAN) durante la gestión de Alfonsín reveló un problema hasta entonces insospechado: vastos sectores de la población padecían hambre. La hiperinflación de 1989 escenificó los cambios, que fueron profundizados por las políticas reformistas de los noventa. Tanto la apertura económica como las privatizaciones de empresas públicas agravaron los problemas de empleo, mientras que las reformas estatales provocaron el deterioro de los servicios de salud, educación y seguridad. La gran transformación dejó ganadores y perdedores. Mientras un vasto sector se sumergió en la pobreza o vio deteriorado su nivel de vida, muchos ricos prosperaron ostentadamente. Las actividades o las profesiones dejaron de indicar con certeza la posición social. En un mundo cambiante y ferozmente competitivo, la previsión dejó lugar a una suerte de vivir

al día, aprovechando las ocasiones, mientras se alejaba la tradicional expectativa de la casa propia, base del hogar burgués. A la precariedad laboral se le sumó la pérdida de la atención médica o de la jubilación.

La formación de un extenso mundo de pobreza fue el dato más significativo de la nueva sociedad. Este mundo era visible sobre todo en el conurbano de Buenos Aires, que ya alojaba a una cuarta parte de la población del país. Los cambios laborales fueron decisivos: reducción del empleo estable, aumento del trabajo ocasional y del empleo informal o “en negro”, baja de los salarios y aumento de la desocupación son los datos generales.

Otros cambios, más profundos, tuvieron que ver con los valores y proyectos de vida. El mundo de los ricos y exitosos, profusamente exhibido por la televisión, puso en cuestión las expectativas de la antigua sociedad: para que trabajar o ahorrar, para que estudiar, para que obedecer la ley, si no había recompensa probable. El cuestionamiento fue más fuerte entre aquellos jóvenes cuyos padres no llegaron a tener un trabajo estable. La misma combinación entre trabajo y delito ocasional era frecuente entre quienes salían cada día a buscar como mantener a su familia y eventualmente hacerse de un ingreso extra.

La retirada del Estado fue uno de los aspectos más dramáticos de la nueva situación. La atención médica declinó espectacularmente. Los hospitales públicos se deterioraron por sus escuálidos presupuestos y por la concurrencia masiva de los pobres carentes de obras sociales sindicales. Aunque también deterioradas, las escuelas fueron de las pocas instituciones dedicadas a ofrecer alimentación, salud o contención familiar, a costa de su función docente específica. Otros factores concurren en el deterioro de la escuela pública: un sindicalismo que concentró sus huelgas en las escuelas estatales, un sostenido deterioro de la formación docente y, por último, una reforma educativa mal encarada, que destruyó las instituciones existentes sin alcanzar a reemplazarlas por otras. Quien pudo pagarlo, abandonó la escuela pública, que perdió su tradicional papel integrador y se convirtió en otra institución reproductora de la desigualdad.

También retrocedió el Estado en su función de proveer seguridad. También contribuyó la propia corrupción de la institución policial, en particular de la provincia de Buenos Aires, y algo parecido ocurrió con la justicia. En la “zona gris”, el delito entró en la habitualidad social, y la policía participó de sus frutos y hasta lo organizó. El Estado reemplazó las costosas y complejas políticas universales de sus épocas de esplendor por intervenciones parciales y focalizadas, allí donde detectó emergencias.

La gran transformación tuvo efectos contundentes en la política, sobre todo en el Gran Buenos Aires, de decisivo peso electoral. La sociedad se articuló en torno de un complejo universo de sociedades de fomento, juntas municipales, cooperativas, comunidades parroquiales o evangélicas, centros sociales y culturales, clubes de fútbol o comedores. En este entramado social surgieron dirigentes, comúnmente llamados “referentes”, con capacidad para establecer un cierto orden y ayudar en la solución de las situaciones de emergencia. Su tarea requería relacionarse con la administración municipal que repartía de manera selectiva los bienes y servicios otrora asignados con criterios más universales. Quien más rápido se adecuó a estos cambios fue el peronismo, a través de una densa red de unidades básicas, promovidas por espontáneos punteros. Las unidades básicas fueron simultánea o alternativamente comedores, jardines o centros culturales, convertidos en potenciales beneficiarios de los subsidios destinados a las organizaciones gubernamentales.

Punteros y referentes sociales articularon las redes políticas y sociales. En una zona de legalidad imprecisa y lealtades cambiantes, circularon empleos precarios, bolsones de comida, medicamentos, favores variados y alguna protección judicial o policial. El individuo sufragante, presionado por la necesidad de asegurar la subsistencia y sin el amparo de otras instituciones, encontraba en la elección la ocasión para obtener, a cambio de su sufragio, algo de lo mucho que necesitaba.

A la desconfianza hacia lo que se llamó las “ideologías”, la propia época, se sumó el repliegue de la ciudadanía activa de 1983, desilusionada con las promesas no cumplidas de la democracia, y también la concentración del poder de decisión en la cúpula del gobierno. Los partidos acompañaron esta transformación y desarrollaron otras funciones, no menos importantes. Nuclearon a una cantidad de gente joven que había decidido hacer de la política su profesión.

En la segunda mitad de la década de 1990, se advirtió un cierto renacimiento del espíritu ciudadano, que se manifestó con intensidad en las cuestiones pendientes del terrorismo de Estado. Las organizaciones de derechos humanos trabajaron sobre una brecha legal de la ley de obediencia debida -la sustracción de niños- que permitió retornar la acción penal contra algunos de los responsables. Por otra parte, entre el activismo contestatario creció una nueva lectura del pasado, que recordó el carácter de militantes de las llamadas “víctimas inocentes”, soslayado en la versión del “Nunca Más”.

Una nueva crisis internacional desequilibró el edificio económico e inició una larga recesión. La devaluación de Tailandia en julio de 1997 dio lugar a una serie de derrumbes que minó la confianza global en las “economías emergentes” y reorientó las inversiones hacia mercados más seguros. Otro golpe duro fue la devaluación de la moneda brasileña, a principios de 1999. Cayeron las exportaciones y hubo un aluvión de importaciones. Las empresas locales reclamaron protección, y las más grandes consideraron la posibilidad de trasladarse a Brasil. La devaluación del peso era imposible por el régimen de la convertibilidad, que comenzó a mostrar su cara negativa.

Todo se sumó: aumento de los intereses de la deuda, escasez y alto costo del crédito, caída de los precios de productos exportables y recesión interna. Muchas empresas y bancos fueron vendidos a corporaciones multinacionales o a grandes fondos de inversión. El gobierno de Menem llegó a su final sin margen siquiera para hacer beneficencia electoral, y debió cerrar su presupuesto con un déficit abultado y una deuda externa que trepaba por entonces a 160 mil millones de dólares, el doble que 1994.

Menem empezó a sufrir una oposición social cada vez más activa. Las demandas confluyeron, se expresaron de manera novedosa y efectiva y ganaron una nueva legitimidad. Las manifestaciones en 1995 se hicieron más violentas. Al año siguiente, mientras las organizaciones gremiales confluían para realizar dos huelgas generales contra la ley de flexibilización laboral y la política económica, la oposición política impulsó una protesta ciudadana consistente en un apagón eléctrico y un “cacerolazo”. En esa época, la Iglesia cambió su anterior posición y empezó a sumarse a las protestas. En 1997, los gremios docentes instalaron frente al Congreso una “carpa blanca”, donde desarrollaron una protesta de gran repercusión en los medios y la opinión, sin el costo de la interrupción de las clases.

Por entonces, estaban surgiendo las organizaciones de desocupados, los “piqueteros”, identificados en primer lugar por una forma novedosa de protesta: el corte de la ruta. Los “piqueteros” cortaron las rutas, incendiaron neumáticos, organizaron ollas populares y reunieron además a jóvenes que nunca pudieron trabajar, a sus familiares y amigos, dispuestos a enfrentar a pecho descubierto, con piedras y palos, una represión que fue muy dura. El gobierno a veces apeló a la justicia y otras a la Gendarmería, y entonces hubo violencia, heridos y hasta muertos. Otras veces negoció, entregando ayuda en alimentos o ropa, y sobre todo contratos de empleo, los “planes trabajar”, transitorios y siempre insuficientes; con ellos lograba un alivio momentáneo del conflicto, pero a la vez generaba nuevos reclamos.

Simultáneamente, la perspectiva de las elecciones presidenciales de 1999 agitó el ambiente en el peronismo, donde comenzó a cuestionarse la “gran transformación”. Apenas reelecto Menem, el gobernador de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, anunció su candidatura, tomó distancia del “modelo” y reivindicó las banderas históricas del peronismo. Menem intentó jugar la carta de otra reelección, para tratar de conservar el poder hasta y final, y lanzó de modo informal su candidatura, distribuyendo millones de camisetas, globos y carteles que decían “Menem 99”.

Se inició una guerra violenta entre el antiguo jefe del justicialismo y quien pretendía sucederlo. Uno de los caminos fue la denuncia periodística de hechos de corrupción. Los medios difundieron ampliamente episodios como la venta clandestina de armas a Croacia y a Ecuador, las exportaciones ficticias de la “mafia del oro”, la “aduana paralela”, más tolerante que la oficial, o los sobornos de la empresa IBM a los directores del Banco Nación. Se trató de un “destape”, que instaló el tema de la corrupción en la agenda pública. La Policía de la Provincia de Buenos Aires, “la Bonaerense”, apareció implicada en varios casos de delincuencia, incluido el atentado a la AMIA, ocurrido en 1994.

Enfrascados en su conflicto, Menem y Duhalde se desentendieron de las instituciones, y también de la suerte del peronismo. Aunque fracasó, Menem pudo mantener viva la ilusión casi hasta el final de su período. Los gobernadores peronistas prefirieron tomar distancia del conflicto; abandonaron el proyecto de Menem, pero sin comprometerse con el destino de Duhalde.

En ese contexto, la propuesta del Frepaso, una coalición política reciente, logró dar forma al entusiasmo y la voluntad de colectivos. En 1995, el Frepaso había tenido en su debut un promisorio desempeño en las elecciones presidenciales, aunque casi en seguida se alejó su candidato presidencial. Convergió en el Frepaso disidentes del peronismo y del radicalismo, socialistas y otros grupos de izquierda, movimientos sociales, vinculados con la CTA, así como fragmentos de la maquinaria electoral justicialista. Recogió distintas aspiraciones del momento: la renovación de la política y de los hombres, y la constitución de una fuerza de centroizquierda, alternativa de los dos partidos tradicionales. Puso el acento en los problemas sociales y en las cuestiones éticas y políticas: la corrupción y el deterioro de las instituciones. Manejó con habilidad las nuevas técnicas de comunicación y logró imponer su mensaje.

La UCR logró superar los efectos del final de la presidencia de Alfonsín y obtuvo algunos éxitos electorales significativos, sobre todo con Fernando de la Rúa. Desde 1955, la UCR y el Frepaso iniciaron conversaciones para concentrar su acción y avanzar hacia una alianza formal, no fácil de establecer, pues la UCR tenía una vieja resistencia a los acuerdos políticos. Pero primero la convicción de que juntos podrían vencer al justicialismo. En 1997 crearon la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación, y obtuvieron un notable triunfo en las elecciones legislativas. La candidatura presidencial se resolvió mediante una elección abierta, en la que De la Rúa venció ampliamente a Fernández Meijide.

En las elecciones de octubre de 1999, De la Rúa y Álvarez obtuvieron un triunfo claro: el 48,5% de los votos, casi diez puntos más que Duhalde. De la Rúa recibió un poder limitado en lo político y condicionado por la crisis económica, que seguía su desarrollo. Pronto se agregaría la dificultad para transformar una alianza electoral en una fuerza gobernante. Mientras tanto, el segundo peronismo, replegado en sus bastiones, continuó desarrollando su proceso de transformación y arraigo.

“Democracias delegativas”- Herramientas

Las democracias delegativas surgieron en función de un hecho de la realidad; en este caso, la necesidad de caracterizar a los regímenes políticos postransicionales de la década de 1980 en América Latina.

Las democracias surgidas en aquellos años no se correspondían con los modelos democráticos existentes. Los expertos observaban que no se ajustaban las tipologías previas, por lo cual tuvieron que recurrir a un nuevo concepto.

América Latina ha sufrido una serie recurrente de crisis, no solo políticas sino ante todo económicas y sociales. Durante el siglo XX esas crisis se intentaron resolver a partir de la imposición de regímenes no democráticos, generalmente derivados de golpes militares. Pero a partir de la ola de democratizaciones que se inició en la década del 80, las respuestas no democráticas a la crisis dejaron de ser una opción viables. En adelante, la alternativa no democrática fue descartada. Por ello, también los golpes de Estado desaparecieron del mapa político de América Latina. Sin embargo, las transiciones democráticas no fueron sucesos tranquilos. No estuvieron exentas de crisis económicas o de representación.

Esta combinación del retorno de la democracia y crisis económica significaba que un país pasaba de una dictadura a una democracia en medio de una ilusión generalizada. Se recuperaba la libertad y la democracia pero estas venían con crisis económicas muy fuertes que esos gobiernos no podían resolver. En muchas ocasiones, estas situaciones de crisis no fueron pasajeras. Según O'Donnell, estas coyunturas produjeron un miedo y una tensión social tal que se esperaba que la crisis “se solucionara de alguna manera” como fuera.

Los contextos de gran temor y frustración predisponen a la ciudadanía para el surgimiento de democracias delegativas.

De modo que una crisis económica y social de gran magnitud puede predisponer a los ciudadanos para apoyar a quien otorgue una promesa de solución, sin preguntarse si esas promesas pueden ser o no efectivamente cumplidas.

Así como existen distintos tipos de Estado, también existen distintos tipos de democracias. Las democracias representativas se consolidaron a mediados del siglo XX en Europa continental. Son aquellos regímenes políticos en donde los ciudadanos, mediante el voto, eligen a sus representantes. La ciudadanía tiene posibilidad de controlar a los representantes y las instituciones democráticas permiten una convivencia entre oficialismo y oposición. Es de esperar que los representantes se encuentren observados por los representados, por ende, respondan a sus demandas. En este sentido, las democracias delegativas surgen en contraste con las democracias representativas.

Las democracias delegativas aparecen como algo distinto. Sin embargo, también presentan algunas similitudes. O'Donnell plantea que las DD "tienen muchas similitudes con otras especies de democracias ya reconocidas". Sin embargo, es necesario diferenciar estos casos de las democracias representativas. La preocupación de O'Donnell tiene que ver con el hecho de que estos regímenes se sostienen en la existencia de elecciones, pero no en los resultados posteriores. Esto implica que el candidato ganador no tiene que legitimarse una vez ganada la elección. Una vez en el cargo, ya no existe mucho espacio para cuestionarlo.

¿Que significa esto último en la práctica? las elecciones constituyen una suerte de firma de cheque en blanco a una élite política que accede a espacios de toma de decisiones.

La condición delegativa de estas democracias implica que la ciudadanía solo se limita a recomendar, confiar, otorgar, entregar, concretamente, delegar el poder soberano al ganador de una elección. La élite gobernante accede mediante mecanismos puramente democráticos. Pero una vez que las elecciones se llevan adelante y un gobierno es electo, queda poco espacio para que la ciudadanía participe del control de la toma de decisiones. En las DD no hay incorporación política de los sectores populares, excepto en lo discursivo.

Este tipo de regímenes no posee características autoritarias típicas de los regímenes democráticos. Las DD son un tipo disminuido de democracia. En las DD los ciudadanos se convierten en actores que intervienen en la entrega del poder, pero solo el día de la emisión de su voto. Y aunque son fundamentales en ese momento, sus motivos pueden ser relegados con posterioridad a la elección. Este es así porque el poder fue delegado en las autoridades y ellas serán las que entiendan la mejor forma de gobernar (y no la ciudadanía).

Las nuevas autoridades actúan libremente para llevar adelante el programa de gobierno que deseen. El gobierno es ejercido por los ganadores de la elección. El único obstáculo que tienen es el tiempo, dado que las elecciones son periódicas y existe efectivamente la posibilidad de ser reemplazados por otros partidos. También por el desgaste que le ocasiona una oposición, también electa de forma popular. Serán las relaciones entre los poderes, las que definan los rumbos de las políticas que se prosigan desde el gobierno.

Características que permiten distinguir las democracias delegativas de las democracias representativas:

- Las DD son una forma de manejar y ejercer el poder político. De aquí se desprende que la democracia delegativa se distingue por la forma en que se toman las decisiones. Su condición democrática es innegable, son gobiernos electos mediante elecciones libres, limpias y competitivas. Además, existen libertades civiles y políticas. En las DD, así como en las democracias representativas, los ciudadanos tienen la facultad de reunirse, agruparse políticamente y competir por el voto popular. Sin embargo, las decisiones en este tipo de regímenes no se toman teniendo en cuenta la diversidad de opiniones en la ciudadanía. Esto significa que solo una persona o un grupo de personas toman las decisiones.
- *La democracia delegativa se distingue por la forma en la que se toman las decisiones.* En las democracias representativas, la toma de decisiones requiere del acuerdo de los diferentes partidos políticos. En las DD esto no sucede. Principalmente porque el presidente tiene el derecho de tomar las decisiones que crea posibles para el país basándose en sus propias ideas, métodos y acciones. No hace falta que consulte o atienda el reclamo de nadie. La idea central es que existe una necesidad de salir de la situación crítica de cualquier manera. Y la elección de un presidente fuerte, supone una salida fácil.

Así, se vota a alguien mas allá de su discurso. Es por esto que la democracia delegativa es asociada por varios con una lógica hiperpresidencialista.

- En las DD se implementa, generalmente, un sistema de elección mayoritario para sus presidentes, como la doble vuelta (balotaje). En la segunda vuelta, un presidente obtendrá cifras superiores al 50%. Si se dieran elecciones donde el ganador de una elección presidencial se consagra sin grandes diferencias de su competidor más cercano, toda la estrategia de toma de decisiones se vería cuestionada. *En las DD, los liderazgos son carismáticos y, además, concentran en ellos todo el saber y la decisión sobre cómo salir de la crisis.*
- Otro atributo de las DD es que estimula la aparición de dicotomías de tipo “patria-antipatria” o “nación-antinación”. Una suerte de polarización social entre quienes apoyan las decisiones presidenciales y quienes no lo hacen. En las DD, quien ocupa la presidencia por el período constitucionalmente establecido afirma que no representa a ningún partido, sino a la Nación en su conjunto. Esta idea de suma de la totalidad de las voluntades hace que la disidencia, por lo menos en términos de discurso, sea negativa. El uso persistente del lenguaje de crisis y el recurso de invocar constantemente los miedos desatados por la crisis son parte de la estrategia de sostenimiento de este régimen. En las DD, no estar de acuerdo con la decisión presidencial es no estar de acuerdo con la Nación. Quien se convierte en presidente, se convertirá en la imagen del Estado, encarnará a la Nación y por ello, la ciudadanía o los poderes que deseen contradecirlo deberán tener en claro que lo que contradicen es a la Nación. *En las DD el presidente es la encarnación del país y del interés general. Contradecirlo es contradecir a la Nación.*
- Otra característica de las DD es la negación de las instituciones democráticas. En las DD, las decisiones presidenciales son las “mejores” para el país. Por eso, los obstáculos a ese tipo de decisiones son considerados dañinos. La justicia, el parlamento, los opositores, todos ellos obstáculos que no deben ser respetados si contradicen al presidente. En una democracia representativa, las instituciones democráticas son espacios para la revisión de las decisiones del Poder Ejecutivo. En una democracia delegativa, estas mismas instituciones son espacios de dilación de la toma de decisiones, o bien de cuestionamiento al régimen. Si el Congreso o el Poder Judicial no acuerdan con lo que decidió el Poder Ejecutivo, no están fortaleciendo el régimen. Muchas veces, los grupos económicos y la prensa resultan obstáculos para el ejercicio de la democracia delegativa. Por lo general, al no mediar instituciones como el Congreso o el Poder Judicial, las políticas públicas son diseñadas e implementadas de forma abrupta, cambiante y sin consulta. *En las DD la única institución legítima es la presidencia; el resto debe obedecer o apartarse de las decisiones del Estado.*
- Las DD se caracterizan por su condición movimentista. Significa que se apoyan en movimientos sociales, no en partidos políticos. Esto les permite ampliar la cantidad de individuos que apoyan al candidato. Los movimientos, a diferencia de los partidos políticos, permiten una mejor integración de las diferencias entre sus componentes. Los partidos políticos son considerados obstáculos para la toma de decisiones porque, en general, solo integran a personas que coincidan entre ellas y rechazan quienes piensan distinto. El presidente se sostiene en el apoyo de un movimiento pero no se limita a este. El gobierno se sostiene más allá del partido. *En las DD, el presidente se sostiene en movimientos amplios y heterogéneos más que en partidos políticos.*

Si las DD surgen como la respuesta a una crisis, una vez superada la crisis, el auge del modelo delegativo empieza a caer. La posibilidad de sostener este modelo en el tiempo es poco probable. Sobre todo, porque la oposición podrá encontrar ecos en los cuestionamientos al accionar unilateral de los presidentes. Existiendo elecciones libres, la ciudadanía podría efectivamente votar por una alternancia. Las tensiones generadas por el discurso del presidente en las DD generan cansancio y un desgaste en la población que impactan en la desacreditación del liderazgo presidencial, que es el sostenimiento de la democracia delegativa.